

SENADO DE PUERTO RICO

DIARIO DE SESIONES

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA DUODECIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA TERCERA SESION ORDINARIA AÑO 1994

VOL. XLV

San Juan, Puerto Rico

Martes, 10 de mayo de 1994

Núm. 42

A las diez y treinta y ocho minutos de la mañana (10:38 a.m.) de este día, martes, 10 de mayo de 1994, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, Presidente Accidental.

ASISTENCIA

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández, Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Noguerras, Hijo; Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Roberto Rexach Benítez, Marco Antonio Rigau, Ramón Luis Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique

Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Kenneth McClintock Hernández, Presidente Accidental.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ):
Se reanudan los trabajos del Senado.

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas:

De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación, con enmiendas, del P. del S. 519 y sin enmiendas, la R. C. de la C. 32.

De la Comisión de lo Jurídico, cuatro informes, proponiendo la no aprobación, de

los P. del S. 117, 118, 175 y 251.

De la Comisión de Corporaciones Públicas, un informe, proponiendo la aprobación, sin enmiendas, del P. del S. 723.

SR. RODRIGUEZ COLON:
Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ):
Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON:
Señor Presidente, no ha circulado la Relación de Proyectos, pero sí hay la Relación de Mociones, Felicitación, etcétera, solicitamos que la misma se dé por leída y se tramite conforme lo dispone el Reglamento.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ):
¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO Y TRISTEZA PESAME

La Secretaría da cuenta con la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza o pésame; de la lectura se prescindió a moción del señor Charlie Rodríguez Colón.

Por el senador Charlie Rodríguez Colón:

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Blanca Pérez Molinary, con motivo del fallecimiento de su querido hermano, Jesús (Eggy) Pérez.

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su dirección conocida en Cond. Intersuite, Apt. 6-I, Marginal Los Angeles, Carolina, Puerto Rico 00979."

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de trámite legislativo:

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, veintiséis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 507, 534, 542, 576, 577, 578, 580, 581, 672, 676, 698, 708, 716, 721, 725, 733, 736, 737, 745, 750, 756, 758 y 776 y con enmiendas, los P. del S. 179 y 560 y la R. C. del S. 678.

Del licenciado Efraín Rivera Pérez, Asesor del Gobernador para Asuntos de la Rama Judicial, una comunicación, informando que en el Memorial Explicativo al Plan de Reorganización de la Rama Judicial han identificado un error tipográfico. El mismo se encuentra en la página 59, 8va. línea, en donde lee: "...Tribunal Supremo." en cambio, debería leer: "...Tribunal Superior."

SR. RODRIGUEZ COLON:
Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ):
Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON:
La Cámara de Representantes nos informa que ha aprobado veintiséis comunicaciones o veintiséis medidas del Senado y las ha aprobado sin enmiendas. No obstante, nos indica que ha aprobado tres (3) medidas del Senado con enmiendas, estamos verificando con el Presidente de Comisión para que nos pueda señalar si las enmiendas son, más bien, enmiendas de estilo y no alteran.

Sin embargo, sí quiero hacer mención, señor Presidente, a la

Resolución Conjunta del Senado 678. Esta medida cuando examino las enmiendas que introdujo la Cámara, me doy cuenta que las enmiendas son para completar palabras que aparentemente la impresión que se hizo o la copia que se sacó de la impresión hecha en el Senado, la copia no salió completa y cortó palabras. Por el ejemplo, Mayagüez aparece "Mayagüe" sin la "z". "Agrícola" pues "Agrico" y lo que realmente hizo la Cámara fue añadir, completar la palabra. La realidad es que la medida, el Senado la aprobó correctamente, pero aparentemente la certificación que se le envía a la Cámara se envió con estos errores, de ahí que la Cámara actuó conforme y las enmendó. Esto nos pone en una situación un poco difícil, de yo concurrir con unas enmiendas que sabemos que lo que se enmendó no se cometió el error cuando el Senado lo aprueba. No obstante, en ánimo de adelantar trámite, nosotros vamos a solicitar que el Senado concorra con las enmiendas introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 678, y solicitar de Secretaría que examine con la persona que envió esta certificación a la Cámara para que estas

situaciones no vuelvan a ocurrir en el futuro.

Señor Presidente, esa sería la moción.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

La Presidencia está preparada para recibir una moción a los efectos de que se concurra con las enmiendas de la Cámara en torno al Proyecto del Senado 560, y el Proyecto del Senado 179.

SR. RODRIGUEZ COLON: Siendo así, señor Presidente, solicitaríamos en estos momentos, que el Senado concurra con las enmiendas que introdujo la Cámara al Proyecto del Senado 179, y el Proyecto del Senado 560.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos entonces a solicitar que estas medidas se incluyan en el Calendario de Votación Final del día de hoy y no habré de tener que repetir esta moción, porque lo estamos haciendo en estos momentos, de manera que ya están incluidas, de aprobarse esta moción, en el Calendario de Votación Final.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.

SOLICITUDES DE

INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

La Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación:

Del agrónomo Enrique Irizarry, Presidente, Consejo de Educación Superior, una comunicación, en contestación a la petición formulada por el senador Kenneth McClintock Hernández relacionada con asuntos del personal del nuevo Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

MOCIONES

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a aprovechar este turno de Mociones, para someter las reglas especiales de debate relacionadas con la discusión de dos medidas importantes en el día de hoy y me refiero al Proyecto del Senado 519, que establece la tercera papeleta para proporcionarle el poder real de nuestro pueblo que pueda emitir un sano examen, juicio sobre sus candidatos a la Legislatura y pueda elegirlos separadamente del Gobernador y del Comisionado Residente. Esa medida es el Proyecto del Senado 519, y la Comisión de Reglas y Calendario recomienda a este Senado la aprobación de las

siguientes reglas especiales de debate:

1. Mociones relacionadas con la consideración de este Proyecto serán resueltas sin debate.

2. Las enmiendas al Proyecto se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán sin debate.

3. El Presidente de la Comisión de Gobierno, presentará el Proyecto sin sujeción a los límites de tiempo aquí dispuesto.

4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que informe el Proyecto, de éste aceptar las mismas. Las preguntas se formularán a través del Presidente. El tiempo que tome hacer la pregunta y su correspondiente contestación se cargará al tiempo de la delegación del Partido al cual pertenece el Senador que formula la pregunta.

5. El tiempo para el debate de la medida será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue:

- a. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá diez (10) minutos para exponer su posición.
- b. El Partido Popular Democrático tendrá veinticinco (25) minutos para exponer su posición.
- c. El Partido Nuevo Progresista

tendrá sesenta (60) minutos para exponer su posición.

d. El Senador Independiente Sergio Peña Clos, tendrá cinco (5) minutos para exponer su posición.

6. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente su tiempo.

7. Los turnos en el debate serán alternados entre las delegaciones hasta tanto éstas hayan agotado o renunciado tácita o explícitamente su tiempo.

8. Cada Portavoz indicará el orden y tiempo que corresponderá en el debate a cada Senador de su delegación, previo el inicio del debate.

Señor Presidente, estas son las reglas especiales que recomendamos sobre el Proyecto del Senado 519, solicitamos su aprobación.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban las reglas especiales del debate sobre el Proyecto del Senado 519.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, la Comisión de Reglas y Calendario también tiene a bien recomendar reglas especiales de debate sobre la

Resolución Concurrente de la Cámara 32, que pretende enmendar la Constitución de Puerto Rico para limitar el derecho absoluto a la fianza. Las reglas especiales que recomendamos son las siguientes:

1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta Resolución Concurrente serán resueltas sin debate.

2. Las enmiendas a la Resolución Concurrente se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán sin debate.

3. El Presidente de la Comisión de Gobierno presentará la Resolución Concurrente sin sujeción a los límites de tiempo aquí dispuestos.

4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que informa la Resolución Concurrente de éste aceptar las mismas. Las preguntas se formularán a través del Presidente. El tiempo que tome hacer la pregunta y su correspondiente contestación, se cargarán al tiempo de la delegación del partido al cual pertenece el Senador que formula la pregunta.

5. El tiempo para el debate de la medida será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue:

a. El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá quince

(15) minutos para exponer su posición.

b. El Partido Popular Democrático tendrá cuarenta y cinco (45) minutos para exponer su posición.

c. El Partido Nuevo Progresista tendrá setenta (70) minutos para exponer su posición.

d. El Senador Independiente Sergio Peña Clos, tendrá diez (10) minutos para exponer su posición.

6. Cualquier delegación podrá renunciar total o parcialmente, tácita o explícitamente su tiempo.

7. Los turnos en el debate serán alternados entre las delegaciones hasta tanto éstas hayan agotado o renunciado tácita o explícitamente su tiempo.

8. Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate a cada Senador de su delegación previo el inicio del debate.

Señor Presidente, solicitamos la aprobación de estas reglas especiales de debate sobre la Resolución Concurrente de la Cámara 32.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción se aprueban las reglas especiales de debate sobre la Resolución Concurrente de la Cámara Número 32.

SR. RODRIGUEZ COLON:

Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar en estos momentos, que se forme un Calendario de Lectura del Proyecto del Senado 519, y de la Resolución Concurrente de la Cámara 32.

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone. No sin antes exhortar a los miembros del Senado de Puerto Rico que deben estar ya dirigiéndose hacia el Hemiciclo, porque una vez concluido el Calendario de Lectura se daría comienzo al debate en torno al Proyecto del Senado 519 y la Resolución Concurrente de la Cámara Número 32. Calendario de Lectura.

CALENDARIO DE LECTURA

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 519, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas.

"LEY

Para enmendar los Artículos 1.003, 5.011, 5.039 y 6.001 de la Ley Número 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, denominada "Ley Electoral de Puerto Rico" a los fines de disponer que en las

elecciones generales la candidatura para los cargos de Legisladores se incluirán en una papeleta separada de cualesquiera otras candidaturas de funcionarios cuya elección a esa fecha se disponga por ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (31) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada para que se lea:

"Artículo 1.003.- Definiciones.- A los efectos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa:

(1)

(31) "Papeleta Integra" significará aquella en que el elector vota por la candidatura completa de un solo partido político votando por la insignia de dicho partido, en la papeleta en que aparecen los candidatos a Gobernador[,] y Comisionado Residente [**y Legisladores**].

(32)

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 5.011 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, para que se lea:

"Artículo 5.011.- Papeleta

Electoral.- En toda elección general se diseñarán **[dos (2)] tres (3)** papeletas de color diferente, una de las cuales incluirá bajo la insignia del partido correspondiente a su candidato a Gobernador[,] y Comisionado Residente, [**y otra que incluirá bajo la insignia del partido correspondiente a los candidatos a Legisladores y otra donde bajo la insignia correspondiente, se incluirá el nombre de los candidatos a Alcaldes y Asambleístas Municipales.**

Sujeto a lo dispuesto en esta ley, la Comisión determinará mediante reglamento, el diseño y texto impreso que deberán contener las papeletas electorales a usarse en cada elección.

En cada papeleta se imprimirán instrucciones sobre la forma de votar.

Las papeletas de cada precinto electoral serán de tamaño uniforme e impresas con tinta negra en papel grueso de manera que lo impreso en ellas no se trasluzca al dorso.

La divisa de cada partido se imprimirá en la parte superior de la columna correspondiente con espacio suficiente para que el elector haga su marca bajo dicha insignia, y bajo ella, inmediatamente después, la lista de los candidatos, así como los cargos para los cuales hubieren sido designados. Cuando hubiere dos o más cargos del mismo título, éste

aparecerá una sola vez sobre la lista de candidatos para dicho cargo. Los nombres de los candidatos se colocarán aproximadamente a una distancia de media pulgada de centro a centro de éstos, teniendo el nombre de cada candidato a su izquierda, un número y espacio suficiente para cualquier marca electoral válida.

Los nombres de los candidatos para cargos de Senadores y Representantes por Acumulación con sus correspondientes insignias, irán en la misma papeleta, al final, y cada clase de candidatos separada por una raya gruesa, colocándose en primer término los nombres de los candidatos para Senadores por Acumulación y después, separados por otra raya gruesa, los candidatos a Representantes por Acumulación; disponiéndose que la Comisión ordenará la impresión de los nombres de Senadores y Representantes por Acumulación en el mismo orden en que fueren certificados para cada municipio o precinto por el organismo directivo central del partido con derecho a nominar candidatos.

Cada papeleta electoral contendrá, además, una columna con el título de nominación directa, sin emblema alguno, que contendrá, al igual que las demás columnas correspondientes a los partidos principales y por petición, los títulos de los cargos que hayan de votarse en la

elección, y debajo de dichos títulos, en vez de los nombres de los candidatos, tantas líneas en blanco como candidatos hayan de votarse para cada clase de cargo. El elector que desee votar a candidatos que no figuren en las columnas de los partidos o como candidatos independientes, podrá hacerlo, escribiendo el nombre o nombres de ellos en la columna para nominación directa en el lugar correspondiente y podrá también dar voto a otros candidatos que figuren en otros espacios de la papeleta electoral haciendo una marca en el espacio de cada uno de dichos candidatos, siempre que no fuere incompatibles con los que hubiere votado en la columna correspondiente a 'nominación directa'.

El diseño y contenido de la papeleta que deba utilizarse en un referéndum o plebiscito será establecido, en cada caso, mediante legislación especial que al efecto se adopte de conformidad con la naturaleza de los asuntos objeto de consulta o votación."

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 5.039 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, para que se lea:

"Artículo 5.039.- Procedimiento de Votación en Comisiones Locales.- Se establecerán colegios para el voto ausente en cada una de las oficinas de las Comisiones

Locales de Elecciones durante el domingo previo al día de la elección. Las horas de votación se dispondrán mediante reglamento. Dichos colegios estarán bajo la responsabilidad y supervisión de la Comisión Local de Elecciones. Se instalará una caseta de votación en cada local de forma que se garantice la secretividad y privacidad del voto. Durante este proceso aplicarán todas las disposiciones penales dispuestas en esta Ley, incluyendo las relativas a las normas de comportamiento y las distancias de propaganda dispuesta para los colegios en las elecciones. Sólo estarán presentes las personas que han de emitir el voto y los funcionarios electorales correspondientes. No se utilizarán colegios en cuarteles de la Policía de Puerto Rico.

La Comisión preparará listas de los electores con derecho al voto ausente ante la Comisión Local de Elecciones de ese precinto, y enviará junto al material electoral una copia de la tarjeta de archivo de los electores.

El elector pasará a la mesa y se identificará mostrando su tarjeta de identificación electoral y firmando la lista correspondiente. Su tarjeta será perforada después de depositar su voto en el lugar apropiado.

Luego de votar impregnará uno de sus dedos en una sustancia indeleble según se disponga por reglamento y sujeto a lo dispuesto

en esta Ley.

A cada elector se le dará exclusivamente una papeleta de candidatura [estatal] para los cargos de Gobernador y Comisionado Residente, otra de candidatura para los cargos de Legisladores y otra de candidatura municipal, las cuales depositará, luego de doblarlas, en las urnas provistas para el voto ausente. No se usarán sobres ni ningún otro mecanismo para depositar dicho voto.

Las urnas usadas para el voto ausente serán de diseño especial, de forma que impidan su apertura, excepto rompiendo la misma. Dichas urnas serán selladas al terminar la votación por los representantes de los partidos, y se guardarán bajo custodia conjunta, según especifique el reglamento."

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 6.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, para que se lea:

"Artículo 6.001.- Escrutinio.- Al cerrar el colegio y antes de abrir las urnas, los inspectores del colegio inutilizarán las papeletas sobrantes y junto con las que hubieran sido inutilizadas durante el proceso de votación, las colocarán en el sobre correspondiente, llenando los encasillados preimpresos en dicho sobre y procediendo

entonces a sellar el mismo.

Una vez abiertas las urnas, los inspectores procederán entonces a separar las papeletas por candidatura [estatal y] para los cargos a Gobernador y Comisionado Residente, por candidatura para los cargos de Legisladores y por candidatura municipal y las clasificarán de la siguiente manera;

(a) Las papeletas electorales íntegras votadas a favor de cada partido político.

(b) Las papeletas recusadas se colocarán en grupos por partidos.

(c) Las papeletas mixtas que no hubieren sido recusadas se pondrán en grupos por insignia de partidos.

(d) Las papeletas electorales mixtas que hubieren sido recusadas se pondrán en grupos por insignia de partidos.

Si por cualquier razón los inspectores no se pusieren de acuerdo respecto de la adjudicación de alguna papeleta, la pondrán aparte haciendo constar al dorso el hecho de no haberse adjudicado por no haber unanimidad en el colegio para su adjudicación y cada inspector deberá firmarlas, exponiendo la razón para la no adjudicación.

Las papeletas que resulten protestadas se pondrán en un sobre y se enviarán a la

Comisión Estatal, al igual que las no adjudicadas, para que este organismo proceda a disponer de ellas. Dicho sobre deberá estar debidamente rotulado identificando el precinto, la unidad electoral, el colegio y el número de papeletas por categorías contenidas en dicho sobre, el cual será firmado por los inspectores.

Las papeletas recusadas que no sean protestadas se adjudicarán al partido que fueron marcadas por el elector, pero se pondrán en un sobre rotulado a esos efectos.

Las papeletas recusadas que resulten mixtas se adjudicarán a los candidatos que el elector marcó.

Las papeletas que aparezcan en la urna que no tengan marca alguna se harán constar como papeletas en blanco y así figurarán en la hoja de cotejo.

Una vez iniciados los trabajos de escrutinio, ningún miembro de la Junta de Colegio Electoral, bajo ninguna circunstancia podrá salir del mismo, debiendo permanecer hasta finalizar todos los trabajos y haber anunciado el resultado del escrutinio, fijando una copia de éste en la puerta del colegio electoral en cuestión.

La Comisión Estatal, mediante reglamento al efecto, dispondrá la forma en que tal escrutinio de votos debe realizarse."

Artículo 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisión de Gobierno, previo estudio y consideración del P. del S. 519, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas:

En el Título:

Página 1, línea 1

después de "5.011," insertar "5.022,"

En el Texto Decretativo:

Página 1, línea 2

después de "que se lea" insertar "como sigue"

Página 1, línea 12

después de "que se lea" insertar "como sigue".

Página 3, línea 8

tachar "a" e insertar "por".

Página 3, línea 17

entre las líneas 17 y 18 insertar el siguiente texto:

"Artículo 3.- Se enmienda el

Artículo 5.022 de la Ley Núm. 4 del 20 de diciembre de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue:

Artículo 5.002.- Urnas Electorales.- La Comisión Local de Elecciones hará que se instalen en cada colegio electoral tres (3) urnas debidamente identificadas con capacidad suficiente para las papeletas de ese colegio. Dichas urnas estarán provistas de sellos prenumerados para cada una."

Página 3, línea 18

tachar "3" y sustituir por "4"

Página 3, línea 19

después de "que se lea" insertar "como sigue"

Página 4, línea 21

tachar "4" y sustituir por "5".

Página 4, línea 22

después de "que se lea" insertar "como sigue"

Página 6, línea 5

tachar "5" y sustituir por "6".

ALCANCE DE LA MEDIDA

El propósito del P. del S. 519 es enmendar el inciso (31) del Artículo 1.003 y los Artículos

5.011, 5.022, 5.039 y 6.001 de la Ley Núm. 4 del 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico" a fin de separar en dos papeletas electorales diferentes los candidatos a Gobernador y Comisionado Residente de los candidatos a legisladores.

Nuestra Constitución establece que el poder político y las fuentes del poder emanan del pueblo, siendo estos ejercidos de acuerdo a su propia voluntad. El fortalecimiento del sistema democrático requiere la participación plena de la ciudadanía en sus asuntos de gobierno. La misma es obtenida mediante el ejercicio del voto. Es en la acción de esta prerrogativa que se reafirman los principios de nuestra democracia.

Durante la pasada campaña electoral, el programa de gobierno de uno de los tres partidos políticos puertorriqueños propuso enmendar la Ley Electoral para que los candidatos legislativos figuren en una papeleta separada a la de otras posiciones electivas. Ese partido dio gran despliegue a ese compromiso programático durante la campaña, por lo que los electores estaban particularmente conscientes del compromiso de la llamada "tercera papeleta" al momento de votar. El partido que formuló esa propuesta resultó favorecido por el electorado y su programa de gobierno avalado

por el pueblo.

Habiendo recibido esta Asamblea Legislativa el mandato del pueblo para enmendar a esos efectos la Ley Electoral, el Portavoz de la Mayoría, Hon. Charlie Rodríguez y la Mayoría Parlamentaria en el Senado, unida al senador Sergio Peña Clos, radicó durante el primer año del presente cuatrienio el P. del S. 519, por lo que la medida que nos ocupa fue radicada por senadores representativos de una mayoría absoluta del electorado.

El pasado 15 de abril de 1994, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló, remitió a la Asamblea Legislativa una medida con idénticos propósitos, convertida en el P. del S. 724. Esa radicación se produjo trescientos cincuenta y siete (357) días después que éste solicitó "que la Comisión Estatal de Elecciones evalúe esta medida y que de encontrarla a su satisfacción, endose la misma". Carta del Gobernador al Lcdo. Juan R. Melecio, 23 de abril de 1993.

El pasado 21 de diciembre de 1993, la Comisión de Gobierno solicitó ponencias escritas en torno al P. del S. 519 a las siguientes entidades:

- Asociación de Alcaldes
- Comisión Estatal de Elecciones

Federación de Municipios

Partido Independentista Puertorriqueño

Partido Nuevo Progresista

Partido Popular Democrático

Posteriormente, la Comisión suscribiente citó a vistas públicas el 25 de enero de 1994, vista a la cual comparecieron el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Juan R. Melecio, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, licenciado Carlos Canals Mora, y el senador por acumulación del Partido Popular Democrático, Hon. Eudaldo Báez Galib. Luego de dicha vista se recibieron expresiones escritas de las demás entidades citadas.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Juan R. Melecio, ofreció observaciones y enmiendas de carácter técnico, delegando en los Comisionados las expresiones sustantivas sobre la medida.

Conceptualmente, "...en principio, el Partido Independentista Puertorriqueño no tiene objeciones al propósito que persigue el P. del S. 519--es decir, disponer que en las elecciones generales la candidatura para los cargos de Legisladores se incluyan, en una papeleta separada de cualesquiera otras candidaturas...".¹

El Partido Nuevo Progresista se expresó a favor de la tercera papeleta que propone el P. del S. 519.²

En carta fechada el 26 de enero de 1994, el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, licenciado José Ariel Nazario, expresó que "En estos momentos el Honorable Presidente del Partido Popular Democrático ante el Alto Cuerpo, Senador Miguel Hernández Agosto, se encuentra fuera de Puerto Rico, razones por las cuales se me hace imposible expresar la posición del Partido que represento".

Durante los meses de febrero, marzo, abril y, a la fecha de este informe, 11 de mayo, no se ha recibido ninguna comunicación adicional que exprese posición sustantiva alguna en torno al P. del S. 519 o el P. del S. 724.

Tanto el senador Eudaldo Báez Galib, en su comparecencia personal, como los comisionados electorales del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, plantearon la necesidad de que se lograra un "consenso" en torno al P. del S. 519 como prerequisite para su aprobación. El licenciado Rodríguez Orellana recogió el planteamiento al expresar que "El principio del consenso para enmendar esta Ley es ya de por sí una ley de carácter moral en nuestro ordenamiento electoral, inspirada en preceptos

de limpieza en los procesos democráticos y justicia para repudiar actos que pudieran catalogarse como tiranía de la mayoría."

La Comisión que suscribe respetuosamente entiende que el mandato expreso del pueblo, expresado en las urnas no puede ser dejado sin efecto por los partidos políticos y las opiniones de sus comisionados electorales.

Muchos asuntos procesales de materia electoral han surgido producto del consenso de los partidos. Ejemplo de ello es la propuesta para eliminar el requisito procesal de la "tarjeta viajera".

Sin embargo, asuntos electorales que trascienden lo procesal para entrar al campo de lo sustantivo no han sido históricamente sometidos al crisol del llamado "consenso electoral". Ejemplo de ello es la Ley de Derechos Democráticos que el Partido Popular Democrático, unido al Partido Independentista Puertorriqueño, aprobó en 1991 por encima de las objeciones del Partido Nuevo Progresista. En aquella ocasión, la coalición "ad-hoc" PPD-PIP entendió que el derecho del pueblo a expresarse sobre unos llamados "derechos democráticos" era más importante que las objeciones planteadas por el principal partido de oposición de entonces, aun cuando dicha consulta no había sido producto de un

mandato del pueblo, como es en el caso del P. del S. 519.

En el asunto que nos ocupa, el mandato del pueblo precluye la necesidad de buscar consenso entre instituciones ubicadas en una escala jerárquica inferior al pueblo mismo. Más aún, se trata de un asunto sustantivo, más que procesal, como bien lo describe el licenciado Rodríguez Orellana, quién señaló que "una 'tercera papeleta' para los candidatos a puestos en nuestra legislatura nacional (sic), implantaría una norma de carácter innovador que propendería a establecer actitudes diferentes de participación en las elecciones generales". Evidentemente, un asunto que cambiaría las actitudes de participación trasciende el ámbito de lo procesal para convertirse en un asunto sustantivo. Tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Independentista Puertorriqueño han establecido el precedente de que en asuntos electorales sustantivos no se requiere el "consenso" por lo que, aún si no fuera éste un asunto ordenado por el pueblo, su naturaleza sustantiva lo colocaría fuera del ámbito de los asuntos que tradicionalmente son objeto de la búsqueda de consenso.

En lo que al asunto de "consenso" se refiere, la Comisión que suscribe no le reconoce a una minoría de legisladores, representativa de

una minoría del electorado, el poder de vetar un asunto que ya fue aprobado por el electorado al escoger el programa de gobierno que lo contiene y elegir al partido comprometido con implantarlo.

El P. del S. 519, con las enmiendas sugeridas, recoge los conceptos contenidos en el P. del S. 724, a la vez que provee amplia latitud para que la Comisión Estatal de Elecciones, con el conocimiento técnico que posee, disponga mediante reglamentación los detalles procesales que garanticen el nuevo derecho que se le reconoce al elector puertorriqueño de escoger sus candidatos legislativos en una papeleta separada a las de los demás candidatos estatales y municipales. Ha transcurrido un año y quince días desde que el Gobernador exhortó a los Comisionados a discutir el asunto, más de cuatro meses y medio desde que la Comisión suscribiente solicitara oficialmente ponencias sobre la medida, tres meses y medio desde la celebración de vistas públicas y la fecha en que el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático legítimamente pidiera más tiempo, porque su presidente estaba fuera de la Isla.

Entendemos que, un año y medio después de recibirse el mandato electoral para crear una tercera papeleta, es hora de, en respeto al pueblo que emitió ese mandato, aprobar la legislación que transformará ese mandato en

realidad con el tiempo suficiente para que la Comisión Estatal de Elecciones pueda revisar sus reglamentos y procedimientos con antelación al año electoral de 1996, cuyo inicio está a tan solo un año y medio de distancia.

El estado debe proveer los mecanismos que permitan al electorado escoger libremente a los candidatos de su predilección a la Legislatura. Es indispensable que cada partido político tenga la oportunidad de presentar candidatos con sus programas de trabajo al pueblo de Puerto Rico. Es sumamente importante proveer a cada candidato igual oportunidad para exponer a sus electores sus plataformas. De esta manera, se estará propiciando una justa competencia entre candidatos. Los electores tienen el derecho de conocer a sus legisladores, de saber cómo piensan y qué posiciones asumen ante los problemas que nos aquejan como pueblo. La tercera papeleta nos brinda la oportunidad de escrutar más minuciosamente la candidatura de nuestros legisladores, y de elegir con mayor libertad a los funcionarios más afines con nuestras preferencias.

La presente medida recoge el sentir de cientos de miles de electores puertorriqueños que apoyan se establezca la tercera papeleta, por entender que la misma ha de propiciar un mecanismo que les permitirá ejercer su derecho al voto más

consciente y libremente.

Este proyecto no sólo favorece al elector, sino que también a los candidatos, pues les dará la oportunidad de realizar una campaña individual que le permita llegar a cada elector y darse a conocer directamente con su pueblo. La suerte de un candidato legislativo no estará tan sujeta a la suerte que corra la campaña del candidato a la Gobernación.

No cabe la menor duda de que el P. del S. 519, al establecer una "tercera papeleta" para los candidatos a puestos en nuestra legislatura implanta una norma de carácter innovador que propicia el libre ejercicio de la democracia en nuestro país.

Es menester, entonces, atemperar la Ley Electoral a las modificaciones en el comportamiento de los electores al momento de emitir su voto. A este fin, es imperante que se le ofrezca a los mismos la oportunidad de manifestar su sufragio para elegir a los legisladores en una papeleta separada de la del Gobernador y Comisionado Residente. De esta forma se ofrecen alternativas que responden a la voluntad de los electores para elegir las personas que representarán los mejores intereses del pueblo en el quehacer legislativo.

Es responsabilidad y deber de la Asamblea Legislativa disponer

lo relacionado al proceso electoral. El ejercicio de esta potestad manifestada en la presente medida, garantiza la expresión de la voluntad real de los electores al ejercer el sufragio. Asimismo, fomenta y mejora el desarrollo del proceso eleccionario al modificarlo de forma que responda a los intereses del pueblo.

El Partido Nuevo Progresista propuso, en su programa de Gobierno, la tercera papeleta. La posición oficial del Partido Nuevo Progresista parte de la premisa básica de que la mayoría del pueblo puertorriqueño desea propiciar los medios que faciliten al fortalecimiento de nuestra democracia.

Esta medida de reforma electoral fue sometida al pueblo, que la avaló con sus votos. Ese apoyo no fue uno sin conocimiento, toda vez que el hoy partido de gobierno, durante la pasada campaña electoral, destacó su compromiso de crear una papeleta separada para candidatos legislativos.

Reconociendo que el pueblo es supremo, y habiendo avalado mediante voto directo esta propuesta, la Comisión de Gobierno entiende que se ha logrado ya el consenso más perfecto alcanzable el del pueblo, el del soberano en nuestro sistema democrático.

Por las razones expuestas, la Comisión que suscribe tiene el

honor de recomendar la aprobación de esta medida, con las enmiendas propuestas.

Respetuosamente sugerido,

(Fdo.)
Kenneth McClintock
Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno"

Notas al Calce:

¹Ponencia escrita del Partido Independentista Puertorriqueño sobre el P. del S. 519, 26 de enero de 1994 (subrayado tomado del original).

²Ponencia oficial del Secretario General del Partido Nuevo Progresista sobre el P. del S. 519, 31 de enero de 1994.

Ocupa la Presidencia el señor Roberto Rexach Benítez.

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Concurrente de la Cámara 32, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas.

**"RESOLUCION
CONCURRENTE**

Para proponer una enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico; para disponer que la enmienda propuesta sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en Referéndum Especial y para disponer su vigencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A los pueblos al igual que a los seres humanos les asiste el derecho a reflexionar sobre sus valores e instituciones en el momento histórico en que los consideren necesario.

Puerto Rico ya no es la pacífica y apacible isla del año 1952, cuyo contexto histórico-social produjo el establecimiento de un derecho absoluto a la libertad bajo fianza en la Carta de Derechos de su Constitución. Nuestra sociedad se aproxima al Siglo XXI atravesando por una dinámica de acelerados cambios en los órdenes social, económico y cultural.

El más notable de éstos es el desarrollo continuo y sofisticado de técnicas y conductas criminales, lo que ha provocado sentimientos palpables de alarma, desasosiego y desesperanza en nuestros conciudadanos. Sus continuas manifestaciones a esos efectos corroboran que es imperativo reenfocar la filosofía alrededor de la cual se encierra el derecho a permanecer en libertad bajo fianza en nuestro

ordenamiento jurídico penal. De ahí que la institución de la fianza deba convertirse en un instrumento flexible que pueda garantizar la libertad del imputado de delito y a la vez permita al Estado cumplir con su obligación de defender a la sociedad en aquellos casos en que la reiterada conducta delictiva de un ciudadano amenace su seguridad.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional de tomar acciones para viabilizar el proceso de someter al Pueblo aquellos cambios que sean requeridos para redefinir los principios constitucionales de manera que respondan a las necesidades cambiantes de nuestros tiempos. Como legítimo esfuerzo del Pueblo de Puerto Rico para garantizar la seguridad y el bienestar general de nuestra sociedad y asegurar el pleno disfrute de los derechos colectivos a la vida y a la paz, se somete a éste para su ratificación la Enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado para disponer que todo acusado tendrá derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio; excepto cuando haya sido previamente convicto por delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios y represente amenaza para la comunidad.

**RESUELVESE POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA**

DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se propone al Pueblo de Puerto Rico que se enmiende la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de manera que quede redactada en la forma siguiente:

"Artículo II

CARTA DE DERECHO

Sección 1.-.....

Sección 11.- En todos los procesos criminales el acusado disfrutará del derecho a juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.

Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

Todo acusado tendrá derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio; excepto cuando haya sido previamente convicto por delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios y represente amenaza para la comunidad.

La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. La fianza y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda."

Artículo 2.- La enmienda propuesta en el Artículo 1 de esta Resolución Concurrente será sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un Referéndum Especial que se celebrará el 6 de noviembre de 1994. La Comisión Estatal de Elecciones desarrollará una campaña de orientación durante los treinta (30) días anteriores a la fecha del Referéndum.

Artículo 3.- La enmienda propuesta en el Artículo 1 de esta Resolución Concurrente entrará en vigor tan pronto el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo proclame, una vez que la Comisión Estatal de Elecciones le certifique que la misma ha recibido el voto afirmativo de la

mayoría de los electores que emitieron votos válidos y a ese efecto se dispone que la Comisión Estatal de Elecciones deberá enviar tal certificación al Gobernador no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de terminado el escrutinio general sobre dicha enmienda, y dicha proclama del Gobernador deberá expedirse no más tarde de treinta (30) días después de recibirse dicha certificación.

Artículo 4.- Copia certificada de esta Resolución Concurrente será enviada por los Secretarios de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa, al Gobernador de Puerto Rico y al Secretario de Estado de Puerto Rico para su publicación de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico."

"INFORME

Vuestra Comisión de Gobierno, previo estudio y consideración de la Resolución Concurrente de la Cámara Número 32, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas.

I. Introducción

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses, la

fianza y las multas no serán excesivas."

- Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, aprobada en 1952, año en que se cometieron 10,356 delitos Tipo I incluyendo 146 asesinatos en Puerto Rico.

"Los acusados de delito grave tendrán derecho a quedar en libertad bajo fianza en aquellos casos en que por ley así se establezca."

- Enmienda constitucional propuesta por la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 47, radicada en 1975, año en que se cometieron 88,095 delitos Tipo I incluyendo 499 asesinatos en Puerto Rico.

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto en los casos de delito grave, cuando dicho delito hubiera alegadamente ocurrido mientras el acusado se encontraba disfrutando de libertad bajo fianza a consecuencia de una acusación anterior de delito grave separada e independiente, o cuando el delito grave que se le impute había alegadamente ocurrido dentro de los cinco años después de haber sido convicto por un delito grave anterior, todo ello según se disponga por Ley."

- Enmienda propuesta por la

Resolución Concurrente del Senado Núm. 14 en 1977, año en que se cometieron 81,544 delitos incluyendo 467 asesinatos en Puerto Rico.

"Todo acusado de delito menos grave tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. La Asamblea Legislativa dispondrá por ley bajo qué circunstancias los acusados de delito grave no tendrán derecho a quedar en libertad bajo fianza y adoptará las medidas necesarias para reglamentar su concesión."

- Enmienda propuesta por la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 30 de 1979, año en que se cometieron 80,181 delitos Tipo I incluyendo 476 asesinatos en Puerto Rico.

Durante casi la mitad de nuestra vida constitucional, el pueblo de Puerto Rico, por conducto de tres de sus seis gobernadores electos y seis de sus doce asambleas legislativas, ha intentado adquirir el poder de incorporar a su Constitución local condiciones al derecho a la fianza que le permita protegerse de peligros potenciales y controlar la ola criminal que estuvo en estado de crecimiento hasta 1992 y que, aún hoy, se mantiene en niveles inaceptablemente altos.

Todos esos múltiples intentos han fracasado ante la incapacidad

pasada de quienes gobiernan a este pueblo de echar a un lado diferencias políticas para dejar que el pueblo decida.

En esta ocasión, el Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración una posible enmienda constitucional, propuesta por el Gobernador Pedro Rosselló como parte de su programa de gobierno, y aprobada ya por una coalición bipartita de miembros del Cuerpo Hermano que han echado a un lado sus diferencias para otorgarle al pueblo el poder de votar el próximo 6 de noviembre sobre dicha enmienda.

Está, pues, en manos del Senado, determinar si se le otorga o no ese poder al pueblo que lo eligió con la expectativa de que su Constitución sería enmendada en este cuatrienio.

La presente medida propone enmendar la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que la enmienda propuesta sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en Referéndum Especial a celebrarse el próximo 6 de noviembre, y dispone su vigencia.

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico celebró vistas públicas sobre la Resolución Concurrente del Senado Número 28, equivalente a la Resolución Concurrente de la

Cámara Número 32, los días 15 y 16 de febrero y el día 2 de marzo de 1994. Entre otros, a dichas vistas comparecieron:

Hon. Pedro J. Pierluisi, Secretario del Departamento de Justicia.ⁱ

Hon. Jesús A. Castellanos, Magistrado del Tribunal Federal.ⁱⁱ

Hon. Zoraida Buxó, Secretaria del Departamento de Corrección.ⁱⁱⁱ

Lcdo. Pedro Toledo, Comisionado de Seguridad Pública y Superintendente de la Policía de Puerto Rico.^{iv}

Lcda. Mercedes Bauermeister, Directora Administrativo Administración de los Tribunales.^v

Dra. Trina Rivera de Ríos, Presidenta Comité Defensa Derechos Ciudadanos y Lcdo. Graciani Miranda, como acompañante.^{vi}

Hon. Hiram Sánchez Martínez, Juez del Antiguo Tribunal Apelativo, la Dra. Dora Nevarez Muñoz, Lcdo. Manuel Fermín Arraiza, Vice-presidente Colegio de Abogados, la Hon. Mercedes Otero de Ramos, Senadora y Ex-Administradora de Corrección y el Lcdo. Héctor Lugo Bougal.

II. El Derecho a la Fianza en

Puerto Rico

A. Disposición Constitucional Actual

Como hemos señalado, nuestra Constitución local dispone que:

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deudas."^{vii}

En Puerto Rico, por lo tanto, el derecho de todo acusado en permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio es de rango constitucional. La Carta Orgánica que precedió a la Constitución establecía el derecho a la fianza antes de la convicción, pero, hacía excepción en aquellos casos de crímenes capitales en que la prueba era evidente o la presunción grande.^{viii}

Al adoptarse la Sección 11, supra, el derecho a la fianza se eleva a rango constitucional, concediendo a todo acusado el derecho a permanecer en libertad bajo fianza hasta que medie un fallo condenatorio en su contra, garantizando que las fianzas no serán excesivas y estatuyendo un término máximo de detención preventivas de seis (6) meses en

aquellos casos donde el acusado no preste la fianza fijada^{ix}. Se contempla este derecho como uno de carácter absoluto, universal y sin excepciones.

El derecho absoluto a fianza es un derecho constitucional igual a otros derechos garantizados por nuestra Carta de Derechos, tales como: el derecho a un juicio por jurado, justo e imparcial, rápido y público^x, el derecho a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación^{xi}, el derecho a asistencia de abogado^{xii}, la presunción de inocencia^{xiii}, a compelar la comparecencia de testigos^{xiv}, a carearse con los testigos de cargo^{xv}, a no autoincriminarse^{xvi}, a no ser juzgado dos veces por el mismo delito^{xvii}, a no estar sujeto a castigos crueles e inicitados^{xviii}.

El derecho a la fianza protege y hace efectivo, real y eficaz el derecho a la vida y a la libertad de todo acusado hasta tanto medie fallo condenatorio.

B. Interpretaciones Judiciales

En Puerto Rico, la jurisprudencia en relación con la figura de la fianza es muy escasa. Sin embargo, hay varios casos en donde se señalan algunos criterios y directrices a seguir con relación a la imposición y prestación de este remedio, entre estos, el caso de Pueblo v. Pilot.^{xix}

Además antes y después de la

aprobación de nuestra constitución local, el Tribunal Supremo ha anunciado unos criterios claves en relación con el propósito de la fianza al señalar:

"No hay duda alguna en cuanto a los principios aplicables.

Esta bien establecido que la fianza no se fija con el fin de castigar a la persona acusada y sí con el propósito de asegurar la presencia de ésta ante la corte en cualquier momento en que sea legalmente requerida para ello."^{xx}

"El derecho a permanecer en libertad con anterioridad al juicio está condicionado a que el acusado garantice debidamente que comparecerá a juicio y cumplirá la sentencia que se le imponga de ser hallado culpable.

Al igual que ocurría cuando se seguía la antigua práctica de obtener declaraciones juradas de personas responsables que se comprometían a servir de fiadores al acusado, la práctica moderna de existir una fianza o el depósito de numerario sujeto a confiscación sirve de garantía adicional para la comparecencia del acusado. Toda fianza que se fije en una suma mayor que la cantidad que razonablemente se calcula cumpla con este fin es excesiva según la enmienda octava. Puesto que el fin de la enmienda es limitado, la fijación de la misma a cualquier acusado debe basarse en normas que armonicen con el propósito de garantizar la comparecencia del

acusado."^{xxi}

"La fianza antes de la convicción se requiere históricamente para asegurar la presencia del acusado en las diversas etapas del juicio."^{xxii}

En cuanto a los criterios que imperan para determinar si procede o no la reducción de la cuantía de la fianza, el Tribunal Supremo ha señalado que aunque importante, no es el único criterio."^{xxiii}

En Waldin v. Feliciano,^{xxiv} se reiteró la norma de Ex-Parte Collazo.^{xxv}

La doctrina además, ha establecido que mediante la fianza no se garantiza el cumplimiento de la pena por parte del acusado.

Al respecto, ha señalado el Tribunal:

"No hemos hallado precedentes para el uso de la fianza tradicional antes de la convicción con el fin de asegurar el cumplimiento de la pena."^{xxvi}

C. Reglamentación del Derecho a la Fianza

Las Reglas de Procedimiento Criminal aprobadas y en vigor desde el año 1963 y algunas disposiciones todavía vigentes del Código de Enjuiciamiento Criminal rigen y le han dado contenido estatutario al derecho

constitucional a la fianza."^{xxvii}

Las reglas preceptúan las normas sobre cuando se exige fianza, los criterios para su fijación y modo de revisarlas, los aspectos que garantiza, los requisitos de los fiadores y su debida comprobación, el depósito del importe de la fianza en efectivo y la sustitución de ésta por aquél, el modo de exonerar a los fiadores respecto a la fianza prestada, la responsabilidad de éstos respecto a los costos y multas, el procedimiento de confiscación, y cuándo se puede arrestar a un acusado que ha prestado fianza.

Originalmente la Regla 6 de Procedimiento Criminal exigía la fijación de fianza en todo caso, pero en el 1966, el Tribunal Supremo adoptó una nueva Regla 6.1, liberalizando de institución de la fianza, a los efectos de dispensar la prestación de fianza en esos por delitos menos graves.

Por su parte, en los casos de delitos grave, se reservó al juez la facultad para disponer su prestación bajo aquellas otras consideraciones que garantizarán la comparecencia del acusado."^{xxviii}

El Tribunal Supremo adoptó en 1966 la Regla 6.1, liberalizando la institución de la fianza, a los efectos de dispensar la prestación de fianza en casos por delitos menos graves, se reservó al juez la facultad para disponer su prestación bajo aquellas otras consideraciones que

garantizaran la comparecencia del acusado.^{xxix}

Posteriormente, la Asamblea Legislativa, al pasar juicio sobre la regla adoptada por el Tribunal Supremo, eliminó la discreción judicial en los casos por delito grave, enmendando la regla a los efectos de exigir la prestación de fianza en todo caso por delito grave.^{xxx}

El Tribunal Supremo enmendó también la regla 218 para conformarlas con la Regla 6.1.^{xxxi} Luego, en el 1974, la Asamblea Legislativa enmienda la Regla 218, para establecer los criterios que el juzgador debe tomar en consideración al fijar la cuantía de la fianza y para establecer un mecanismo de revisión de fianza.

El 20 de julio de 1979, mediante la aprobación de la Ley Núm. 177, se enmendó nuevamente la Regla 218 de Procedimiento Criminal, a los efectos de que la revisión de una fianza fuese efectuada únicamente ante la sala del Tribunal Superior correspondiente al distrito judicial con competencia para conocer la causa.^{xxxii}

El 30 de marzo de 1984, mediante la aprobación de la Ley Núm. 5, se enmendó la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal, para adicionar el inciso (e) a dicha regla a los efectos de evitar la prestación de fianzas en ausencia del acusado o imputado de delito

que no haya sido arrestado o comparecido a la jurisdicción del Tribunal.

El 5 de junio de 1986, se aprueba la Ley Núm. 39, a los efectos de enmendar las Reglas 6.1, el inciso (b) de la Regla 22, el inciso (c) de la Regla 23, la Regla 218, la Regla 219, la Regla 227 y la Regla 228 de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para disponer sobre la imposición de condiciones para permanecer en libertad provisional.

La Ley Núm. 39, supra, enmienda la Regla 218 de Procedimiento Criminal, al efecto de añadir cuándo se requerirá fianza o condiciones, los criterios para la fijación de éstos, y la revisión de la cuantía o de las condiciones.^{xxxiii}

También enmendó esta Ley, la Regla 228 de Procedimiento Criminal a los efectos de establecer las situaciones ante las cuales se procederá al arresto del acusado a quien se le ha impuesto condiciones o ha prestado fianza o hecho depósito.^{xxxiv}

Reconociendo la necesidad imperiosa de que las Reglas de Procedimiento Criminal respondan al interés del Estado en procesar delincuentes se radicó el Proyecto del Senado 595, el 18 de febrero, a los fines de enmendar las secciones (a), (b) y (c) de la Regla 6.1 y

enmendar la Regla 228, a fin de adoptar la práctica judicial de admitir el diez por ciento (10%) de la fianza original impuesta y sobre criterios adicionales al imponer fianzas.

También se radicó el Proyecto del Senado 623, el 9 de marzo de 1994, el cual propone enmendar el tercer párrafo del inciso (a) de la Regla 227 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de disponer que se conceda un plazo automático de seis (6) meses para que un fiador produzca a un acusado, cuando el fiador así, lo solicite.

Los Proyectos del Senado 595 y 623, se encuentran bajo consideración en la Comisión de Gobierno.

D. Enmiendas Propuestas a la Constitución

Desde el año 1975, se ha venido discutiendo en las Cámaras Legislativas la posibilidad de enmendar nuestra Constitución para limitar el derecho absoluto a fianza en los casos por delito grave, como manera de atender la ola que, hasta 1992, crecía significativamente cada año.

El primer intento para restringir el derecho a la fianza ocurrió con la radicación de la Resolución Concurrente de la Cámara núm. 47 del 2 de abril de 1975^{xxxv}. Esta Resolución

disponía que:

"Los acusados de delito grave tendrán derecho a quedar en libertad bajo fianza en aquellos casos en que por ley así se establezca".

Esta Resolución, en su Exposición de Motivos, señaló que su propósito era el "garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana y darle, a través de la enmienda, flexibilidad a la Legislatura en el uso del instrumento de la fianza en casos de delito grave". Surge en forma clave que tal Exposición de Motivos parte de dos premisas, estas son: (1) que el derecho a fianza es uno absoluto tanto en su aspecto normativo como en su ejecución o aspecto práctico, para todos los acusados, y (2) que este derecho constitucional a fianza antes de mediar un fallo condenatorio es la, o una de las causas del problema de la criminalidad y su aumento, que afecta la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

De aprobarse esta enmienda, los acusados de delito grave no tendrían derecho a quedar en libertad bajo fianza, excepto en cuanto a aquellos delitos expresamente dispuestos por ley. En otras palabras la propuesta enmienda, elimina el derecho absoluto a fianza en los delitos graves, hasta que la Asamblea Legislativa aprobara la legislación que estableciera los casos en que se tendría derecho.

El segundo y tercer intento por enmendar esta disposición constitucional surgió el 3 de abril de 1975, con la radicación de la Resolución Concurrente del Senado Núm. 37 y el 11 de febrero de 1976, con la Resolución Concurrente del Senado Núm. 44.^{xxxvi} Estas dos Resoluciones estaban fraseadas en los mismos términos que la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 47, supra. Ninguna de estas resoluciones fueron aprobadas finalmente.

Durante el cuatrienio comprendido entre 1976-1980, el 11 de octubre de 1977, se presentó nuevamente una Resolución Concurrente del Senado, Núm. 14, supra. En esta ocasión, se propuso el siguiente lenguaje:

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto, en los casos de delito grave, cuando dicho delito hubiera alegadamente ocurrido mientras el acusado se encontraba disfrutando de libertad bajo fianza a consecuencia de una acusación anterior de delito grave separada e independiente, o cuando el delito grave que se le impute habían alegadamente ocurrido dentro de los 5 años después de haber sido convicto por un delito grave anterior, todo ello según se disponga por Ley."^{xxxvii}

El 10 de abril de 1978, se presentó otra Resolución Concurrente del Senado, en esta ocasión la Núm. 23, la cual era similar a la anterior Núm. 14, supra, excepto que en ésta se omitió la parte sobre la imputación de un nuevo delito dentro de los cinco (5) años siguientes a una convicción previa. Finalmente se aprobó la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 30, de 20 de abril de 1979, proponiendo una enmienda a la Sección 11 del Artículo II de nuestra Constitución, a los efectos de que la referida Sección en su parte pertinente, leyera como sigue:

"Todo acusado de delito menos grave tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. La Asamblea Legislativa dispondrá por ley bajo que circunstancias los acusados de delito grave no tendrán derecho a quedar en libertad bajo fianza y adoptará las medidas necesarias para reglamentar su concesión."^{xxxviii}

La Exposición de Motivos de dicha resolución intentó justificar la enmienda a base de la necesidad de garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la ciudadanía, al igual que lo hacía la Resolución Concurrente Núm 47 del 2 de abril de 1975, se dijo en dicha Exposición de Motivos que:

"El desarrollo económico que se

ha registrado en Puerto Rico, el crecimiento de los centros urbanos y los cambios acelerados en los patrones de vida han desatado un marcado aumento en la criminalidad. Este problema produce gran preocupación en todos los sectores del país y constituye una de las primeras prioridades del Gobierno de Puerto Rico.

Los esfuerzos que se han realizado hasta ahora utilizando todos los medios de que dispone el Estado han logrado reducir en alguna medida la actividad delictiva en Puerto Rico, pero hay que reconocer que la incidencia criminal que vivimos mantiene consternada a toda nuestra sociedad.

Uno de los factores que más preocupación genera es el hecho de que todo acusado de delito grave, independientemente de la violencia y del menosprecio absoluto por la integridad de la víctima con que se haya actuado, tiene derecho a permanecer en libertad bajo fianza aunque éste sea reincidente, o sea, una persona cuyo desajuste emocional le incapacite para vivir en sociedad. Aún cuando los magistrados impongan fianzas altas, siempre está disponible el beneficio para aquellos acusados que utilizan la actividad criminal como

medio de obtener ingresos y tienen urgencia de obtener su libertad para cometer los delitos de similar naturaleza.

Es imperativo revisar el presente sistema que concede el derecho absoluto a fianza y considerar la posibilidad de que se establezca un mecanismo que garantice la tranquilidad y la seguridad de toda la ciudadanía. Mediante esta medida se propone que nuestra Constitución disponga que el derecho absoluto a fianza exista sólo en los casos de delito menos grave, pero que cuando se trate de delitos graves, la Asamblea Legislativa determine cuándo procederá".^{xxxix}

Esta Resolución, al igual que las anteriores, pretendía alterar el propósito primario de la imposición de fianza el cual es, el garantizar la comparecencia del acusado a todas las etapas del proceso. El intento por enmendar el derecho constitucional absoluto, concibe la fianza como un mecanismo para garantizar, además, la tranquilidad y seguridad de toda la ciudadanía.

Las Comisiones de la Cámara y el Senado recomendaron la aprobación de la medida. En sus informes se dijo que:

"En casos de delito menos grave, el derecho a fianza continuará siendo de naturaleza

absoluta. En casos de delito grave también excepto que la Asamblea Legislativa viene obligada a legislar en este campo para determinar bajo que circunstancias se negará a un acusado de delito grave el derecho a la fianza."^{xl}

E. Legislación propuesta durante la década de los 80 para limitar constitucionalmente el derecho absoluto a la fianza.

A continuación se hace mención de algunas medidas propuestas durante la década del 80, en relación con la materia de la fianza. Estas medidas fueron presentadas para consideración, tanto de la Cámara de Representantes como de el Senado, y aunque no fueron aprobadas, permiten detectar tendencias y visiones filosóficas en relación con este asunto.

1. Proyecto del Senado Núm. 227, (1981).- Este proyecto tenía como propósito disponer que el (50%) del importe de la fianza fuese exigido en efectivo; establecer criterios para recibir bienes inmuebles como garantía, así como también requerir que sólo el juez que fije fianza pudiese entender en aumento o reducciones, y por último, establecer el ámbito de condiciones de libertad bajo fianza que puede requerir el magistrado.

2. Proyecto del Senado Núm. 235, (1981).- Proponía enmendar

las Reglas de Procedimiento Criminal, a los efectos de requerir que el magistrado que fije fianza levante un acta de su puño y letra, expresando hechos específicos y circunstancias que se tomaron en consideración para fijar determinada cuantía.

3. Proyecto del Senado Núm. 449, (1981).- El cual tenía el propósito de enmendar la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal, para disponer que el tribunal podrá dispensar de prestación de fianza en caso de delito grave, tomando en consideración la naturaleza y circunstancias del delito imputado y reputación del acusado.

4. Proyecto del Senado 1118, (1984).- Cuyo objetivo era enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, para evitar la cancelación de la fianza hasta tanto no transcurra el término para revisar la determinación de no causa probable.

5. Proyecto del Senado 146, equivalente al P. de la C. 209, (1985).- El cual tiene el propósito de enmendar las Reglas 23 y 219 de Procedimiento Criminal, para ordenar que se mantenga vigente la fianza por el término que tiene el fiscal para revisar la determinación de no causa probable o causa probable por un delito inferior al imputado. Este proyecto es análogo al Proyecto 1118 de 1984. La situación que pretende remediar es obvia, toda vez que

al no determinarse causa se puede retirar la fianza y el acusado queda en libertad sin más restricción. El fiscal cuenta con un periodo de sesenta (60) días para ir enalzada, en cuyo caso no hay nada que garantice la comparecencia del acusado a los procedimientos posteriores en caso de que se determine causa enalzada.

6. Resolución Conjunta Núm. 7, (1985).- cual tenía como propósito enmendar la Constitución, a los fines de reglamentar el derecho a la fianza en casos de acusaciones de delito grave, dando al magistrado el poder de establecer condiciones especiales según se establezcan por ley.

7. Resolución Conjunta del Senado Núm. 21, (1986).- La cual proponía una enmienda a la sec. 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado, a los efectos de restringir el derecho absoluto a la fianza de aquellos acusados que sean considerados como delincuentes habituales, reincidentes o de reconocida peligrosidad a la sociedad y para disponer que la enmienda propuesta sea sometida, para aprobación o rechazo, al electorado puertorriqueño.

8. Proyecto de la Cámara 726, (1987).- El cual tenía como propósito enmendar la Regla 227 de Procedimiento Criminal, Confiscación de Fianza, para reducir de 40 a 30 días el

término para ejecutar la fianza; se enviaría el mandamiento de ejecución al alguacil para que sin ulterior orden procediera a ejecutar la misma; si se violaran las condiciones, el tribunal podrá fijar fianza inmediatamente.

9. Proyecto del Senado 1310, (1987).- El cual tenía como propósito enmendar la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal para disponer que se de prioridad en el calendario de los tribunales a los casos de personas que estén detenidas por no haber podido prestar la fianza impuesta.

III. Textos Sugeridos

Los deponentes que adelante se mencionan sometieron a la consideración de la Comisión de Gobierno, los siguientes textos de enmienda constitucional:

A. Policía de Puerto Rico

"Todo imputado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando se le impute la comisión de un delito grave y represente peligrosidad, amenaza o riesgo para la seguridad de la comunidad conforme se establezca por ley."

B. Hon. Hiram Sánchez Martínez

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio excepto cuando se le

imputare un delito grave de extrema seriedad y además, se demostrare [mediante prueba clara y convincente] [fuera de duda razonable] que ninguna condición a su libertad puede razonablemente garantizar la seguridad de alguna persona o de la comunidad. [Cualquier ley que implante la excepción anterior, deberá ser aprobada por tres cuartas partes del número total de miembros que compone cada cámara]."

C. Hon. Secretario de Justicia

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando a la persona se le impute la comisión de uno o más delitos graves y represente peligrosidad, amenaza o riesgo para la seguridad de la comunidad."

Otra alternativa es:

"Todo imputado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando se le impute la comisión de un delito grave y represente una amenaza para la seguridad de la comunidad, conforme se establezca por ley.

Otra alternativa es:

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando la

persona haya sido previamente convicta por delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves y represente peligrosidad, amenaza o riesgo para la seguridad de la comunidad."

IV. Análisis Comparado con la Jurisdicción Federal

A. Disposiciones Legales

La Constitución Federal no garantiza directamente el derecho a fianza, la Enmienda Octava lo regula en la forma siguiente:

"No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni castigos crueles e inusitados."^{xii}

En ausencia de lenguaje constitucional que establezca un derecho federal absoluto a la fianza, el estatuto federal que regula la fianza es la Ley Pública Núm 98-473 de 12 de octubre de 1984,^{xiii} mejor conocida como "Bail Reform Act of 1984". Es el propósito de esta Ley regular lo pertinente a la detención preventiva como tal.

El "Bail Reform Act" permite la detención antes del juicio de aquellos acusados "peligrosos" en relación a los cuales, ninguna forma de libertad bajo ciertas condiciones puede razonablemente asegurar la seguridad de cualquier persona de la comunidad. Partiendo de este fundamental principio, dicha

ley procede a clasificar los delitos entre aquellos que conllevan pena capital y los que reciben un tratamiento más benigno. Los últimos deberán conllevar libertad bajo promesa personal ("personal recognizance"), o previa la prestación de una fianza no asegurada ("unsecured bond"), a menos que se determine que tales formas no aseguran o garantizan su comparecencia.

El "Bail Reform Act" dispone, que previo a una vista, el funcionario judicial tendrá que ordenar la detención preventiva de un acusado que no satisfaga las condiciones que garanticen su comparecencia según requerida y la seguridad de cualquier otra persona y la comunidad.^{xliii}

Además: (1) autoriza al juez a detener preventivamente a cierto tipo de imputado aunque para ello no puede fijar una fianza prohibitiva; (2) la orden autorizando la libertad provisional expresamente dispone que el imputado no podrá delinquir mientras esté en libertad bajo fianza, (3) una sentencia por delito cometido mientras se está en libertad bajo fianza será cumplida consecutivamente; (4) sujeto a ciertas condiciones, se podrá detener temporalmente a un arrestado por delito cometido mientras se está en libertad a prueba o bajo palabra; (5) el juez, luego de hacer una determinación al efecto, puede rehusar aceptar dinero o propiedades "Mal habidos" como pago de la fianza;

(6) aumentó las penas por violar la fianza y (7) el Estado puede apelar las determinaciones de libertad provisional.^{xliv}

También, establece el "Bail Reform Act", una presunción rebatible a aquellos casos en que no existan condiciones que razonablemente asegure la comparecencia del imputado y la seguridad de la comunidad o cualquier persona bajo ciertas circunstancias.^{xlv}

Al hacerse la determinación sobre si existen condiciones que garanticen la comparecencia del imputado y la seguridad de cualquier otra persona y la comunidad, el funcionario judicial tendrá que tomar en cuenta la información disponible referente a:

(1) La naturaleza y circunstancias del delito imputado, inclusive si el delito es de violencia o esté relacionado con drogas narcóticas;

(2) El peso de la prueba contra el imputado;

(3) El historial y características de la persona, incluyendo:

A) El carácter, condición física y mental, vínculos familiares, empleo, recursos financieros, tiempo residiendo en la comunidad, vínculos con la comunidad, conducta pasada, historial referente al uso de

drogas y alcohol, historial criminal, y expediente referente a su comparecencia a procedimientos judiciales anteriores, y

B) Si al momento de la comisión del delito imputado o el arresto, la persona estaba en probatoria, libertad bajo palabra, o cualquier otra libertad condicionada, o cumpliendo una sentencia por un delito federal, estatal o local.

4) La naturaleza y seriedad del peligro a cualquier otra persona o la comunidad que resultaría de la libertad bajo fianza.

B. Jurisprudencia

El caso normativo es U. S. v. Salerno.^{xlvi} Si bien es cierto que Salerno no fue el primer caso federal en donde se cuestionó la constitucionalidad del "Bail Reform Act of 1984"^{xlvii} su importancia estriba en que fue en este caso en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos examinó esta ley y pautó la doctrina moderna en cuanto al derecho a la fianza.

En Salerno, supra, dos sujetos fueron arrestados y acusados por numerosos cargos, entre éstos, extorsión, fraude y conspiración para cometer asesinato. En la vista adversativa celebrada al amparo del "Bail Reform Act" de 1984 (18 USCS sec. 3141 et seq.) el

fiscal presentó prueba para demostrar clara y convincentemente que, la autorización de libertad bajo fianza en espera del juicio representaba en este caso un peligro que ponía en riesgo la seguridad de las personas y la comunidad en general. En la vista se probó que Salerno era el jefe y su compañero el Cápitan respectivamente de una organización criminal.

Ante el Tribunal Supremo, los acusados alegaron, entre otras cosas, que la ley es inconstitucional de su faz, ya que permite el encarcelamiento antes del juicio bajo el fundamento de que los imputados pueden cometer delitos en espera del juicio. El Segundo Circuito revocó la orden del Tribunal de Distrito bajo el fundamento de que la sección 3142 (e) era inconstitucional por violar el debido proceso de ley cobijado en la Primera Enmienda.

Según el Segundo Circuito, "la detención preventiva ordenada simplemente para evitar la comisión de un delito puede ocurrir propiamente tras la convicción."^{xlviii}

Es así como el Tribunal Supremo Federal declara la constitucionalidad del estatuto y elaboró en su opinión, los siguientes aspectos:

El "Bail Reform Act" propone y establece un balance entre el interés del Estado en proteger a la comunidad en general y el interés

de individuo en su libertad. El estatuto va dirigido a corregir las deficiencias de la fianza, autorizando al juez a determinar las condiciones en que va a otorgar fianza cuando existe la posibilidad de que el acusado ponga en peligro a la comunidad o a cualquier persona.^{xlix}

Se rechazó que la detención preventiva sin derecho a fianza constituyera castigo antes de convicción, en violación al debido procedimiento de ley. El razonamiento es que no se trata de un castigo ("punishment") a un individuo peligroso, sino una medida de protección social para tratar de solucionar o aliviar el problema de los crímenes cometidos por personas mientras están en libertad bajo fianza. En estas circunstancias, el interés apremiante del estado en la seguridad de la comunidad pesa más que el interés libertario del imputado. Las garantías procesales y otras limitaciones establecidas en el estatuto inclinaron la balanza a favor del estado. Además, se rechazó la noción de que la cláusula contra fianzas excesivas, Octava Enmienda, tuviera como corolario la detención antes de la condena. En estos casos, el gobierno puede negar al imputado la libertad bajo fianza.

Salerno, supra, no obstante, limita lo que pueden hacer los estados en su Constitución, leyes o reglas de procedimientos en la zona de detención preventiva sin fianza. Para que el gobierno

pueda mantener detenido sin fianza a un imputado, debe haber un interés apremiante gubernamental que no pueda razonablemente ser asegurado o satisfecho mediante condiciones o fianza. También, impone exigencias de garantías procesales a favor del imputado como una vista adversativa en que pueda establecerse la necesidad de que el imputado permanezca detenido antes de un fallo condenatorio.

Lo dicho en cuanto a Salerno, supra, y la Constitución Federal es doblemente importante:

1) Una enmienda constitucional o medida legislativa que suprima el derecho a libertad bajo fianza para proteger a la sociedad de imputados peligrosos no viola, de su faz, la Constitución Federal.

2) En su aplicación, el esquema regulador de la detención del imputado sin fianza podría estar reñido con la Constitución Federal bajo la cláusula del debido procedimiento de ley. Para que la detención preventiva sin derecho a fianza sea válida, es necesario que exista relación sustancial entre el interés que se intenta promover por el gobierno, de un lado, y la naturaleza del delito imputado, por otro lado.

Hasta el presente, la doctrina

pautada en Salerno, supra, sigue intacta. Sin embargo, dicha doctrina no ha finalizado el debate jurídico sobre el derecho a la fianza.

V. Alcance de la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 32

La presente medida propone enmendar la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para disponer que la enmienda propuesta sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en Referéndum Especial.

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al igual que las enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos, garantiza que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de Ley. El propósito fundamental de la presente medida es proteger al ciudadano de aquel que representa un peligro para su vida; permitirle el disfrute de los derechos constitucionales a la vida, a su seguridad y a la búsqueda de su felicidad.

Al presente, en Puerto Rico, el criterio rector para la fijación de fianza es el de garantizar la comparecencia del imputado a los procedimientos judiciales.

Este ha sido el único

propósito y criterio válido para la imposición de una fianza, o sea, garantizar la comparecencia del acusado. Los datos considerados por esta Comisión reflejan un incremento alarmante en actos delictivos. El Puerto Rico de hoy se encuentra en un desarrollo continuo en cuanto a lo social, económico y cultural, estos cambios aunque positivos para la comunidad, también traen consigo el aspecto negativo de la criminalidad. Ante la gigantesca ola del crimen, que estuvo en crecimiento hasta 1992, y que aún hoy, a pesar de una reducción en 1993 en comparación con el año anterior, sigue registrando alzas en el renglón de asesinatos. Debido a los efectos detrimentales para nuestra comunidad es imperante que varíemos el enfoque vigente al derecho a la imposición de fianza donde no sólo sea un criterio la garantía de comparecencia sino que también lo sea la seguridad de la comunidad y la prevención del crimen.

La enmienda eliminará el derecho a fianza en todo caso en que el acusado "haya sido previamente convicto por delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios y represente amenaza para la comunidad", autorizando a la Legislatura a establecer estatutariamente por medio de la Ley Habilitadora los casos que serán considerados como "delito graves serios".

Es preciso modificar nuestro ordenamiento para proteger la seguridad de nuestras comunidades y el futuro de Puerto Rico. La presente enmienda intenta garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la ciudadanía. La preocupación es la de evitar que personas que han prestado fianza, una vez libre cometan actos delictivos en contra de la comunidad o cualquier persona. Es esencial evitar que el acusado siga delinquiriendo.

En las vistas públicas celebradas por esta Comisión, surgió la interrogante de sí, ¿Es el derecho a permanecer en libertad bajo fianza, establecido en la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, un derecho absoluto?

La mencionada interrogante surgió ante posiciones opuestas asumidas por distintos deponentes y miembros de la Comisión durante la consideración en vistas públicas de la resolución Concurrente que nos ocupa.

La pregunta según formulada no tiene una contestación única y cierta. En nuestro sistema legal, quien único puede ofrecer tal contestación es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este alto foro no se ha expresado sobre el particular.

Existen argumentos a favor y

en contra de que el derecho a permanecer en libertad bajo fianza es absoluto.¹ La posición más favorecida entre los que formulan opinión legal en Puerto Rico es que el derecho es absoluto. No por ello deja de tener la posición contraria, que el derecho no es absoluto, argumento a su favor. Al considerar el alcance de determinada cláusula constitucional, en particular, una garantía del ciudadano, surge la discusión en cuanto a si se trata de un derecho absoluto o uno relativo, sujeto a limitaciones por parte de la Asamblea Legislativa.

La realidad jurídica es que la determinación de un planteamiento de esta naturaleza depende de la preferencia en el uso de métodos de interpretación constitucional.

Uno de esos métodos es la corriente fundamentalista (también conocida como literalista o absolutista).ⁱⁱ Con arreglo a ésta no cabe hacer distinciones allí donde los constituyentes no segunda está permeada de relatividad y ambigüedad. (¿Qué es irrazonable?)

En el caso de la Constitución de los Estados Unidos el método de interpretación que ha prevalecido, por mucho, ha sido el pragmático balance de intereses. Aún las cláusulas y conceptos de menor relativismo o ambigüedad han sido interpretados de esa manera. Las dos doctrinas de incorporación-

de territorios y de la Carta de Derechos - se suman como ejemplo de la ya mencionada interpretación de "Congress Shall Pass no Law" de la Primera Enmienda.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico no tiene un historial de interpretación tan amplio, que permita fácilmente ubicarlo, o ubicar a la mayoría de sus jueces, en un método de interpretación particular. Debe tenerse en cuenta que nuestro alto foro: (a) interpreta una constitución de relativamente reciente cuño (b) caracterizada por una Carta de Derechos más específica y moderna y; (c) cuya interpretación tiene que estar en armonía con la Constitución Federal y las leyes y reglamentos federales aprobadas a su amparo.

Aún así, existen opiniones del Tribunal que permiten suponer la posibilidad de un enfoque pragmático, o de balance de intereses, por lo menos en algunas situaciones.^{lii} Así, en PRTC v. Martínez, el Tribunal encontró que no era absoluto el derecho a que no se intercepten las llamadas telefónicas a pesar del texto absolutista de la Sección 10 del Artículo II. Asimismo, en Pueblo v. Santos Vega,^{liii} el Tribunal adopta el mismo método que favorece el Supremo Federal para interpretar la Primera Enmienda.

A la luz de lo expuesto, entendemos que las considera-

ciones más importantes a tomar en cuenta son las siguientes:

(1) Nada de lo anterior garantiza que el mismo enfoque se utilice al interpretar el derecho a fianza vigente. El Tribunal muy bien podría entender que la cláusula se asemeja más al derecho contra la pena de muerte o a no estar encarcelado más de seis meses antes del juicio. De así hacerlo, el Tribunal estaría recurriendo al texto de la cláusula y a un enfoque literal. Entendemos que una interpretación en el sentido de que tanto la letra de la disposición constitucional como su historial avalan la teoría de que nuestros constituyentes optaron por un derecho absoluto a fianza antes del fallo condenatorio, no provocaría gran debate en oposición en la comunidad jurídica puertorriqueña.

(2) En la eventualidad que optara por una interpretación literal, el Tribunal tendría que disponer de la premisa que, por lo general, los derechos constitucionales no son absolutos. Aún derechos que se expresan en lenguaje absoluto se han interpretado que están sujetos a limitaciones y reglamentación.

(3) El derecho a la fianza, no imputa el texto absoluto que se utilice al consignado, siempre será un derecho relativo a los medios que tenga el acusado para

pagarla. Claro está, la cuantía no puede ser tan onerosa que persiga la detención preventiva del imputado.

(4) Partiendo de la premisa que los poderes políticos consideran necesario limitar y reglamentar el derecho a la fianza para entender determinados reclamos del pueblo, hay que considerar para todo efecto práctico que el derecho a fianza es absoluta.

Cualquier limitación que se imponga por ley estará sujeta a lo que finalmente disponga nuestro Tribunal Supremo. La única forma de limitar el poder de interpretación del tribunal es enmendando la Constitución en armonía con la Ley Suprema de la Nación. Sólo mediante enmienda a la Constitución se puede garantizar que las limitaciones que desea el pueblo, y no otras, serán las que forman parte de nuestro derecho constitucional.

Durante las vistas públicas celebradas, también se suscitó un amplio debate en el sentido de que la Sección 19 autorizaba a la Asamblea Legislativa a legislar para negar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio en ciertas circunstancias. A la luz de esto se sostuvo que no era necesaria una enmienda constitucional.^{liv}

Esta disposición tiene dos oraciones, cada una de ellas se

refiere a un asunto distinto. La primera oración "tiene el propósito de que no se interprete la Constitución como un catálogo exhaustivo de los derechos del hombre en Puerto Rico. Su objetivo fue el de formular la intención de los miembros de la Asamblea Constituyente en el sentido de que la omisión de un derecho no simplificaba su exclusión".^{lv} Mal puede, esa primera oración de la Sección 19, servir de fundamento para ampliar las facultades de la Asamblea Legislativa frente al pueblo.

Lo crucial es la segunda oración de la Sección 19; la enumeración de los derechos "tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo". Esta disposición tiene el propósito de reconocer la facultad de la Asamblea Legislativa para, en el ejercicio de su "police power", aprobar las medidas correspondientes, especialmente "para introducir los programas innovadores que sacaron al país de la miseria de la década del cuarenta."^{lvi} Al parecer se trata, el derecho a juicio rápido, bajo un balance de intereses.^{lvii} El juicio público puede ser también limitado parcialmente, como cuando se permite que cierta clase de testigos declaren en privado.^{lviii} El derecho a confrontación también puede ser limitado por

estatuto, como cuando se permite la declaración del testigo de cargo sin estar presente frente al acusado, como resultado del balance de intereses en relación con intereses apremiantes del Estado, sobre todo la protección de cierto tipo de testigos.^{lix} La comparecencia compulsoria de testigos puede ser limitada para exigir al acusado una previa demostración de la necesidad o pertinencia del testimonio.^{lx} El fundamental derecho de asistencia de abogado puede limitarse a ciertas etapas del procedimiento.^{lxi} El derecho de presunción de inocencia no es impedimento para que la Asamblea Legislativa imponga condiciones -incluyendo fianza- para la libertad antes del fallo condenatorio. La expresión "imparcial", en el contexto del derecho del acusado por delito grave de ser juzgado por "un jurado imparcial", no impide a la Asamblea Legislativa regular el proceso de selección del jurado, a pesar de que el resultado sea la presencia de ciertos jurados con algún tipo de parcialidad; también hay amplia discreción para determinar si cierto delito será clasificado como grave a los fines del derecho a juicio rápido.^{lxii} La protección contra la doble exposición está sujeta a innumerables limitaciones. Lo que constituye una "fianza excesiva" es, por supuesto, materia de interpretación. La prohibición de encarcelamiento por deudas no es impedimento para recurrir al desacato, con

efecto de cárcel en caso de incumplimiento, en relación a obligaciones o deudas, que, aunque privadas, están revestidas de alto interés público, como el caso de deudas por pensiones alimentarias.^{lxiii}

En todos estos casos, la naturaleza de la protección permite su limitación o condicionamiento por la Asamblea Legislativa, a base de un balance de intereses entre la protección y otros derechos individuales o intereses apremiantes del Estado.

No obstante, no ocurre así con la prohibición de la pena de muerte; la cláusula -Sección 7 de la Carta de Derechos- es categórica: "no existirá la pena de muerte". Aquí, no está presente la relatividad o elasticidad inherente a los conceptos jurídicos de registro o detención "irrazonable", juicio "rápido", juicio "público", "debido procedimiento de ley", igual protección de las leyes", jurado imparcial", "delito grave", "asistencia" de abogado, "confrontación", comparecencia "compulsoria", fianza "excesiva", castigo "cruel e inusitado", "presunción de inocencia", y tantas otras.

Entendemos que hay poco de ambigüedad jurídica en la cláusula del derecho a fianza, al menos en cuanto a que al imputado se le fije fianza para quedar en libertad. Cabe discutir

el alcance de "libertad" en el contexto de condiciones a la libertad, como establece la Regla 218 de Procedimiento Criminal. También, cabe considerar la relatividad extrajurídica del derecho según antes hemos indicado. En resumen, sin embargo, todo se reducirá al estilo de interpretación por el que opte nuestro Tribunal Supremo.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la responsabilidad constitucional de tomar acciones para viabilizar el proceso de someter al Pueblo de Puerto Rico para garantizar el bienestar general de nuestra sociedad y asegurar el pleno disfrute de los derechos colectivos a la vida y a la paz, mediante el Artículo 1 de la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 32 se somete al pueblo para su ratificación la Enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para disponer que **"Todo acusado tendrá derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio; excepto cuando haya sido previamente convicto por delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios y represente amenaza para la comunidad"**.

Mediante el Artículo 2 se dispone que la Resolución Concurrente será sometida para su aprobación o rechazo a los

electores capacitados en Puerto Rico en un Referéndum Especial que se celebrará el 6 de noviembre de 1994. La Comisión Estatal de Elecciones desarrollará una campaña de orientación durante los treinta (30) días anteriores a la fecha.

El Artículo 3 dispone que una vez la Comisión Estatal Elecciones certifique al Gobernador que la propuesta enmienda ha recibido el voto afirmativo que la mayoría de los electores que emitieron voto válido y este lo proclame, la misma entrará en vigor. La certificación deberá enviarse al Gobernador no más tarde de 48 horas después determinado el escrutinio general. La proclama del Gobernador se expedirá no más tarde de treinta (30) días después de recibirse la certificación.

Por disposición del Artículo 4, se enviará copia de la Resolución Concurrente a los Secretarios de ambas Cámaras Legislativas, al Gobernador y al Secretario de Estado, para su publicación conforme lo dispuesto por nuestra Constitución.

VI. Conclusión

Por las Consideraciones Expuestas, la Comisión de Gobierno, recomienda la aprobación de la Resolución Concurrente de la Cámara 32, equivalente a la R. C. del S. 28,

sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)

Kenneth McClintock
Hernández
Presidente
Comisión de Gobierno"

*** Para Notas al Calce del Informe de la Resolución Concurrente 32 ver final de este Diario.**

* * * *

SR. RODRIGUEZ COLON:
Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON:
Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado recese hasta las diez y cincuenta y cinco (10:55).

SR. PRESIDENTE: Bien. Antes de darle paso a la moción de receso, le vamos a pedir a los Senadores que están en sus oficinas, que vengan al Hemiciclo porque a las diez y cincuenta y cinco (10:55) vamos a reanudar la Sesión del Senado, así es que los Senadores que están en sus oficinas que vengan al Hemiciclo. Receso hasta las diez y cincuenta y cinco (10:55).

* R E C E S O *

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.

SR. RODRIGUEZ COLON:
Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, ya hemos aprobado las reglas especiales de debate, estamos aguardando que llegue el Portavoz de la delegación del Partido Popular, para que pueda él junto conmigo anunciar los que estarán participando en el debate sobre la primera medida que tenemos en Calendario que es el Proyecto del Senado 519, que crea la tercera papeleta.

Solicitaríamos, señor Presidente, un pequeño receso en Sala en lo que finalmente podemos conversar con el Portavoz de la delegación Popular que acaba de hacer entrada al Hemiciclo.

SR. PRESIDENTE: Bien. En ese caso, si el Portavoz de la delegación del Popular no llegara en los próximos minutos está el senador Tony Fas Alzamora, el señor Tony Fas Alzamora va a actuar de Portavoz del Partido Popular en el Senado en el día de hoy.

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, déjeme comunicarme con la oficina del Portavoz, porque, a mi mejor entender, él llegaba anoche de Costa Rica, de lo contrario, yo haré lo propio.

SR. PRESIDENTE: Bien. Okey. Pues receso de cinco (5) minutos.

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Estamos en receso.

SR. FAS ALZAMORA:

Señor Presidente, era para informarle que el señor Portavoz nuestro viene de camino, viene por alguno de los pasillos de El Capitolio, así que está aquí presente.

* R E C E S O *

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se pase de inmediato a la consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día.

CALENDARIO DE ORDENES
ESPECIALES DEL DIA

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 519, titulado:

"Para enmendar los Artículos 1.003, 5.011, 5.039 y 6.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, denominada "Ley Electoral de Puerto Rico" a los fines de disponer que en las elecciones generales la candidatura para los cargos de Legisladores se incluirán en una papeleta separada de cualesquiera otras candidaturas de funcionarios cuya elección a esa fecha se disponga por ley."

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Kenneth McClintock.

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Señor Presidente, está ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 519, un Proyecto que propone que se dividan las candidaturas estatales a dilucidarse en las Elecciones Generales, estableciendo una papeleta para las candidaturas a la gobernación y a la comisaría residente, y otra papeleta separada para los candidatos legislativos en las elecciones generales, manteniendo, obviamente, otra papeleta adicional para las candidaturas municipales.

Allá para 1991, el Partido Nuevo Progresista y su candidato a la gobernación, el doctor Pedro Rosselló, comenzaron a hacer un compromiso público con el pueblo de Puerto Rico, que de resultar electo el Partido Nuevo Progresista en las elecciones de 1992, este Partido Nuevo Progresista, habría de impulsar legislación para que el pueblo de Puerto Rico pudiera votar en una papeleta separada por sus candidatos legislativos. Y votando en una papeleta separada por sus candidatos legislativos, se enfocaría una mayor atención sobre éstas candidaturas que estarían corriendo, hasta cierto punto, separadamente del candidato a la gobernación, que tradicionalmente había cargado

con los demás candidatos en la papeleta estatal. Y ocurriría con respecto a los candidatos legislativos el mismo fenómeno que se ha dado con los candidatos municipales, donde los candidatos a alcalde desde que ha habido una segunda papeleta a nivel municipal, han corrido campañas un tanto independientes de la candidatura a la gobernación y han logrado que el pueblo, que el electorado enfoque su atención más en los compromisos programáticos de los candidatos a alcalde; y eso, de hecho, ha producido que en algunos casos el partido obtenga una cantidad de votos en la candidatura a la gobernación, otra cantidad de votos en la candidatura a la alcaldía y se ha dado el caso de que el candidato a Gobernador ha perdido un municipio, pero ese partido ha ganado la alcaldía o el candidato a Gobernador ha ganado la gobernación en ese municipio, pero se ha perdido la alcaldía.

Este compromiso programático, a diferencia de muchos otros compromisos programáticos que hacen los partidos políticos, recibió un gran despliegue publicitario durante la campaña electoral de 1992. Yo me atrevería a decir, que son muy pocos los electores que votaron por el Partido Nuevo Progresista, que no estaban conscientes de que una de las cosas que el Partido Nuevo Progresista habría de hacer, si ese elector le otorgaba su voto y su confianza, era precisamente,

establecer la tercera papeleta legislativa.

El pueblo votó en noviembre de 1992, y con su voto endosó este compromiso de campaña con su voto, otorgó un mandato como parte del programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista. Esta otorgación de mandato no fue una otorgación de mandato en la ignorancia de todas las cosas que se incluyen en un programa de gobierno, pero que no se discuten; por el contrario, fue una decisión informada de la gran mayoría del electorado que estaba consciente de que el Partido Nuevo Progresista estaba apoyando el que se estableciera esta tercera papeleta.

El doctor Pedro Rosselló, en abril de 1993, envió una comunicación a la Comisión Estatal de Elecciones, pidiendo a los comisionados a que se expresaran en torno a este compromiso programático. Durante todo el año de 1993, por las razones que fueren, la Comisión Estatal de Elecciones y sus comisionados no se expresaron. El 21 de diciembre de 1993, a raíz de la radicación el 15 de diciembre, en el Senado, del Proyecto del Senado 519, que nos ocupa en esta mañana, la Comisión de Gobierno le solicitó a los tres (3) Partidos Políticos y le solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones, que se expresaran en torno al Proyecto del Senado 519. La Comisión de Gobierno celebró vistas públicas en el mes de enero de este año en torno a este asunto, más de un mes

después de haber solicitado las opiniones de los partidos políticos.

Ha transcurrido cerca de un año y medio desde que el nuevo gobierno asumió el poder. Ha transcurrido cerca de año y medio, desde que adquirimos el poder de aprobar legislación para implantar el mandato del pueblo. Ha pasado más de un año, desde que el Gobernador Rosselló, inició un proceso de consulta con los demás partidos en Puerto Rico. Ha pasado más de cuatro (4) meses, desde que el Senado de Puerto Rico procuró unas opiniones de los diversos partidos en Puerto Rico.

El Partido Nuevo Progresista por voz de su Comisionado Electoral y su Secretario General, se expresaron a favor de que este compromiso programático se convierta en Ley a la mayor brevedad posible. El Partido Independentista Puertorriqueño, por voz de su Comisionado Electoral, Manuel Rodríguez Orellana, expresó que en principio el Partido Independentista Puertorriqueño, no tiene objeciones al propósito que persigue el Proyecto del Senado 519. Es decir, disponer que las elecciones generales, la candidatura para los cargos de legisladores se incluyan en una papeleta separada de cualesquiera otras candidaturas.

El Partido Popular Democrático, expresó el 26 de enero, que en vista de que el Presidente de entonces de ese partido estaba fuera de la jurisdicción de Puerto

Rico, no estaban en posición en ese momento de emitir juicio en torno al Proyecto del Senado 519. Sin embargo, de allá para acá no se ha recibido ninguna comunicación adicional de parte de ninguno de los partidos con respecto a este asunto.

Planteó el Partido Independiente Puertorriqueño, y planteó también el Partido Popular Democrático, que este era un asunto que debía ser objeto del principio del consenso electoral. Y creo que es importante, que discutamos brevemente la aplicación del concepto del consenso electoral con respecto a este Proyecto.

En el pasado, cuando cualquiera de los partidos ha planteado una preocupación con algún aspecto procesal del sistema electoral, ha llevado ese planteamiento al seno de la Comisión Estatal de Elecciones y allí se ha buscado un consenso en torno a esos asuntos procesales que nacen de un partido mismo. Ese no es el caso que nos ocupa en el día de hoy. En el día de hoy, lo que está planteado en el Proyecto del Senado 519, es un asunto que en noviembre de 1992, se convirtió en un mandato del pueblo puertorriqueño. El pueblo de Puerto Rico eligió a veinte (20) Senadores nuevoprogresistas en el Senado, a treinta y seis (36) Representantes Nuevoprogresistas en la Cámara, eligió a un Gobernador Progresista para que convirtieran en carne de realidad, a través de una medida legislativa, el

concepto de establecer una tercera papeleta para la elección separada de los candidatos legislativos. De manera, que ahí vemos la primera gran diferencia.

Segundo, el asunto del consenso, el concepto del consenso se aplica a asuntos electorales de naturaleza procesal. En este caso no se trata de un asunto de naturaleza procesal. En este asunto se trata de un concepto que alteraría la forma de votar en Puerto Rico, que cambiaría la manera de evaluar las candidaturas en Puerto Rico.

El licenciado Rodríguez Orellana, en su comunicación a esta Comisión, señaló y cito: "Una tercera papeleta para los candidatos a puestos en nuestra Legislatura Nacional, implantaría una norma de carácter innovador que propendería a establecer actitudes diferentes de participación en las elecciones generales. De manera, que se trata de un cambio substancial en la manera de votar. Aquí no se trata de si se va a enviar una tarjeta viajera a los colegios electorales o no. Eso es un asunto que no afecta la manera de votar del ciudadano particular. Se trata de poner en manos del ciudadano una nueva papeleta y de inculcar en el ciudadano una mayor independencia de criterio al momento de ejercer su derecho al voto, con respecto a los candidatos legislativos. De manera, pues, que no se trata esto de un asunto de naturaleza procesal, sino de un asunto de

naturaleza sustantiva". La pregunta que queda entonces es, ¿ha sido tradición en Puerto Rico que el concepto del consenso electoral aplique a asuntos de naturaleza electoral sustantivos o ha aplicado solamente, como hemos visto, a asuntos de naturaleza incidental y procesal?

Posiblemente, el asunto electoral de naturaleza sustantiva, que más recientemente ha atendido la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, fue el Proyecto de Ley que en 1991, proponía la celebración de un referéndum sobre unos llamados derechos democráticos. ¿En aquella ocasión, se requirió el consenso electoral de los tres (3) partidos como pre-condición para que ese asunto electoral de naturaleza sustantiva que proponía, inclusive, la celebración de un evento electoral, se requirió el consenso como pre-condición para que esa medida fuera aprobada? Yo no era miembro de esta Asamblea Legislativa, pero sí era un ciudadano que leía periódicos, escuchaba la radio y veía la televisión. Y mi recuerdo, y sé que es el recuerdo de todos ustedes, fue que en aquella ocasión, esa medida de carácter sustantivo y electoral se aprobó con los votos en contra el principal partido de oposición de entonces y hoy partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista. En aquella ocasión, los amigos del Partido Popular y los amigos del Partido Independiente, no se cohibieron en darle su voto a favor a esa medida, en implantar esa medida,

en celebrar ese referéndum porque no existiera el consenso electoral. Y no tenían que hacerlo, porque no era tradición que el consenso electoral se aplicara a asuntos de naturaleza sustantiva.

De manera que, compañeros Senadores, el Proyecto del Senado 519 no se trata de uno de los asuntos que tradicionalmente ha sido objeto del consenso electoral. No se trata de ello, porque aquí somos meramente instrumentos del pueblo. Nosotros no hemos iniciado esta legislación, aparecerá como autor principal de la medida el senador Charlie Rodríguez, Portavoz de la Mayoría, pero él no es el autor de la medida. El autor de esta medida es el pueblo que votó ya a favor de esta medida en noviembre de 1992, y que le dio un mandato al Partido Nuevo Progresista de convertir en realidad, a través de esta medida, el concepto de la tercera papeleta. En ese sentido, el Portavoz de la Mayoría Parlamentaria era el Portavoz de la Mayoría electoral que apoya esta medida.

Segundo, esto no es un asunto incidental ni es un asunto procesal, lo dijo muy bien el Comisionado Electoral del Partido que preside nuestro amigo Rubén Berríos Martínez, esto es un asunto que va a cambiar la manera de votar en Puerto Rico, que va a cambiar actitudes en el electorado puertorriqueño, como cambió la manera de votar y cambió

actitudes en el electorado la implantación hace unos años de la segunda papeleta, la papeleta municipal.

De manera, mis amigos, que utilizar hoy el concepto del consenso electoral para abstenerse o para votarle en contra a este Proyecto, no es un argumento justificable ni es un argumento que esté fundamentado en nuestra historia legislativa ni en nuestra historia electoral. Hoy corresponde a los veintinueve (29) miembros del Senado de Puerto Rico, a los veinte (20) de la Mayoría y a los nueve (9) que no son de la Mayoría, les corresponde evaluar esta medida sobre sus méritos. Y hablando de esos méritos, este Proyecto es una medida simple, es una medida que no entra en todos los detalles sobre la instrumentación de la tercera papeleta, porque entendemos que en el pasado, los Comisionados Electorales y el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, han obrado muy bien en su función reglamentadora de aprobar los reglamentos que sea menester aprobar para llenar los blancos que deja la Asamblea Legislativa, de utilizar el peritaje electoral que ellos tienen y que la Asamblea Legislativa no tiene, el conocimiento técnico que ellos tienen y que la Asamblea Legislativa no tiene para instrumentar esta medida.

Esta medida, ciertamente, alarga el proceso de escrutinio. Esta medida, ciertamente, obligará a incurrir en algunos

costos adicionales. La Comisión Estatal de Elecciones, tendrá a su cargo determinar el proceso específico y de informarnos el costo adicional para que la Asamblea Legislativa, en su día, cuando venga el presupuesto del año electoral pueda disponer los fondos para el pago de los gastos que se incurran como consecuencia de la tercera papeleta.

Pero tampoco el alargamiento del proceso de conteo de votos, ni el asunto del costo debe ser motivo de discusión aquí en el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto se dilucidó para todos los efectos prácticos, no en el Hemiciclo legislativo, sino en las Elecciones Generales de 1992. Si alguno de los demás partidos no está de acuerdo con la tercera papeleta porque cuesta mucho o porque alarga el proceso, el momento de expresarse en contra de la propuesta fue en la Campaña Electoral de 1992, cuando Pedro Rosselló decía: "Vamos a implantar la tercera papeleta", ese era el momento de decir: "no, yo estoy en contra de la tercera papeleta por equis o ye razón". Hoy, simplemente estamos cumpliendo con el mandato del pueblo.

De manera que a mí entender, el pueblo puertorriqueño debe evaluar el voto que se emita aquí en el día de hoy, como un voto a favor de la tercera papeleta o un voto que no es a favor de la tercera papeleta. Habiendo, señora Presidenta, hecho estas expresiones iniciales,

quisiéramos, en este momento, someter las enmiendas contenidas en el informe para la aprobación del Cuerpo.

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia, la senadora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción a las enmiendas?

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta, preferimos consumir nuestro turno una vez se disponga de las enmiendas y se vote, se vaya a discutir la medida con las enmiendas.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Los que estén a favor se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. Aprobadas las enmiendas.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos ahora la aprobación de la medida.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, las reglas especiales de debate indican que los Portavoces tenemos que indicarle a su Señoría el orden en que habremos de usar nuestro

tiempo.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Y el tiempo.

SR. RODRIGUEZ COLON: Y el tiempo, así es. Queremos indicarle que por el Partido Nuevo Progresista para cinco minutos comenzará el compañero Ramón Luis Rivera Cruz; en segundo lugar, este servidor con diez minutos; en tercer lugar, el senador Dennis Vélez Barlucea, con diez minutos; en cuarto lugar, el senador Freddy Valentín con cinco minutos; en quinto lugar, el compañero Víctor Marrero con cinco minutos; en sexto lugar, el compañero Roger Iglesias con cinco minutos; en séptimo lugar, el compañero Miguel Loiz con cinco minutos y habrá de cerrar el debate la señora Presidenta con cinco minutos. Eso nos estaría dejando diez minutos pendientes que habremos de utilizar por si acaso alguien se excede o si alguno de los compañeros que aún no han llegado al Hemiciclo solicitaría el tiempo, y hemos conversado eso con el señor Portavoz de la delegación del Partido Popular. Esa sería entonces, la distribución de tiempo y el orden por parte del Partido Nuevo Progresista.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Hernández Agosto.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta, yo quiero hacer constar nuevamente

que estas reglas de debate no son el producto de un acuerdo entre los Portavoces de los Partidos políticos, sino que es la imposición del Partido de Mayoría, que cuando llegamos al Hemiciclo nos tiene las reglas de debate ya, por escrito y nos dice el tiempo que vamos a tener para debatir y el tiempo que ellos van a tener para debatir. De modo, que no se trata de un acuerdo, sino de una imposición. Frente a esa imposición distribuiremos el tiempo de la siguiente manera: el que habla va a consumir nueve minutos, los compañeros Rigau, Báez Galib, Tirado y Fas Alzamora consumirán cada uno de ellos cuatro minutos, para el total de veinticinco minutos, conforme se nos ha impuesto por la Mayoría Parlamentaria.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Tendría la bondad el señor Hernández Agosto de repetirnos...

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Con mucho gusto.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ...el orden y el número de minutos a consumir?

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Con mucho gusto. Yo voy a consumir nueve minutos, más o menos.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sí señor.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Si consumiese menos, pues naturalmente, el tiempo queda disponible para los demás

compañeros, si más, pues le reducen a los demás compañeros. El compañero Rigau, el compañero Báez Galib, el compañero Cirilo Tirado y el compañero Fas Alzamora, cada uno de ellos consumirá cuatro minutos.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Simplemente quisiéramos señalar, que cuando el compañero hace mención de la distribución del tiempo, podría crearse la impresión equivocada de que se ha sido abusivo en la distribución de tiempo. Yo quisiera señalar que, en relación al tiempo, cuando examinamos la delegación del Partido Nuevo Progresista, que tiene veinte (20) Senadores electos por el pueblo y distribuimos en cuanto al tiempo que tendrían disponible y hacemos lo mismo, entonces con la delegación del Partido Popular, que tiene siete (7) Senadores electos y lo comparamos con los veinticinco minutos que tienen ellos y los sesenta minutos que tenemos nosotros, encontramos que en la distribución hemos sido sumamente generosos. Por delegación tienen más tiempo los señores de la delegación del Partido Popular, que lo que tienen los Senadores del Partido Nuevo Progresista, cuando tomamos en

cuenta el número de miembros que tiene la delegación del Partido Nuevo Progresista. Así que hemos sido sumamente generosos en la concesión del tiempo para que la delegación del Partido Popular pueda hacer las expresiones que entienda de rigor. Y le garantizo, señora Presidenta, que nuestra concesión de tiempo es mucho más generosa que la concesión de tiempo que en el pasado le daban a la delegación, entonces Minoritaria, del Partido Nuevo Progresista.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta, una cuestión de privilegio, para aclarar un dato. Le recuerdo al compañero Rodríguez Colón, que no estuvo aquí en las pasadas Asambleas Legislativas, pero que siempre hay una referencia al pasado. Yo le quiero decir que discutíamos con el Portavoz de la Minoría el tiempo que iban a consumir. Y que muchas veces cambiamos el tiempo que tenían disponible para que tuviesen el tiempo que ellos querían, y que además, cuando llegamos aquí, todos somos Senadores. El Reglamento no puede disponer que los Senadores de Mayoría tienen más tiempo para debatir que los Senadores de Minoría. Todos somos Senadores y todos tenemos el derecho a la expresión en este Hemiciclo.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador. Dispuesto del asunto...

SR. RODRIGUEZ COLON:

Señora Presidenta, como es cuestión de rectificación y el compañero, pues hizo uso de su turno de rectificación, bien procede el turno de rectificación del Portavoz de la delegación mayoritaria.

El compañero sabe que hemos dialogado en el pasado sobre la distribución de tiempo. Precisamente ayer el compañero, pues, se encontraba en unas actividades oficiales fuera de Puerto Rico y por eso no tuvimos la oportunidad de conversar con él, pero conversamos con el Portavoz en funciones del Partido Popular y ciertamente, pues, hablamos sobre la distribución del tiempo. Yo puedo pensar que tal vez ellos quisieran tener más tiempo, pero lo cierto es que la concesión de tiempo que hemos acordado es más que justa en la distribución de los compañeros de la Minoría del Partido Popular, porque aquí la distribución de tiempo en reglas especiales de debate, tanto ahora como en el pasado, siempre ha sido a base de la delegación. De manera que, aunque todos somos Senadores, lo cierto es que el Partido Popular tiene siete (7) Senadores porque así lo quiso el pueblo y el PNP tiene veinte (20) Senadores porque así lo quiso el pueblo; y a base de esa realidad que quiso el pueblo es que distribuimos el tiempo entre los miembros del Senado. Y queríamos dejar esto claramente establecido en nuestro récord.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Dispuesto ya del asunto, vamos a

proceder entonces, con lo que está ante la consideración realmente del Cuerpo y del pueblo de Puerto Rico.

Senador Ramón Luis Rivera tiene cinco minutos.

SR. RIVERA CRUZ: Muy buenos días para todos los compañeros Senadores y señora Presidenta. Quise que me dieran esta oportunidad de dialogar con ustedes con relación a esta medida, a pesar de que tenemos dificultad con el sistema de comunicación del Hemiciclo del Senado.

¿Por qué estamos aquí hoy? Estamos aquí hoy para hacerle justicia al elector puertorriqueño. Para garantizarle unos derechos básicos que ese elector en cualquier sistema democrático debe tener. Y nuestro partido político, al que yo represento en la mañana de hoy aquí, es un partido político de avanzada; un partido político que le dio el derecho a los jóvenes de 18 años a votar en unas Elecciones Generales; un partido político que le dio el derecho de voto a los presos a través de la Ley Número 3, del 8 de septiembre de 1980; un partido político...

SR. PEÑA CLOS: Señora Presidenta, no se escuchan las palabras del "Demóstenes de Bayamón". Quisiéramos escucharlo.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Estamos conscientes, señor Senador, ya se han hecho las gestiones para que el sistema de sonido funcione mucho mejor.

Adelante.

SR. RIVERA CRUZ: ...un partido político que trajo la oportunidad al pueblo puertorriqueño de que se participara en elecciones presidenciales...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Vamos a solicitar que el Senador...

SR. RIVERA CRUZ: ...yo quisiera mudarme a otro de los escritorios.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Por favor, que se mude de escritorio, de modo que pueda utilizar otro micrófono que esté en mejor condición.

SR. RIVERA CRUZ: Esta es una de las cosas que al Nuevo Senado le falta por reparar aquí, pero próximamente imagino que se repare.

Pues decía que estamos aquí en la mañana de hoy porque le vamos a hacer justicia al elector puertorriqueño, y le vamos a utilizar justicia como este partido político le ha hecho justicia al elector puertorriqueño anteriormente, cuando le dio el derecho a los jóvenes de 18 años a votar en Elecciones Generales; cuando le dio el derecho a los presos en Puerto Rico a votar a través de la Ley Número 3, del 8 de septiembre de 1980; cuando le dio la oportunidad a los puertorriqueños de participar en primarias presidenciales a través de primarias abiertas del voto de todos los puertorriqueños. Un partido político que iniciando este cuatrienio ha presentado una

legislación para limitar el término de los legisladores, que irá a escrutinio público del elector puertorriqueño también; y ahora, la tercera papeleta. Es claro que nuestro partido no está ligado ni amarrado a ideas viejas ni a tendencias acomodaticias cuando hay un "issue" político en el país que pueda traer algún tipo de controversia. Y esta fue una de las promesas de campaña de este partido político en las Elecciones pasadas, el crear una tercera papeleta. Y esa promesa de campaña fue avalada por el elector puertorriqueño cuando precisamente, hizo uso de su voto en las Elecciones pasadas. Y hoy, vamos a reforzar esa oportunidad que tiene el elector puertorriqueño de reforzar su derecho al voto. El derecho al voto que es objeto de la mayor protección posible, protección que quedó consignada en la Asamblea Constituyente y voy a citar un párrafo, que para aquel entonces, se discutía en la Asamblea Constituyente. Y dice lo siguiente: "La elección de todo funcionario de elección popular será por voto directo. El sistema de elección de segundo grado, es decir, mediante votación indirecta, no es completamente democrático, pues el pueblo está en verdad delegando en otras personas un privilegio que le es inherente el privilegio de cada ciudadano por su propia responsabilidad, ejerciendo su propio criterio, exprese en los comicios a qué persona desea para determinado cargo".

Lo que queremos lograr con la tercera papeleta es precisamente reforzar eso que dijeron los padres de la Constitución de Puerto Rico, preguntarse por qué algunas personas que están presidiendo, están liderando algunos partidos políticos en Puerto Rico se oponen o no han tomado posición en cuanto a este "issue". ¿Por qué negarle la oportunidad al pueblo de poder escoger a base de sus criterios, de su análisis las personas que ellos quieren que le estén representando en el Senado, en la Cámara, en las alcaldías y en las diferentes posiciones públicas en Puerto Rico? ¿Por qué limitarle esa oportunidad al elector puertorriqueño? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué no han hecho ningún tipo de declaración? ¿Qué, que no hay confianza en el pueblo, o es que hay una división interna dentro de ese otro partido político tan grande con relación a la tercera papeleta que entonces, no han podido llegar a ningún consenso? Porque hace un año atrás, el Gobernador de Puerto Rico le envió comunicación a los tres comisionados electorales para que dijeran sugerencias con relación a este Proyecto. Y al día de hoy no lo han hecho, un año es más que suficiente. No podemos trabajar como trabajaban otras administraciones u otras Asambleas Legislativas, que no hacían nada y todo se les iba en estudio y análisis. ¿O será que hay miedo a una Legislatura

mixta? ¿Tenemos miedo que el pueblo ponga aquí una Legislatura mixta para que haya una verdadera, un verdadero sistema democrático en Puerto Rico?

Veamos, yo tenía por aquí la deposición de la comisionada electoral del Partido Popular ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, donde la persona mencionaba que no estaban ni a favor ni en contra del Proyecto, sino todo lo contrario; es lo único que le faltó decir para completar la línea de pensamiento. Esa deposición refleja claramente la inestabilidad, la indecisión, la ambivalencia de un presidente de un partido político que nunca se atreve a tomar una posición cuando hay alguna discusión o algún "issue" público en Puerto Rico que represente alguna peligrosidad para su posición como Presidente de un partido político, o su posición como candidato a, ya ustedes saben lo que él quiere correr en Puerto Rico. Una persona que no se atreve tomar decisiones, que siempre está entre el "sí" y el "no". Los hombres tienen que ser valientes y tienen que ser decididos si quieren recibir el respeto y el respaldo del pueblo. No pueden ser ambivalentes, porque con ambivalencias no pueden gobernar ningún país.

Y se cuestiona, o yo espero que no cuestionen, la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para poder trabajar sobre cuestiones electorales. El

Artículo 6, Sección 4, de la Constitución concede a la Asamblea Legislativa la facultad para determinar por Ley lo concerniente al proceso electoral. Y, precisamente, el señor juez Trías Monge, en el Caso PSP versus ELA, entre las posiciones que él presentaba en su decisión mencionaba lo siguiente: mencionaba que la Asamblea Constituyente prefirió no consignar en la Constitución el método de votación...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, le íbamos a advertir que quedaba menos de treinta segundos, finalice su idea.

SR. RIVERA CRUZ: Si es posible que me den un minuto adicional por el tiempo que perdimos en la transferencia de los micrófonos, se lo voy a agradecer...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sí, ¿cómo no? Un minuto adicional y entonces le cedemos el turno a la otra parte.

SR. RIVERA CRUZ: ¿Cómo no? El señor Trías Monge lo dice claramente aquí, que la Asamblea Constituyente prefirió no consignar en la Constitución el método de votación a emplear y dejó el asunto en manos de la Asamblea Legislativa. Es de índole constitucional la amplia facultad que tiene la Asamblea Legislativa para disponer lo concerniente al proceso electoral, y eso los tribunales lo han reconocido ampliamente en Puerto Rico. La voluntad del

pueblo es la fuente del poder público donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación ciudadana en las decisiones colectivas. No puede jamás, y sé que no tengo mucho tiempo, y quería seguir tocando otros puntos muy importantes, pero no puede jamás, el susodicho consenso, ir sobre la facultad que tiene el elector puertorriqueño de decidir el futuro de su país. Así que yo le voy a pedir a los compañeros legisladores de la Minoría, que analicen claramente su posición y le den una respuesta a este pueblo. Este pueblo está esperando una decisión de ellos. Respaldan o no respaldan la papeleta, pero que no se escuden en el susodicho consenso, para entonces, no tomar ninguna posición y aparecer como los buenos de la película.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador.

Senador Hernández Agosto.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta, tenemos ante nuestra consideración una legislación que propone establecer una tercera papeleta para las próximas Elecciones de 1996, de suerte que el pueblo pueda votar por sus legisladores separadamente de su voto con respecto a la Gobernación y al Comisionado Residente, ya hay una papeleta separada para el Gobierno Municipal.

No está en juego la facultad de la Asamblea Legislativa para

legislar, en absoluto. Esta Asamblea Legislativa como anteriores Asambleas Legislativas, y estoy seguro como las Legislaturas que nos sucedan, tienen poder para legislar. Una cosa es tener el poder y otra cosa es usar ese poder o saber usar ese poder.

En el pasado, la legislación electoral a pesar de que no había un acuerdo de los partidos políticos, se aprobaba por consenso. En los tiempos en que gobernó don Luis Muñoz Marín, siempre buscó el consenso de los partidos de Minoría para tocar la Ley Electoral. Nadie se lo requería, tenía la facultad la Asamblea Legislativa para legislar, pero prefería hacerlo con el concurso de los partidos de Minoría porque la legislación electoral es vital para nuestra democracia. Es la legislación que debe merecerle la mayor confianza al pueblo de Puerto Rico, y no debe verse como una legislación que en forma alguna es impuesta por el partido de mayoría de turno. En el pasado hemos cometido dos errores. Uno, dos errores en procedimiento, por lo menos en procedimiento. Cuando se creó el Tribunal Electoral, por una administración del Partido Popular, se creó a pesar de que los partidos de minoría estaban en contra de esa legislación. Resultado, cuando se perdieron las Elecciones, cuando perdimos las Elecciones en el 1976, unilateralmente un Gobernador PNP, también propuso un cambio de Ley Electoral, eliminó el Tribunal Electoral y

unilateralmente el partido de mayoría aprobó legislación electoral. Resultados, la legislación no le mereció confianza al pueblo de Puerto Rico. Tuvimos el problema, que quedará como parte de la historia electoral de Puerto Rico, de Valencia. Resultados electorales que todavía se cuestionan con razón o sin razón, pero esas son las realidades. Yo no entro en los méritos del cuestionamiento. Señalo las realidades que todavía se cuestionan. Mil novecientos ochenta y dos, la Legislatura de Puerto Rico designa una comisión para entender en la legislación electoral; y esa comisión propuso una legislación tripartita y enfatizó la importancia de que la legislación electoral fuese producto del consenso de los partidos políticos. La legislación de 1982, es una legislación de consenso. Y de allá para acá no ha habido enmienda alguna a la Ley Electoral que no haya tenido el consenso, el acuerdo previo de todos los partidos políticos. Resultado, hemos tenido 12 años de paz electoral. Ningún partido político cuestiona la legislación electoral ni sus procesos ni sus resultados. Es una Ley respetada por todos los partidos políticos y es una Ley con la cual todos los partidos políticos viven satisfechos del proceso.

Ahora se propone una enmienda a esa Ley Electoral sin buscar previamente el consenso, sin encontrar previamente el consenso. Y no se trata de que estemos a favor o en contra de legislación. De lo que se trata es,

que el partido de mayoría no es el único partido que tiene propuestas para enmendar la Ley Electoral. Los demás partidos de minoría tenemos propuestas para enmendar la Ley Electoral. El Partido Independentista las tiene, el Partido Popular las tiene y lo que está en juego es si va a romper el consenso que se estableció en el 1982, para cometer el error que cometimos dos veces anteriores con resultados de los que nadie puede estar orgulloso o sí, vamos al consenso y aprobamos la legislación por consenso. Se reclama el mandato del pueblo. Miren compañeros, ya eso del mandato lo hemos oído tanto. El partido de gobierno tiene un mandato de separar la gobernación de la presidencia del partido, y escuchaba yo al Secretario general del PNP los otros días, decir, que para eso se requería consenso. Se requiere consenso porque ahora se quieren arrepentir de aquella propuesta porque el Gobernador no quiere dejar la presidencia del partido, porque para eso ni siquiera necesita legislación, lo puede hacer voluntariamente; puede decir: "Elijan otro presidente, yo no voy a ser el presidente del PNP", pero como no lo quieren hacer, reclaman para eso el consenso; el consenso que no se quiere respetar para la tercera papeleta. Y contra la voluntad del Partido Independentista, que no está en contra de la tercera papeleta. Lo que está es en contra de que el partido de

gobierno quiera despachar una enmienda electoral y sola, aisladamente, y no considerar las otras enmiendas que tienen los demás partidos políticos; que debe haber la discusión de todas las enmiendas a la Ley Electoral, para entonces, con el acuerdo que haya, venir y enmendar por consenso la Ley Electoral. El Partido Popular no ha dicho que está en contra de la tercera papeleta. Yo quiero reconocer los esfuerzos del compañero Rodríguez Colón, que hace meses me habló de la tercera papeleta. Yo le dije, yo personalmente no tengo objeción, pero yo quiero que esto lo considere el Partido Popular una vez se decida, se dilucide la presidencia del Partido Popular para el futuro y no en una presidencia transitoria como la que yo ocupo. Y en ese proceso estamos. Y el Presidente del Partido Popular, el Alcalde de San Juan, le escribió al Gobernador el 25 de abril, hablándole del consenso y pidiéndole una reunión de los presidentes de los partidos políticos para discutir enmiendas a la Ley Electoral. Y le da diez enmiendas, diez propuestas, para considerar la Ley Electoral. El Gobernador ni siquiera le ha acusado recibo al Presidente del Partido Popular de esta carta. Hay enmiendas importantes, suspender una inscripción que costaría, una inscripción general, que costaría alrededor de veinte (20) millones de dólares, que es innecesaria, eso requiere una

enmienda. Permitir que las primarias se celebren en colegio abierto...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador...

SR. HERNANDEZ AGOSTO: ¿No hay minutos?

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ...le anticipamos que le queda un minuto.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Pues cómo no, muchas gracias, señora Presidenta. Eso requiere también enmiendas a la Ley Electoral, hay diez enmiendas propuestas. Todo lo que queremos es, vamos a discutir todas las enmiendas que tienen todos los partidos políticos y entonces, ahí venimos, como lo hicimos en el '82, con unas enmiendas de consenso.

No debemos olvidar, por otro lado, que las papeletas adicionales han tenido el efecto de que los electores echan más papeletas en blanco. En el 1980, se echaron dos mil seiscientos sesenta y cuatro (2,664) papeletas en blanco. En el '84, cuando habían dos papeletas, se echaron cinco mil setecientos siete (5,707). En el '88, se echaron dieciséis mil quinientos ochenta y cinco (16,585) y en el '92 dieciocho mil doscientos setenta y seis (18,276), van en aumento. Y todos estos factores hay que considerarlos porque no queremos que haya una abstención mayor de los electores en las votaciones. Es importante que todos voten por todos los candidatos.

Señora Presidenta, compañeros del Senado, en el breve tiempo que se nos permite participar y exponer nuestros puntos de vista, lo que queremos resumir es que no estamos aquí discutiendo los méritos de la tercera papeleta, estamos discutiendo aquí los méritos de que la legislación electoral que debe merecer la confianza de todos los partidos políticos se legisle siempre por consenso, como ha sido la tradición mucho antes de los años '70 y como ha sido desde 1982 para acá.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador. Senador Rubén Berríos.

SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, señora Presidenta, y compañeras y compañeros del Senado, estamos hoy ante un Proyecto de Ley que, en sus méritos, si estuviéramos ajenos a la situación política y otras realidades políticas y legales de nuestro país, sería un buen Proyecto. Hay argumentos a favor y argumentos en contra de la tercera papeleta. A mí me gustaría resumir algunos de ellos y luego hablar del problema mayor. No hay la menor duda que una tercera papeleta permite una mayor libertad al elector individual para escoger candidatos sobre la base de los méritos de los candidatos. Además, no hay la menor duda, de que una tercera papeleta obligaría a los partidos a escoger mejores candidatos.

El Partido Independentista fue

quien propuso la segunda papeleta en Puerto Rico. Y debemos reconocer que el Partido Nuevo Progresista, en el poder en aquel entonces, adoptó la idea y la echó hacia adelante. Es decir, nosotros estamos, como cuestión de principio, siempre a favor de una mayor libertad para el elector al momento de escoger. En contra de la tercera papeleta, sin embargo, hay factores de peso. No hay la menor duda que si seguimos fraccionando la papeleta como por lógica debería hacerse, porque, por qué no una para Comisionado Residente y otra para Representantes y Senadores de Distritos y otra para Asambleístas Municipales, se corre el peligro de que se fraccione la voluntad del pueblo en algún momento. Y el problema con fraccionar la voluntad del pueblo es, que al echar a un lado los partidos políticos, el efecto inevitable dentro del sistema en que vivimos es darle mayor poder a los intereses especiales, a los grandes intereses económicos que, al aislar a los candidatos pueden someterlo a influencias indebidas de forma mucho, mucho más efectiva que cuando esos candidatos forman parte efectiva y real de un partido político. Es decir, en nuestro sistema democrático el partido político es un contrapeso a el poder de los grandes intereses económicos. Y en esos partidos políticos se logran consensos de distintas voluntades y luego, a través de un programa común

vienen a una Legislatura o a un ejecutivo a ejecutar una voluntad del pueblo. En la medida en que se disperse mucho esa voluntad del pueblo y se debilite mucho a los partidos políticos, los que van a mandar son los poderosos nuevamente que van a aislar a cada uno de los elegidos y hacerle presión indebida. O sea, que hay que estar en vela siempre respecto a lo que yo llamaría, la atomización, la fragmentación de la voluntad del pueblo.

He querido resumir los argumentos a favor y en contra de la tercera papeleta, porque creo que lo que se está tratando aquí es un problema mucho más profundo de lo que parece. En este momento histórico en Puerto Rico, me parece que los argumentos a favor de esta tercera papeleta son mayores que los argumentos en contra, en este momento. Y por lo tanto, como cuestión de principios, nosotros no tenemos ninguna objeción a la tercera papeleta. Lo que sucede, sin embargo, es que aquí hay un asunto mucho más profundo, mucho más importante, de mucha mayor envergadura, planteado para nuestro pueblo, y es que hay otra consideración, que es la consideración del consenso político, que es una especie de regla ética-política más importante que una ley en particular, no tan importante como la Constitución, pero muy importante también para el país. Y es lo que yo llamaría, vuelvo a repetir, una norma ética-política, una ley no escrita ética-política mediante la

cual los partidos políticos se han puesto de acuerdo para que cualquier cambio de la Ley Electoral sustancial, sustantivo o procesal, sea hecho por consenso. Eso es respondiendo a una historia en Puerto Rico en la cual se vio el caso de Valencia, el caso de la imposición del Tribunal Electoral por parte del Partido Popular, y el caso de imposiciones posteriores por parte del PNP, que hacían que nuestro pueblo desconfiara del sistema del conteo de votos, de las reglas del juego. Y establecimos esta norma de consenso que se ha convertido en una norma superior de comportamiento. Y desgraciadamente, en efecto, si aprobamos la tercera papeleta en esta Legislatura estaríamos violentando esa norma superior ético-política del país. Se argumenta que esto está en el programa del PNP. El programa del PNP no es una Constitución. No todo lo que el programa del PNP dice es aquello que fue votado por electorado del PNP. Más aún, si estamos hablando de democracia, los legisladores Populares e Independentista sacamos más votos que los legisladores penepés en este país. Más del cincuenta (50) por ciento de los votos fueron emitidos por legisladores del PIP o del Partido Popular. O sea, que no estamos hablando de mayorías y minorías, o sea, que no nos metamos en esa cuestión de que si el programa del PNP prometió algo. La gente votó por el programa del PNP por mil razones, algunas de las

cuales estaban en el programa y otras de las cuales no estaban en el programa. Así es que argumentar ahora que esto hay que aprobarlo porque el programa del PNP lo dice, es, por ejemplo, no darse cuenta que el programa del PNP, evidentemente, presuponía el conocimiento de las reglas de consenso, la cual el Gobernador de Puerto Rico, el actual presidente del PNP, el anterior Gobernador de Puerto Rico y este servidor, suscribimos como una regla óptima de comportamiento en el país. Es decir, cuando en el programa del PNP se puso ese asunto de la tercera papeleta, era suponiendo, obviamente, la Ley de Consenso, que es una Ley superior, porque es una ley de comportamiento ético-político en el país. Por eso es que el Partido Independentista no puede estar de acuerdo con esta tercera papeleta sin el consenso de los tres partidos políticos, aunque en principio no tiene ninguna dificultad y la ha propuesto reiteradamente.

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el consenso. ¿Por qué esta velocidad si estamos a dos años y medio de las Elecciones? ¿Por qué no seguimos buscando el consenso un poco más a los niveles que sea necesario buscar ese consenso? Hay otras ideas que tiene el Partido Popular, otras ideas que tiene el Partido Independentista que conjuntamente se pueden explorar con ésta. Yo anticipo que el Partido Independentista no

va a tener ninguna objeción en esta idea como parte de un consenso más amplio de ideas. ¿Por qué no lo buscamos? Me sospecho, por lo tanto, que aquí hay algo envuelto que no está sobre el tapete y es, obviamente, unas disputas que hay dentro del Partido Nuevo Progresista, disputas normales y corrientes, pero que, obviamente, llevan a algunos compañeros del PNP, a querer llevarle un mensaje al señor Gobernador de que ellos no tienen temor de pararse en sus propios méritos frente al electorado puertorriqueño. Yo entiendo eso. Yo entiendo por qué los legisladores del Partido Nuevo Progresista quieren llevar el mensaje al Gobernador; nosotros somos líderes políticos y tenemos nuestro electorado. Y entiendo por qué el Gobernador le quiere mandar el mensaje contrario a los distinguidos compañeros legisladores; pórtense bien, porque si no, me voy solo en la papeleta arriba y ustedes se van a colgar. O sea, yo entiendo ese tipo de confrontación política y eso es lo que está envuelto aquí. Por esa pelea interna en el PNP no dejemos al lado el asunto, la norma, la Ley del Consenso. Lo que está planteado aquí hoy no es, por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, el problema de la tercera papeleta, lo que está planteado aquí es el problema de la ley, de la norma ético-política del consenso y no debemos dejarlo a un lado. Vamos a dejar la disputa para otros niveles y vamos, en el día de hoy, a echar a

un lado este Proyecto y a votarle en contra. Muchas gracias.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Queremos informarle, señor Senador, que todavía le restaba un minuto de su tiempo.

Senador Charlie Rodríguez.

SR. RODRIGUEZ COLON: Sí, muchas gracias, señora Presidenta.

Lo que está envuelto aquí, compañero, es la soberanía del pueblo puertorriqueño, es si efectivamente nosotros, como legisladores electos por el pueblo, vamos a responder al mandato que el pueblo nos dio. Distinto, tal vez, a los partidos de oposición, el Partido Nuevo Progresista en su programa de gobierno estableció un contrato con el pueblo puertorriqueño; un contrato donde le decíamos al pueblo: un voto por el PNP, representa que haremos esto, esto y esto. Y nosotros respetamos el contrato que hicimos con el pueblo. Lo que pasa es que los políticos de la vieja escuela, lo que hacían era que presentaban un programa de gobierno al pueblo de Puerto Rico y, una vez eran electos echaban al zafacón el programa donde se comprometieron con el pueblo y hacían otras cosas que el pueblo no le dio mandato. Como no le dio el pueblo mandato ni al Partido Popular ni al Partido Independentista, de atosigarle al pueblo puertorriqueño un referéndum sobre los derechos democráticos, los llamados derechos democráticos del pueblo. ¿Qué mandato

tenían los legisladores del Partido Popular y el Partido Independentista, para hacer eso? El PNP sí, tiene un mandato, un mandato que le da el pueblo, de un contrato que hicimos con el pueblo; el contrato de que habríamos de liberar al elector puertorriqueño, de que habríamos de hacer más efectivo su voto, de que cuando fuera a votar por los legisladores no tuviera que estar votando por meras gríngolas partidistas, sino que pueda elegir a los legisladores a base de un análisis y evaluación, para que pueda realmente liberarse y cuando elija un legislador, lo elige porque entiende que es la persona capacitada para representarlo en la Legislatura de Puerto Rico. Porque después de todo, de las tres Ramas de Gobierno, la Rama más representativa del pueblo, no es el Gobernador, no es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Rama más representativa del pueblo lo es, la Asamblea Legislativa. Pues lo que estamos haciendo con esta tercera papeleta es precisamente diciéndole al pueblo: "Usted, usted pueblo puertorriqueño, elija sus legisladores, no porque están en una plancha, elíjalos porque están capacitados y preparados para representarlo", y a eso parecen oponerse los compañeros de Minoría. Porque fíjense como los dos exponentes de esos partidos de Minoría dicen: "No, no, no; si no tenemos problemas en los méritos de lo que se persigue con

la tercera papeleta. No, no; si nos parece bien. No, no; si está..."

Ah, pero el consenso, el consenso que, obviamente, en derecho sustantivo no puede haber más consenso que no sea el consenso del pueblo de Puerto Rico. Y, obviamente, en este asunto lo que perseguimos los del Partido Nuevo Progresista es que el pueblo pueda votar libremente sobre sus legisladores. Que nadie me pueda decir a mí: "Tú estás allí porque yo te llevé en las faldetas mías". Ni que tampoco nadie me pueda decir que uno aquí simplemente vino porque se aprovechó de una ola. Aquí, los que estemos aquí, no debemos aprovecharnos de la ola de nadie que no sea la ola del pueblo, que quiera tener legisladores cualificados representándoles aquí.

Y esto no es nuevo, en tantas jurisdicciones de la Nación Americana los legisladores son electos, no tan sólo en papeletas separadas, hasta inclusive, en una elección separada. En ese sentido, nadie ha dicho que esa democracia ha fallado, pero aquí no queremos tener eso. Y lo absurdo es que aquí endosamos la segunda papeleta para elegir a los alcaldes separados del Gobernador, del Comisionado Residente y los legisladores, para entonces era bueno, pero ahora elegir los legisladores aparte aparentemente, se levantan, de inmediato, excusas como la del consenso.

Miren, vamos a hablar de consenso. Y yo tengo que reconocer que el Portavoz de la delegación del Partido Popular

reconoció los esfuerzos que hice, tanto con él como con el compañero Rubén Berríos, sobre esta medida, que está plasmada en el programa de gobierno del PNP. Miren, el 14 de octubre le envié una carta al Portavoz de la delegación del Partido Popular y Presidente del Partido Popular Democrático entonces, Hernández Agosto, acompañándole un borrador de anteproyecto de ley dirigido a la tercera papeleta, con el propósito de que la estudiara, que la examináramos y escuchar sus recomendaciones. Lo mismo hice con el compañero Rubén Berríos, Portavoz de la delegación del PIP, y Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Luego, el 5 de noviembre, transcurrido prácticamente un mes de haberle enviado la primera carta con el anteproyecto, y ante no haber recibido contestación escrita, aunque sí, conversaciones sostuvimos, le remití otra carta, donde le decía que le hacía llegar nuevamente el borrador de anteproyecto y que me proponía radicar la medida. Y conversamos también y ninguno me dijo: "Estoy en contra de la medida". Al contrario, que la favorecían, pero que habían otros asuntos que ellos también querían discutir. En otras palabras, que esto de la tercera papeleta que todo el mundo está de acuerdo que es bueno, ellos dicen: "No, eso va a ser una ficha de tranque que yo voy a usar para poder obligar otras cosas que queremos en términos político-partidista."

En otras palabras, una tercera papeleta que no tiene nada que ver con la política-partidista, sino que tiende a liberar al elector de la política-partidista, que puede elegir a sus legisladores independientemente de la cuestión política-partidista, de la cuestión de cómo vote por el Gobernador o cómo vote por el Alcalde. Esto que libera la cuestión político-partidista se quiere utilizar como una ficha de tranque para poder ellos lograr otros asuntos que políticamente y partidistamente les conviene, vis a vis lo que perseguimos con este asunto, que es darle al pueblo la herramienta para que diga quiénes de los que estamos aquí merecemos estar cuatro (4) años más, no porque somos del partido el cual la persona simpatiza, no porque somos del partido del candidato a Gobernación que simpatiza, no porque somos del partido del candidato a alcalde con el que él simpatiza, sino porque cree en ese candidato por sus propios méritos. Y ante eso, los compañeros dicen que no saben, que se abstienen y hablan del consenso. ¿Por qué no hablaron del consenso cuando el referéndum de 1990? ¡Ah! porque no es una enmienda a la Ley Electoral. Pero señores, pretendían trastocar todo lo que conocíamos nosotros como nuestro ordenamiento jurídico constitucional, pero lo hicieron, sin mandato porque el pueblo no dio ningún mandato a ellos para hacer eso. Eso no se discutió en

la campaña electoral del '88. Y ahora nos dicen que no se puede hacer eso.

También miren, tenemos cartas aquí del principal partido de oposición. Mire, el 26 de enero el que era entonces, comisionado electoral del Partido Popular, el licenciado José Ariel Nazario, cuando se le citó para que compareciera a unas vistas públicas, porque hubo vistas públicas sobre este proyecto, envió una carta donde decía, y cito: "El asunto de que trata la medida no ha sido considerado por el cuerpo directivo central del Partido Popular Democrático, su Junta de Gobierno. En estos momentos el Honorable Presidente del Partido Popular Democrático y Portavoz del Partido Popular Democrático ante el Alto Cuerpo, Senador Miguel Hernández Agosto, se encuentra fuera de Puerto Rico, razones por las cuales se me hace imposible expresar la posición del partido que represento ante la Comisión Estatal de Elecciones." Pero obviamente, el Presidente del Partido Popular regresó de su viaje fuera de Puerto Rico, pero la Junta de Gobierno no discutió el asunto. Yo también quería discutir las reglas de este procedimiento de debate ayer, pero el compañero también estaba afuera, y no está mal que esté fuera, pero no podemos atrasar los procesos por eso.

Luego el 9 de febrero, recibimos otra carta...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA):

Compañero, queremos informarle que de los primeros diez (10) minutos asignados a usted se consumieron, como la delegación aún tiene minutos en reserva, le vamos entonces a permitir que utilice de ese tiempo acumulado.

SR. RODRIGUEZ COLON: Y vamos a ser sumamente comedidos en el uso del tiempo, señora Presidenta.

Dice aquí, en la comunicación del 9 de febrero de 1994, por parte de Leonardo González Rivera, Secretario General del Partido Popular, y cito: "Debo informarle que la Junta de Gobierno, organismo rector del Partido Popular Democrático, no ha determinado la posición de nuestra colectividad en relación al Proyecto del Senado 519. Corresponde a dicha Junta de Gobierno, no a este servidor -estoy citando de la carta-establecer la opinión del Partido en lo referente a la propuesta legislativa en cuestión". Y la firma Leonardo González Rivera. Así que en enero no se pudieron reunir, en febrero no se pueden reunir y la Junta de Gobierno del Partido Popular parece que no se reúne para discutir esto. Y entonces, nosotros vamos a tener que quedarnos a merced de la Junta de Gobierno del Partido Popular para decidir un derecho sustantivo del pueblo de Puerto Rico. Lo siento, compañero, el consenso que se habló en el 1982, no fue dirigido para estrangular la voluntad del

pueblo de Puerto Rico, para estrangular la oportunidad de que ese pueblo pueda votar libremente, para estrangular y evitar que ese pueblo pueda decidir en una tercera papeleta quiénes serán sus legisladores, si fue bueno para los alcaldes, tiene que ser bueno para los legisladores.

De manera que, se han hecho tantos esfuerzos para lograr este consenso y no se logra. Y desde el año pasado, el señor Gobernador de Puerto Rico le envió una comunicación al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a los tres (3) Comisionados Electorales de los partidos políticos y les pidió que reaccionaran a un anteproyecto en esta misma dirección. Ha transcurrido, prácticamente un año desde que se hicieron esos pasos y todavía no se logra reacción positiva de consenso. Obviamente, mis amigos, no podemos aguantar más. Hemos hecho todo lo posible para cumplir con nuestro pueblo, todo lo posible para cumplir con el llamado consenso, pero no podemos permitir que el consenso se utilice para impedir la voluntad de este pueblo.

Yo le pido al Pueblo de Puerto Rico que me ve y me escucha hoy, que coja el teléfono y llame a sus legisladores, llámele y dígame, que usted quiere la tercera papeleta, porque usted quiere estar en disposición de elegir los legisladores por sus propios méritos. Llame a los legisladores del Partido Popular, llame al legislador del Partido

Independentista, haga escuchar su voz, que no utilicen esto para adelantar causas políticas partidistas, sino que utilicen su voto para adelantar la causa del pueblo de Puerto Rico.

Compañeros y amigos del Senado de Puerto Rico, esta medida sí es de consenso, del consenso manifiesto del Pueblo de Puerto Rico que quiere participar y elegir a sus legisladores independiente del Gobernador, del Comisionado Residente y de los alcaldes y asambleístas, por eso le votaré a favor. Y espero que en la Cámara de Representantes actúen conforme a esta medida, porque estaríamos respondiendo al Pueblo de Puerto Rico. Por eso, la delegación del PNP votará a favor e invito a los compañeros a recapacitar y que voten a favor. Muchas gracias.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Compañero, consumió tres (3) minutos adicionales al tiempo asignado. Vamos a reconocer al senador Sergio Peña Clos.

SR. PEÑA CLOS: Mis hermanos puertorriqueños, señora Presidenta Accidental del Senado de Puerto Rico, en el día de hoy en que discutimos el Proyecto del Senado 519, suscrito por la Mayoría Parlamentaria del PNP y por este servidor, Sergio Peña Clos. Esta tercera papeleta, este concepto con el cual siempre este servidor había simpatizado y recomendado, porque es en el 1982, estando en Mayoría, la hoy Minoría del PPD, que se estableció la segunda papeleta;

logro de la administración del Partido Nuevo Progresista, que también es el que libera a ese elector puertorriqueño del encerramiento al cual nos acostumbramos, que teníamos que llegar y nos encerraban allí por horas. Ese fue otro adelanto también de la Ley Electoral, el uno poder votar tan pronto entraba uno al colegio. Así es que esta legislación ha sufrido distintas atemperaciones y enmiendas. Y he dicho que simpaticé con la tercera papeleta, al igual que lo hice con la segunda papeleta, que establece el elector votando por su alcalde y la Asamblea Municipal en el municipio donde reside. Creo que la tercera papeleta no se ha materializado, gracias a la estrechez de una visión política y poca gallardía del liderato anterior que ha mantenido el control del Gobierno en Puerto Rico. Lo digo con pena y con dolor, porque sé que todo esto requiere gran convicción personal y tener fe en el desarrollo de la democracia. Creo que esta tercera papeleta propicia la fluorescencia política del verdadero liderato puertorriqueño. No es el liderato ese que encasillan las maquinarias tradicionales en Puerto Rico. Creo que esta tercera papeleta mantiene un proceso depurador del sistema democrático.

Aquí se ha hablado de Valencia, aquí se ha dicho que Valencia fue una horrorosidad. Pues miren, es la primera vez que en Puerto Rico se desarrollan

unas elecciones casi a la par, nadie cuestionó los cinco (5) votos con que prevaleció Gudelio Díaz Morales sobre su hermano en Aguas Buenas. ¿Por qué? Porque ganó el Partido Popular. Nadie cuestionó los siete (7) votos de Angelito de León en Juana Díaz. ¿Por qué? Porque ganó el Partido Popular. Nadie cuestionó los trece (13) votos de Roberto Rodríguez en Barranquitas. ¿Por qué? Porque ganó el Partido Popular. Nadie cuestionó los ciento trece (113) votos de mi amigo Angel O. Berríos sobre el PNP. ¿Por qué? porque ganó el Partido Popular. Pero se cuestionó el triunfo de Carlos Romero Barceló por tres mil trescientos (3,300). ¿Por qué? Porque derrotó a mi amigo y hermano Rafael Hernández Colón. Aquel proceso demostró que todos los funcionarios de colegio en Puerto Rico estaban preparados como piratas, con sable en la mano y cuchillo en la boca y escudo en la mano izquierda, porque fue el proceso más limpio que conoce la historia de este país, porque fue recontado voto a voto y nos olvidamos que el Supremo de Puerto Rico validó aquella elección. Pero todavía es la hora que por conveniencias políticas algunos amigos les conviene estar con este "duérmete nene" todos los días.

Bien. Vamos al grano también. ¿Qué ha traído la segunda papeleta? La segunda papeleta ha liberado al elector. Tenemos el ejemplo aquí en San

Juan, el amigo Oreste Ramos obtuvo ciento un mil ochocientos ochenta y seis (101,886) votos. El amigo Rolo Silva, obtuvo ciento un mil cuatrocientos treinta y ocho (101,438). Triunfaron el amigo Oreste Ramos, por trece mil setecientos y pico de votos sobre el que más votos obtuvo en el Partido Popular, John Fucile. Rolo saca ciento un mil cuatrocientos treinta y ocho (101,438). La que le sigue en el Partido Popular, doña Gladys Nieves, ochenta y siete mil trescientos noventa y uno (87,391). Marta Font de Calero, doce mil ochocientos noventa y seis (12,896). Pedro A. Parrilla Cruz, once mil ochocientos cuarenta y tres (11,843). ¿Ustedes saben lo que refleja esta votación? Refleja que el PNP arropó en San Juan, ganó los cinco (5) Precintos en cuanto a Distrito Representativo se refiere, triunfa en la Asamblea Municipal. Pero qué pasó, que perdió la Alcaldía. Pero también refleja otras cosas que el elector, básicamente, recordando al hombre que pide un voto prestado, que se llamaba Luis Muñoz Marín, porque en el 1938 acudió ante los ojos de este pueblo y le dijo: "Mis hermanos yo quiero un votito prestado, quiero un votito prestado para que el elector no continúe manteniendo esas deferencias hacia sus antepasados". Porque su padre había sido liberal, pues yo voto con el Partido Liberal. Y porque su padre había sido Estadista,...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA):

Queremos advertirle, compañero, que le queda medio minuto de su tiempo.

SR. PEÑA CLOS: Bien. Trataré de concretar rápidamente este último o penúltimo pensamiento. Ese que pidió el voto prestado, después era un goloso del voto íntegro, una sola cruz debajo de la Pava, no quiero voto mixto, no quiero puercas a medias con nadie. Pidiendo ese voto íntegro que se da en esa papeleta, pero que no se daría en esa tercera papeleta, cada cual cabalgaría sobre sus propios méritos, no sobre los estribos del candidato a la gobernación.

Por esa razón, señora Presidenta, habré de votar a favor de la tercera papeleta para que el electorado puertorriqueño se libere de esas grandes maquinarias que nos estrangulan como pueblo, para que el pueblo tenga mayor oportunidad en ese proceso depurador que es la democracia puertorriqueña. Tengamos fe, como lo hicimos en el pasado, habrá de funcionar la tercera papeleta, contrario a lo que piensa un Héctor Luis Acevedo, o el liderato de otros partidos.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Gracias, señor Senador.

Senador Marco Rigau.

SR. RIGAU: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeros Senadores. Pregunto, ¿por qué tenemos que hacer algo malo para lograr algo bueno? Vamos a asumir, y yo creo que ese es el caso, que todos o casi todos aquí

estamos a favor de la tercera papeleta. Yo estoy a favor y si todos estamos a favor, ¿por qué entonces el PNP quiere aprobarla por mollero, sin haber negociado antes el contenido de la legislación y sin haber negociado antes las distintas propuestas de enmiendas que existen en este momento en manos de los tres partidos y de los Comisionados Electorales para enmendar la Ley Electoral?

La democracia puertorriqueña ha podido funcionar y ha sido modelo en toda esta región, porque hemos entendido que las reglas del juego político, la Ley Electoral, cómo se eligen las personas, se han aprobado por unanimidad de los tres (3) partidos, por consenso. En los ocho (8) años que Eudaldo Báez Galib fue Comisionado Electoral, hoy Senador, teniendo nosotros el Partido Popular mayoría en Cámara y Senado, nunca, nunca se enmendó la Ley Electoral si no hubo antes un acuerdo unánime de los tres (3) partidos, del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista y del PIP.

El contrato con el pueblo puertorriqueño, que hablaba el distinguidísimo senador Charlie Rodríguez, es un contrato que ellos cumplen, la Mayoría PNP, cuando quieren.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Senador, disculpe usted que le interrumpa.

Quiero recordar a los compañeros, que las vistas están siendo televisadas y que nos gustaría

que ocuparan sus bancas, de manera que se proyecte la dignidad que el Cuerpo debe tener.

Continúe, Senador.

SR. RIGAU: Muchas gracias. Espero que ese contrato, y le pregunto al distinguidísimo Portavoz de la Mayoría Accidental en este momento, ¿dónde está la legislación para separar el Presidente del Partido del candidato a Gobernador, dónde está que no la veo? ¿Por qué Pedro Rosselló no ha renunciado a la Presidencia del PNP, si él se lo propuso al pueblo puertorriqueño en el programa de gobierno del PNP? Es un contrato que cumplen cuando quieren cumplir.

Mis queridos amigos, no hay que violentar el proceso para lograr buena substancia. Si a alguien lo agreden, doy esto como un ejemplo; si hay un choque en la carretera y un vehículo o un carro choca a otro, el que sufre daños, tiene derecho a que le compensen; pero el que sufre daños no puede ir y asaltar en la casa al que lo agredió ni robarle en el banco, porque hay un proceso que se lleva a cabo, y el proceso es tan importante como el contenido. Y el proceso político en Puerto Rico ha sido de que no se enmienda la Ley Electoral, sin acuerdo de los tres partidos. El mollero político no se usa para eso, es un mal ejemplo. ¿Por qué lo hacen entonces? Lo hacen por dos (2) razones, primero, porque esto es un divorcio por consentimiento

mutuo entre Pedro Rosselló y sus legisladores, porque los legisladores piensan que Rosselló no puede ganar y se quieren zafar de él, y porque Rosselló piensa que los legisladores le hacen un daño y es una carga que él no quiere cargar con ellos y se quiere zafar de ellos.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Senador, le informamos que le quedan treinta (30) segundos de su tiempo.

SR. RIGAU: Muchas gracias. Y segundo, lo hacen porque quieren romper el consenso aquí para seguirlo violando. Le acuerdo al pueblo puertorriqueño que este año hay que nombrar el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la Ley Electoral dice, que es por unanimidad. Ya veremos las enmiendas tratando de violentar ese consenso también. Hay que respetar el principio hoy, para poder seguir teniendo en Puerto Rico una democracia que sea ejemplo. No queremos violentar la democracia y por eso, por eso nos vamos a abstener estando a favor del contenido, porque este proceso es una violación de los mejores principios de democracia que este pueblo ha defendido y por el cual es reconocido internacionalmente.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, Senador.

Senador Dennis Vélez.

SR. VELEZ BARLUCEA: Muchas gracias, señora Presidenta y compañeros

Senadores.

Verdaderamente, hemos escuchado muchos planteamientos, algunos de ellos muy interesantes por parte de la Minoría, tanto del Partido Popular como del Partido Independentista. Básicamente, esbozan la teoría de que están a favor del principio, pero que están en contra de que se apruebe la Ley. Para los que nos están escuchando en sus casas, verdaderamente, estarán bastantes confundidos, porque esto demuestra la clase de pensamiento que tiene un liderato político y entre otras preguntas nos haríamos... Escuchamos ahora mismo al compañero Marco Rigau, que se supone que se someta por sus méritos a la voluntad del pueblo. Si saca los votos que sacó para la Presidencia del Partido, se va a colgar y de eso es de lo que se trata. El pueblo es soberano, porque verdaderamente escuchamos los planteamientos del que era ex-Presidente del Partido Popular, Miguel Hernández Agosto, y los planteamientos de Rubén Berríos y señalan que para ellos lo más importante son los partidos políticos. Y yo le pregunto al pueblo que me está escuchando, ¿si para el pueblo son más importantes los partidos políticos o la voluntad del pueblo? Tenemos que aprender que la democracia pura nace de esto que queremos aprobar hoy. Ojalá, compañero Rubén Berríos, que no solamente tuviésemos la oportunidad de darle una tercera papeleta, una

cuarta, una quinta o todas las que sean necesarias para que el pueblo se exprese fuera de las ataduras políticas y de los "guindalejos", de estar "reguindaos" algunos legisladores de las faldetas de algún Gobernador o de algún líder político. De eso es de lo que se trata y eso es lo que le estamos ofreciendo al pueblo de Puerto Rico. Y la pregunta que le hacemos nuevamente a los legisladores de la Minoría es, ¿a qué le tienen miedo? Atrévanse, denle la oportunidad al pueblo para que el pueblo sea el que determine quién va a estar aquí y quién no va a estar aquí; que el pueblo diga quién es el legislador que trabaja y el que no trabaja; quién es el que le merece confianza y quién no le merece confianza. No me hagan como aquella famosa historia que me cuentan mis padres. Para la Segunda Guerra Mundial había escasez de alimentos y se instituyó lo que se conocía como la famosa Política del Convoy. Aquí hay algunos senadores mucho más jóvenes, como el compañero Kenneth McClintock que, el compañero Freddy Valentín dice que no es de esa época, dice él. Pero para los que no conozcan, esto era que a usted le vendían aceite, pero tenía que comprar arroz, habichuela, bacalao, ¿verdad Mercedes?, y de otras cosas más para que le pudiesen vender aceite. ¿Y qué pasa? Que lo mismo pasa con los partidos políticos y eso es lo que queremos hacer en este momento, depurar el sistema electoral

puertorriqueño, para que cuando usted compre, no tenga que comprar obligado bajo la Política del Convoy, que usted compre lo que le guste; y lo que no le gusta, no lo compra. Pa' fuera. Y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo al pueblo puertorriqueño.

Y la realidad es que en este momento, la realidad política es que el pueblo puertorriqueño en muchas ocasiones, por no tener las herramientas necesarias, por no tener las herramientas necesarias y por no tener la oportunidad necesaria, escoge Representantes, Senadores de todos los partidos políticos que no son de su agrado y que posiblemente quisiera cruzar líneas de partido, pero por no tener la papeleta, la oportunidad, se le hace difícil.

Y el compañero Miguel Hernández Agosto habla de que en las Elecciones de 1980 y que este sistema, perdón, podría propiciar el que la gente tire más papeletas en blanco, dice que en las elecciones del '80 tiraron dos mil ochocientas (2,800) en blanco, en las del otro año cinco mil y pico, en las del otro año dieciséis mil (16,000) y que ahora dieciocho mil (18,000). Mire, compañero Hernández Agosto, no ofenda, no ofenda la inteligencia del pueblo. ¿Usted sabe por qué el pueblo puertorriqueño está tirando más papeletas en blanco? Porque cada día que pasa es un pueblo más educado y más inteligente y está aprendiendo a votar, por eso es que están tirando más papeletas

en blanco y porque no tiene la oportunidad de separar a sus candidatos y antes de hacer una cruz bajo la Pava, mejor prefieren tirar la papeleta en blanco, y eso es lo que le estamos ofreciendo a este pueblo en este momento.

Y el compañero Marco Rigau habla de los contratitos, de contratitos que no me hablen, de eso quien sabe es Héctor Luis Acevedo, que tiene como mil (1,000) contratos allá de batatas políticas en el Municipio de San Juan, ése sí que sabe de contratos. Porque del contrato que estamos hablando aquí, es del contrato que hicimos nosotros con el Pueblo de Puerto Rico, como legisladores electos por el pueblo de Puerto Rico para representar los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, y para que no nos digan también, que llegamos aquí "agarraos" de la faldeta del líder político o del Gobernador. Si yo hice un trabajo que sea de la confianza del pueblo y que el pueblo entienda que yo deba volver aquí el próximo cuatrienio, me someto a la voluntad del pueblo, del soberano, como se hacía desde los tiempos remotos, desde que nació la democracia. No porque yo, porque yo vine "reguindao" de la chaqueta del Gobernador o de los "guindalejos" del partido político.

Me parece que estamos escribiendo unas historias o parte de la historia aquí en Puerto Rico, una historia muy bonita, en donde le estamos dando al pueblo

de Puerto Rico la oportunidad, la oportunidad de participar en el proceso democrático electoral más puro, y a eso los compañeros de la Minoría le están negando la oportunidad.

Yo le digo, para terminar, a los compañeros de la Minoría, no dejen nunca, no dejen nunca, que por cuestiones partidistas la historia los condene. No dejen nunca que por cuestiones partidistas la historia los condene, porque esa sí que no perdona. Los pueblos podrán perdonar, la historia jamás perdona y de eso es de lo que se trata éste tan importante asunto que estamos planteando durante el día de hoy. Los invito a que se unan a la historia, a que hagan historia y le den la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de expresarse libremente y de escoger a los candidatos que quieren que compongan la Asamblea Legislativa en los próximos comicios electorales. Vamos a votar todos a favor de ese Proyecto. Muchas gracias.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, le quedan dos (2) minutos de su tiempo, que se van a sumar al tiempo de la delegación, dos (2) minutos.

SR. VELEZ BARLUCEA: Y queremos, señora Presidenta, queremos también expresar lo siguiente, ya que nos quedaban dos (2) minutos. Aquí el compañero Rubén Berríos expresó que no teníamos el mandato electoral, porque con los votos de él y los votos del Partido Popular no teníamos el cincuenta

(50) por ciento. Pero se le olvidó, que el compañero Sergio Peña Clos, sacó ciento diez mil (110,000) en las pasadas elecciones, los que hacen que tenemos más del cincuenta (50) por ciento ahora mismo para reclamarle la voluntad mayoritaria al pueblo puertorriqueño.

SR. PEÑA CLOS: Señora Presidenta, saqué ciento quince mil novecientos (115,900) votos, me quitó cinco mil y pico.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, Senador.

SR. VELEZ BARLUCEA: Rectificamos, señora Presidenta.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Reconocemos en esta ocasión al senador Báez Galib.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, aunque el orden le correspondía al senador Báez Galib, no vamos a interpretar su ausencia como que él está renunciando tácitamente a su turno, por lo cual dejaríamos en manos de la delegación popular que alternara.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Reconoceríamos entonces, al senador Cirilo Tirado.

SR. TIRADO DELGADO: Muchas gracias, señora Presidenta y compañeros del Senado.

La realidad es que yo no

entiendo al compañero Dennis Vélez Barlucea porque él señala que por el mero hecho de que haya una tercera papeleta o que no exista esa tercera papeleta, el pueblo no se va a expresar en las urnas. Si ciertamente el pueblo se expresa en las urnas y haya tercera papeleta o no haya tercera papeleta, la gente va a votar y va a escoger siempre a la gente que quiere que le represente aquí en la Legislatura. Así ha sido durante muchos años y eso lo hemos visto en las últimas Elecciones, en el '92 y en el '88 y antes del '92 y el '88, cuando los movimientos del pueblo se han visto para seleccionar los candidatos que ellos estiman pertinentes que sean electos en unas Elecciones Generales. Cójase el caso, por ejemplo, de las Elecciones pasadas cuando el compañero Enrique Meléndez, del Partido Nuevo Progresista, salió electo en el Distrito de Guayama, y este servidor salió electo representando al Partido Popular en el Distrito Senatorial de Guayama. Y el pueblo decidió, decidió en aquel momento en la forma que estimó pertinente y en la forma que creyó que era lo mejor para el Distrito de Guayama en un momento dado. Pero no es de eso de lo que se trata. Aquí no vamos a hablar de la sustancia, en términos de si es conveniente o no es conveniente la tercera papeleta. Aquí vamos a hablar de otra cosa. Aquí lo que estamos hablando y estamos enfatizando es el consenso, el consenso

electoral que es importante para el desarrollo de la democracia del país, es uno de los haberes más importantes del Pueblo de Puerto Rico, la democracia. Y aquí, desde el 1983, se ha planteado que las enmiendas a la Ley Electoral tienen que surgir de la voluntad de los tres partidos políticos los cuales, se ponen de acuerdo para evitar situaciones engorrosas y situaciones problemáticas que puedan crearse como ocurrieron en las Elecciones del 1980; que rompieron el consenso y días antes de las Elecciones mandaron una Ley Electoral de un colegio entreabierto que tuvo que ser parado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. De eso es que se trata. Y yo creo que esta es una mala decisión de la hoy Mayoría del Partido Nuevo Progresista.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Senador, le resta un minuto de su tiempo.

SR. TIRADO DELGADO: ¿Cuántos minutos eran?

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Cuatro minutos, le resta un minuto.

SR. TIRADO DELGADO: Muchas gracias.

Y la realidad es que uno observa que los compañeros han dirigido toda su expresión en torno a que hay que aprobar la tercera papeleta porque es un mandato electoral y vuelve el mandato electoral y conforme a ese mandato, pues, ustedes quieren hacer lo que ustedes estimen

pertinente. Ustedes pueden hacerlo porque tienen los votos, pero lo que es cierto es que esto es un divorcio por consentimiento entre el Gobernador y ustedes. Porque el Gobernador no quiere que muchos de ustedes corran en la papeleta junto a él en las Elecciones del 1996; se está zapateando de muchos de ustedes porque él quiere llegar a La Fortaleza y no quiere que muchos de ustedes lleguen a los puestos que tienen en este momento. Muchas gracias.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Gracias Senador.

Senador Freddy Valentín.

SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, muchas gracias, señora Presidenta. La verdad es que escuchando los comentarios que hacen los distinguidos compañeros, la verdad es que me tengo que preguntar, ¿cuál es la responsabilidad que se tiene cuando hay que estar en la Legislatura de este país para legislar prospectivamente, para garantizar derechos y mejorar condiciones en el pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué tenemos que mantenernos atados al pasado y no buscar alternativas reales a las situaciones que vive el pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué tenemos que enclaustrarnos, esconder nuestras cabezas, cuando hay soluciones prácticas y reales? ¿Por qué? Porque no les ha tocado a ustedes la historia y el momento decisivo en el destino del pueblo de Puerto Rico

de tomar esta valiente decisión, como le ha tomado al Partido Nuevo Progresista. Y sí, es cierto, hablamos de programa de gobierno y aquí está el programa de gobierno, las ideas y el liderato en la nueva agenda. Y aquí específicamente está, en la parte 3, establecer una papeleta separada para la elección de los legisladores relacionada al Artículo 5.011 del Título 5 de la Ley Número 4 del 20 de diciembre de 1977. Y ahora dice aquí el compañero Berríos, el compañero Cirilo, el compañero Marco, que hay un divorcio por mutuo consentimiento. Miren, si lo que estamos haciendo fue lo que le dijimos cuando estábamos en plena luna de miel, porque esta propuesta la trabajamos todos los miembros del Partido Nuevo Progresista, y fue ante la consideración del organismo del partido, y fue avalado por el pueblo de Puerto Rico. Y a mí me sorprende de manera las expresiones del compañero senador Rubén Berríos, cuando dice que nosotros, el programa y el compromiso del partido, creemos que es programático, que no es una constitución, o sea, que solamente tenemos que cumplir con la Constitución. Que tomen cuenta los independentistas y el pueblo puertorriqueño cuando analice las propuestas de ensueño y de rosas que lanza el liderato del Partido Independentista en sus propuestas, porque después, por las expresiones que acabo de escuchar, quedan en letra muerta.

Pues ahora es bueno que el Pueblo de Puerto Rico sepa que aquí no se puede buscar chantajería por parte de las Minorías para condicionar su endoso a esta medida. Ahora el pueblo no es la voluntad suprema, ahora es el consenso de los tres partidos políticos. Y me pregunto yo, ¿y aquéllos que no pertenecen a ningún partido político, aquella gente pensante que escoge personas de cualquier partido político? ¿Y esos, dónde están representados? ¿Están los partidos por encima de la voluntad expresa del pueblo o no se han constituido los partidos como un instrumento y un vehículo para canalizar las aspiraciones de un pueblo en ese proceso democrático? ¿Y de qué estamos hablando? Pues a los amigos que quieren, en el Partido Popular, echarnos leña en términos de que posibles desavenencias con nuestro Gobernador, que se sepa, aquí estamos unidos a nuestro Gobernador, Pedro Rosselló, a cumplir con el compromiso que nuestro Gobernador le hizo al pueblo de Puerto Rico. Y que el que sea bueno, que salga en un proceso eleccionario. El que tenga la capacidad, la penetración con el pueblo mismo, que salga. Yo creo que esto es una de las cosas más maravillosas que podemos nosotros hacer.

Miren, a los legisladores del Partido Popular y al compañero Berríos les digo, ustedes saben lo bonito, y a mis compañeros Senadores, que de ahora en adelante cuando esté esa tercera

papeleta el compromiso directo con el pueblo de Puerto Rico lo vamos a hacer los legisladores también. Y vendremos aquí, los que vengan, con la voluntad expresa y mayoritaria del pueblo de Puerto Rico, a cumplir precisamente con ese compromiso para con el cual el pueblo habrá de depositar su confianza, a establecer programas de gobierno que surjan de la voluntad misma, del conocimiento y la compenetración que tenga el legislador con su pueblo. Ya no ficticiamente, sino ya ahora, de realidad, y de eso es lo que se trata. No es que los partidos políticos de este concurso de conveniencia, yo vuelvo y repito, triste sería que la historia catalogue de hipócrita a algunos y a otros de chantajería política por querer mantener una franquicia política en un proceso electoral. Ninguna de esas condiciones pueden ir por encima de la voluntad expresa del pueblo puertorriqueño. Que vengan los que sean electos, yo voy más, señora Presidenta, tiene que llegar el momento en que sean también elecciones separadas...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Compañero, le resta un minuto de su tiempo.

SR. VALENTIN ACEVEDO: Que sean elecciones separadas, que una ocasión se escoja al Gobernador, que en otra se escojan a los alcaldes y que en otra separada, a los legisladores. Y yo le garantizo al compañero Rubén Berríos que si dentro del

Partido Independentista pusieran a tres o cuatro legisladores a correr a través de toda la Isla, no salía ninguno de los independentistas. Ahora es muy bueno utilizar la cantidad de los votos porque el Partido Independentista lleva un Senador que corre en todas las papeletas de Puerto Rico, mientras los dos restantes partidos dividimos a través de todo Puerto Rico a seis (6) Senadores que corren a través de grupos en particular, y ante esa voluntad estamos.

Al finalizar nuestras expresiones, nuestra acción real y sincera, unida al Gobernador, promesa hecha ante el pueblo de Puerto Rico, promesa que este Senado, el Nuevo Senado, habrá de cumplir. Y que sea el pueblo, la voluntad suprema y soberana la que escoja los que quiera que le representen por la voluntad expresa, mayoritaria del pueblo de Puerto Rico. Este Proyecto habrá de tener nuestro endoso y nuestro voto favorable.

Muchas gracias, señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): El compañero consumió un minuto adicional del tiempo asignado a su delegación. Senador Báez Galib.

SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta, cuando el pragmatismo triunfa sobre la moralidad, hay una profunda enfermedad de espíritu y en diez (10) horas yo no podría explicarla. Voy a someter por escrito mi posición y que

acrecienten el tiempo que queda al próximo orador.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): El compañero consumió treinta segundos de su tiempo, le restarían entonces a la delegación, se le estarían sumando tres minutos con treinta segundos adicionales. Los consumen ahora o posteriormente.

Compañero Víctor Marrero.

SR. MARRERO PADILLA: Señora Presidenta, distinguidos Senadores: este Senador llegó de la costa norte de Puerto Rico; no llegó "reguindao" de las plumas de la pava ni llegó "reguindao" de las pencas de la palma, tampoco llegó "reguindao" de "pon" con nadie. Pero sí llegó con un programa de gobierno que mi partido llevó a lo largo y a lo ancho de la patria puertorriqueña. Y oí a un patriota que se llama Rubén Berríos, y dijo que él acumuló más votos por ser el patriota más grande de Puerto Rico. Pero corrió como cerdo suelto en toda la Isla de Puerto Rico. Víctor Marrero corrió en el Distrito de Arecibo...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador...

SR. MARRERO PADILLA: Y retiramos las palabras, si es que ofenden y son ofensivas porque son metafóricas, que por ser agrónomo y agricultor las usamos en las metáforas que usamos y si molestamos al distinguido Senador, las retiramos.

SR. BERRIOS MARTINEZ:

Sí, yo le pido al compañero que retire esas palabras porque me parecen ofensivas...

SR. MARRERO PADILLA: Lo hago con gusto, distinguido Senador.

SR. BERRIOS MARTINEZ: ...a este servidor y al Cuerpo entero.

SR. MARRERO PADILLA: Lo hacemos con deferencia a usted.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante, señor Senador, y un poquito de menos emotividad.

SR. MARRERO PADILLA: Pues, vamos a usar un vocabulario más escogido porque también hemos ido al Colegio de Mayagüez. Y vamos a decirle que hablan de consenso, pero en aquella contentura y algarabía del Cerro Maravilla y el montón de cosas más penosas en el pueblo, la Mayoría popular dirigida por Miguel Hernández Agosto se gozaba y no había consenso. Y en el '91 cuando se discutió los derechos democráticos, donde los independentistas y los populares se juntaron en el "ad hoc" aquel, en el gran triunfo para apabullar a los estadistas en Puerto Rico, nada dijeron.

Y Marco Rigau ahora llega gritando del consenso, pero gozaba también y se unía a la contentura cuando le apagaban los micrófonos a los estadistas como Rodríguez Negrón y a Oreste Ramos. Pero Marco Rigau no debe hablar mucho porque él está triste, porque un agricultor de mano dura de la montaña de

Humacao le dio la pela grande en la papeleta de la primaria. Y lo dijo el senador Dennis.

Pero hoy llegamos aquí a la credibilidad de un Gobernador, al hombre que ha llevado un programa de Gobierno al país con seriedad, que está haciendo una obra de cambiar a cosas nuevas, el cambio, pero los conservadores quieren seguir con lo viejo. Y los jóvenes de Puerto Rico, como decía Freddy Valentín, estarán oyendo hoy a los que quieren seguir con la misma rutina conservacionista, conservando lo viejo. Como decía Charlie Rodríguez, el pueblo de Puerto Rico, los populares deben estar llamando a los populares y los independentistas a los independentistas para que avalen lo que hay que hacer en Puerto Rico, que el que está haciendo lo que hay que hacer en su programa de gobierno es el doctor Pedro Rosselló.

Hablan y dicen, y logran y tienen contentura en la palabra de alegría de pensar que en el Partido Nuevo hay división de los legisladores con el doctor Rosselló. Miren señores Legisladores, lo que pasa es que es indistinto, los penepés tenemos criterio propio para defender posiciones individualmente en momentos dados. Pero en este Partido el Presidente y el Gobernador es el doctor Rosselló y habremos de avalar el programa de gobierno completo del doctor Pedro Rosselló. Y este Senador avala, respeta y sabe que

el doctor Pedro Rosselló está haciendo lo que hay que hacer por esta patria y que los cambios en este programa de gobierno, en el proyecto del...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador, le restan treinta segundos de su tiempo.

SR. MARRERO PADILLA: Gracias, distinguida Presidenta. El Proyecto del Senado 519 se ventiló y se ventió a lo largo y lo ancho de Puerto Rico y el Gobernador Rosselló lo discutió con los electorales, y le planteó al pueblo, y todos nosotros; y hoy aparecen algunos objetando, porque no hay consenso. Y el consenso ya el pueblo habló y nosotros vamos a hablar ahora aquí, y yo habré de hablar hoy y decirle sí, votando positivamente a este Proyecto programático del Partido más creíble en Puerto Rico, del Partido Nuevo Progresista.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, Senador.

Senador Fas Alzamora.

SR. FAS ALZAMORA: Muchas gracias, señora Presidenta

Si alguien debería estar a favor y estoy a favor de la medida, es este Senador. Yo posiblemente soy el mejor ejemplo de poderle demostrar a los compañeros lo equivocado que están, que a pesar de que yo favorezco esta papeleta, el pueblo no necesita para escoger sus legisladores una tercera papeleta. En mi Distrito

Mayagüez-Aguadilla ganó el Partido Nuevo Progresista, yo aparecía en la sábana esa, en la tercera línea y el pueblo por voto mixto me trajo aquí, valorizó mi esfuerzo de los años que llevo sirviendo al país y muy específicamente al Distrito Mayagüez-Aguadilla. Así que ese argumento que hay que tener una tercera papeleta para ilustrar al pueblo, es faltarle al respeto a la inteligencia del pueblo, porque aun en estos momentos, aunque se le diera una sola papeleta como era antes, el pueblo ya sabe votar y votará en su predilección en términos de partidos y sabrá seleccionar los candidatos a la Asamblea Municipal, a la Legislatura, a la Gobernación o al Comisionado Residente, porque el mejor ejemplo, estoy yo aquí, en carne viva. El PNP ganó el Distrito y yo estoy aquí con voto mixto, con voto mixto de miles de penepés que me valorizaron en mi esfuerzo y me dieron el voto y estoy aquí, en Minoría, pero estoy aquí representándolos a ellos.

Pero aquí no se trata de si la medida es buena o no es buena y desde el punto de vista democrático, perfecto. Desde el punto de vista mío, personal, me conviene, si salí en una papeleta escondido, cómo no voy a salir si lo fuera a ver desde el punto de vista personal encabezando una papeleta en mi Distrito. Mucho más fácil, pero aquí no se trata de lo que me convenga a mí personalmente, aquí se trata de lo que le convenga al país. Y

cuando se habla de Ley Electoral, aquí tiene que trabajarse esto con consenso, porque lo que ofrece un partido político en un programa de gobierno debe ser la iniciativa a que si se ganan las Elecciones, vamos a tocar este tema, pero teniendo en cuenta el consenso. El consenso porque es la Ley que rige la democracia. Y la mejor forma de demostrar que no ha habido consenso en una medida, que en términos prácticos estamos todos de acuerdo, es que ustedes han querido aquí, "a la cañona", imponer esta medida en contra. En primer lugar, fíjense, del Comisionado Electoral de su Partido, el licenciado Canals en las vistas públicas dijo, a preguntas del senador Rodríguez Colón, "Yo he sido el que más he reclamado en el pasado el consenso. Es muy cierto que en un balance entre esta medida yo prefiero que se respete ese consenso...", el Comisionado Electoral de ustedes. Vamos más, la Federación de Alcaldes del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico en un memo del 17 de enero de 1994, firmado por José Rivera Nía, Director Ejecutivo dice: "Entendemos que la determinación final que se tome sobre este asunto debe ser una por consenso tomada por la Comisión Estatal de Elecciones -refiriéndose a la tercera papeleta, a este proyecto, obviamente-. De esta forma se mantiene inalterada la política de que toda enmienda a la Ley Electoral de Puerto Rico debe ser

tomada por consenso por los partidos políticos representados en la Comisión Estatal de Elecciones".

Y todo esto parte de la base, cuando la debacle de 1980, en el 1981 se nombra una Comisión para revisar la Ley Electoral y la preside el licenciado Charles Cuprill, miembro del Partido Nuevo Progresista y estadista, junto a los comisionados electorales de otros partidos. Y dice en esa Comisión: "Es el sentir de esta Comisión Especial el que los partidos políticos deben hacer un esfuerzo supremo en lograr el consenso en cuanto al proceso electoral. Nuestra lealtad a Puerto Rico y a la democracia exige que analicemos nuestras diferencias a través de procesos electorales que merezcan la confianza de todos los sectores de la opinión pública". Y todos los que he citado son miembros de su Partido, una Comisión presidida...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador.

SR. FAS ALZAMORA: ...por un miembro de su Partido.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): De su tiempo, de los cuatro minutos asignados a usted fueron consumidos, pero a su delegación aún le restan tres minutos y medio. ¿Los va a consumir usted también?

SR. FAS ALZAMORA: Seguiremos. Bueno, pues entonces vamos a tratar de aprovechar esos minutos.

Miren, lo que no queremos es que hoy empiezan ustedes rompiendo el consenso y aquí están abriendo una puerta que cualquier partido político que venga en un futuro rompa ese consenso que por doce (12) años le ha dado una estabilidad a la democracia puertorriqueña y que es orgullo a nivel internacional. Lo que están hablando ustedes aquí es: que hoy rompen el consenso en una papeleta que estamos de acuerdo, simplemente porque no ha habido el consenso, no se ha hecho un análisis profundo de lo que esto significa para los partidos políticos, para el pueblo, desde el punto de vista económico, en todos los aspectos que hay que analizar esta medida. Sin embargo, entonces ¿qué es lo que sucede? Ustedes están rompiendo el consenso porque lo próximo que piensan hacer es trastocar con el Presidente de la Comisión Electoral, y que durante este cuatrienio cuando vean que las encuestas no los favorecen a ustedes, en alguna forma van a legislar para tratar de permanecer en el poder. Eso es lo que están haciendo, porque si rompen el consenso, el que da una "pescozá" a otra persona, se atreve darle dos, cuatro y diez. Lo importante es el respeto de que nunca se dé la primera. Y aquí ustedes le están faltando el respeto a la integridad del consenso de la Ley Electoral que respetó el Partido Popular Democrático en los ocho (8) años que estuvo en el poder.

Yo voy a poner el mejor

ejemplo, yo era Secretario General de este Partido, y yo propuse una enmienda a la Ley Electoral para bregar con los métodos alternos que una vez se sometiera un partido político, que le convenía a ustedes también el método alterno, no tuvieran que ir a Ley de Primarias. Y el compañero Báez Galib, que era Comisionado Electoral entonces, me dijo: "Tony, si no es por consenso, esto no se puede". No se logró el consenso y nosotros no insistimos en esa medida que era muy justa para los candidatos que se someten a los métodos alternos de selección para evitar que viniera una tercera persona a retarlo, y eso beneficiaba a todos los partidos por igual y daba a respetar la institución de los partidos, y nosotros respetamos eso. ¿Por qué? Porque con la Ley Electoral hay que bregar con consenso para garantizarle al país que la seguridad de los procesos democráticos son unos que sean confiables y no que venga un partido de turno en mayoría parlamentaria con Gobernador de su partido a violentar ese consenso.

Adicional a eso, miren, yo les voy a decir algo más, antes de finalizar, el 15 de febrero de 1986, aquí se radicó un proyecto, la Resolución Concurrente del Senado 19, que fue autor el compañero Presidente de este Cuerpo, Roberto Rexach Benítez, que fue autor Oreste Ramos que está en este Cuerpo, que fue autor el querido amigo Marrero

Pérez, que está en este Cuerpo y el compañero Silva al igual que Rubén Berríos y todos los populares que éramos Mayoría, donde dice en este párrafo: "A fin de fortalecer y garantizar aquellos logros obtenidos por nuestro pueblo en el desarrollo de sus procesos electorales, capaces de contar cada voto en la forma y manera que sean emitidos, nos reafirmamos en el esencial principio rector de que la garantía máxima para enriquecer los logros alcanzados en nuestro sistema electoral y para mantener la plena confianza de la ciudadanía en sus procesos electorales, lo constituye el imprescindible, necesario y continuado consenso de los partidos políticos participantes en los eventos electorales en la adopción, formulación e implementación de las normas que rigen el proceso electoral y con el propósito de asegurar de forma cabal dicho vital principio, rector de consenso electoral en su forma práctica de implementación institucional". Y hoy, seis (6) años después, cinco compañeros que estuvieron aquí, que fueron autores de este Proyecto, están rompiendo el consenso.

Compañeros, nosotros no estamos en contra de la medida per se, nosotros estamos pidiendo de que haya consenso, que se estudie esta medida. Yo personalmente, estoy a favor, pero porque yo esté a favor no quiere decir que yo voy prestarme para violentar el consenso electoral. Aquí hay otras áreas

que hay que estudiar sobre el consenso electoral...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador...

SR. FAS ALZAMORA: ...de enmiendas -y con esto finalizo, señora Presidenta-, aquí hay que estudiar el financiamiento de las campañas electorales que depende de una enmienda electoral a la Ley Electoral, por consenso. Aquí hay que bregar con el cambio de la Ley para permitir las primarias en colegio abierto. Aquí hay que bregar con cambiar las fechas de las primarias de junio a otro mes en el año electoral. Aquí hay que bregar con el cambio de la asignación de los legisladores por acumulación para que los partidos no los asignen como quieran y realmente sean representativos del voto del pueblo. Aquí hay que eliminar la inscripción, como dijo el compañero Hernández Agosto, del año que viene que les costaría veinte millones (20,000,000). ¿Y de dónde van a sacar esos veinte millones? Aquí hay que ampliar el período de depuración de listas, aquí hay que revisar el trabajo de las comisiones locales y de las juntas de inscripciones. Aquí hay que revaluar el fondo electoral y la transportación de electores. Aquí hay que garantizar la integridad de la sede de los partidos políticos. Aquí hay que bregar cómo se recaudan los fondos para los partidos para evitar los "traqueteos". Aquí hay que bregar con un sinnúmero de

renglones en la Ley Electoral que hay bastante que trabajar y que todo debe llevarse a un consenso para si en todas las áreas están de acuerdo, pues enmendarlas todas o solamente enmendar en aquéllas donde haya consenso. De eso es que se trata.

Por lo tanto, yo finalizo, señora Presidenta, diciéndole, no se trata de los méritos de la medida a favor o en contra, se trata de algo mucho más importante que es la medida que abarca todo el proceso electoral. Se trata de respetar el consenso que el Partido Popular Democrático en Mayoría, que con Cámara y Senado y Gobernador respetó, que por los pasados 12 años ha habido tranquilidad democrática en el país, gracias a que la Ley ha sido enmendada en las únicas ocasiones por consenso, se trata de que no somos nosotros los que tenemos que rectificar por Puerto Rico, que son ustedes, Mayoría Parlamentaria, que los invito a que rectifiquen, que retiren este Proyecto por el bien de la democracia de Puerto Rico que vale más y es más importante para este país que cualquier plataforma de partido político o cualquier idea por ventajería política, por condiciones prácticas entre ustedes, entre la enemistad que existe entre la Legislatura y el Gobernador. Que viva la democracia, respetando el consenso.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador. Esta Presidencia quiere hacer

constar que le cedió tres minutos adicionales

Senador Roger Iglesias.

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, luego de la reunión que habíamos tenido en el "caucus" del Partido Nuevo Progresista, y cuando se analizaban las diferentes posiciones que entendíamos podían asumir los Senadores de la Minoría, yo pensaba realmente" que cuando llegara este momento, ambos Senadores de partido, Partido Popular y Partido Independentista, iban obviamente, con sus expresiones señalando el cacareado consenso y otras cosas, pero que en términos finales iban a terminar votando a favor de este Proyecto por las bondades que evidentemente tiene el Proyecto. Y realmente, señora Presidenta y amigos Senadores, me he quedado sumamente sorprendido de las expresiones que hemos escuchado hoy aquí. Escuchar a un Senador decir que este Proyecto es extraordinario, que está a favor de este Proyecto, que el pueblo reclama un Proyecto como este, que este es un Proyecto que hace mucho bien a la democracia puertorriqueña, y terminar diciendo que porque no hay consenso, le va a votar en contra, es faltarse el respeto a sí mismo, es serse hipócrita a sí mismo, es no tener seriedad con los planteamientos y con las ideas que se tienen.

¿Cuál es el consenso? Si aquí hemos visto ese consenso. Si ellos han dicho que están a favor del Proyecto. ¿Qué otro consenso

hace falta? Hay siete Senadores del Partido Popular y no he escuchado a ninguno decir que es están en contra del Proyecto que se presenta ante nosotros. El senador Rubén Berríos dice que está a favor de este Proyecto. Y evidentemente los Senadores del Partido Nuevo Progresista señalamos estar a favor de ese Proyecto. Así es que ciertamente, quizás por las razones que sean, técnicas, de dilación, de división en un partido político, de no tener una cabeza que les dirija porque antes tuvieron un presidente y no pudieron ponerse de acuerdo y ahora tienen otro y tampoco han podido ponerse de acuerdo, pero que ciertamente aquí, y ustedes amigos que nos escuchan en sus residencias, han podido ver que en esta pieza legislativa sí, hay consenso. Hay consenso porque todos los que estamos aquí de una manera u otra han señalado que favorecen este Proyecto. Entonces, ¿por qué seguirle dando tantas vueltas a la novia? ¿Por qué seguir dilatando tanto el proceso? Si todo el mundo está de acuerdo en él, ¿por qué seguir diciendo que porque no hay consenso, no lo vamos a aprobar? Y miren, Tony Fas Alzamora muy bien señalaba que hay una serie de cosas que hay que enmendar a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero para la gran mayoría de todos esos señalamientos que él hizo, sí es necesario ese consenso porque son cosas procesales, porque son cosas donde tiene que haber un consenso para que no

haya "traqueteo" con el proceso político. Pero aquí no estamos hablando de que esta medida afecte el proceso electoral en términos del conteo, en términos de que pueda haber algún favoritismo hacia un partido político u otro. Aquí estamos hablando de una medida que sencillamente, un proceso que se ha estado realizando junto, sencillamente se separa para que el electorado tenga la oportunidad y la viabilidad de escoger directamente a sus Legisladores. Y en esto yo no puedo entender, se me dificulta creer que haya Senadores, que llegaron aquí con el voto del pueblo, que llegaron aquí con el favor del pueblo, hoy se atrevan a decir aquí, que meramente, por una cuestión técnica del procesamiento, no le van a dar el voto a esta medida, porque sencillamente, según ellos dicen, no hay consenso. ¿Y qué quieren ellos? Año y medio ha pasado y todavía no se han podido poner de acuerdo los líderes del Partido Popular. Por eso hemos tenido que proceder.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Compañero, le resta, señor Senador, le resta un minuto de su tiempo.

SR. IGLESIAS SUAREZ: ¿Cómo no? Señora Presidenta, vamos a recoger el pensamiento que habíamos estado señalando.

No podemos seguir retrasando este proceso. Se hace necesario el que se apruebe este Proyecto, para que la entidad que tiene bajo sus hombros, el

ponerlo a correr, se vaya preparando desde ahora. Que luego no ocurra que seguimos dilatando este proceso, para después decir, que entonces tendremos que votarle en contra, porque no hay consenso, porque no se va a poder implementar de cara a las elecciones. Por eso es importante, que ya que se ha debatido esto tanto en las elecciones, que se ha debatido tanto en los medios de comunicación, se vote favorable para que el pueblo tenga la oportunidad en las próximas elecciones de poder votar directamente por sus legisladores y, señora Presidenta, en un futuro no muy lejano esperamos que podamos también tener elecciones separadas para que todavía con mayor precisión el pueblo pueda elegir a las personas que le dirigirán desde las diferentes posiciones políticas.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador.

Senador Miguel Loiz.

SR. LOIZ ZAYAS: Señora Presidenta, yo creo que esta medida es una de las mejores que yo he podido tener conocimiento. Es una gran medida. Se acabó el "pan de piquito", se acabó la "sombriilla", se acabó ir cogidos de la mano, ahora cada cual tiene que bajar al terreno, tiene que ganarse el voto casa por casa. Por ejemplo yo, no me preocupa esta medida, porque yo fui uno de los Senadores que no gastó gran cantidad de dinero para salir electo, no busqué intermediarios

para que hicieran campaña por mí, no me retraté con el Presidente de Estados Unidos, no me retraté con el Gobernador, ahí, a pulso, salí electo y en San Lorenzo, en un colegio, saqué cien (100) votos mixtos populares, en un colegio. Y me decía la gente; "Pero Miguel, ¿cómo voto por ti si te tienen pareado con ese titán, Gilberto Rivera Ortiz, allá en la parte este, en Humacao? Te han puesto pareado con el tercer hombre del Partido, con ese gran hombre que lleva veintidós (22) años en el partido, yo quisiera votar por ti, pero no puedo, porque voy y le quito el voto a don Gilberto Rivera Ortiz". Y yo le decía: "Mi hermano, haz dos (2) cruces, una al lado de mi nombre y otra al lado de Gilberto Rivera Ortiz", y yo lo educaba y yo lo enseñé. Señores, le gané por trece mil (13,000) votos, que él mismo no lo creía. El le dijo un día a Navas: "Aquí vamos a salir tú y yo, tú porque estás con "el mingo" y Loiz que es "el mingo" que está con "el duro". Y "el mingo" le ganó "al duro", porque realmente uno se gana el voto por los méritos, mis hermanos. Yo no le tengo miedo a esa medida, que eche pa'lante, y ojalá que Dios quiera en el futuro, hasta eliminen la insignia y que se vote directamente por el candidato, que se vote directamente por el candidato, porque allí tiene que ganárselo con más amor, con más gusto y sin hipocresías.

Recuerdo que un día en una

actividad que estaba Freddy Valentín y otra persona, que no voy a mencionar su nombre, cuando yo hablé, hablé poquito y él es de esa gente que habla muchísimo, que se queda con el mundo hablando, que habla mucho pero no dicen nada. Y yo le dije: "Es mejor hablar poco y bueno y no mucho, pero malo"; que "enzorran" a la gente con tanto hablar, que llegan a los mítines y se creen que el mitin es de él, porque se quedan todo el tiempo hablando y se olvidan de que hay otros que también desean hablar para darse a conocer. Pero que no hay cosa que le guste más al votante, que usted sea corto, pero bueno y sea franco, sin hipocresías y llame las cosas por su nombre, las diga con realidad y con verdad. Eso le gusta mucho, la franqueza, al votante puertorriqueño. Y ahora, mis hermanos, tiene más libertad el legislador para legislar, porque no es una marioneta como pasaba antes, que yo recuerdo que cuando ganaba el Partido Popular no habían legisladores, no habían legisladores, era lo que dijera el Gobernador y punto y se acabó. Ahora con esta medida se respeta más al legislador y tienen más libertad para actuar, mis hermanos.

El PNP, hay que felicitarlo, porque tiene ideas innovadoras, tiene ideas innovadoras y ésta es una de ellas, no como antes que decían, "una sola cruz debajo de una insignia" porque en aquel entonces habían muchos alfabetas, pero hoy en día que la

gente sabe leer y escribir, que busquen nombres, que busquen retratos y ahí te va la cruz. Claro, hay que orientarlos y esa es nuestra tarea, esa es nuestra pelea, ya yo estaré desde mañana en Humacao, Las Piedras, Juncos, San Lorenzo, por los barrios, dejándome ver. Hágase una cruz al lado de mi nombre, no debajo de la insignia, al lado de mi nombre, buscando el voto mixto, porque esto nos lleva a eso mismo, a buscar más el voto mixto del elector. Muchas gracias, señora Presidenta, y pa'lante con el Proyecto.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Queremos hacerle constar al distinguido compañero, que le restó un minuto de su tiempo. Senador Rodríguez Negrón.

SR. RODRIGUEZ NEGRON: Muchas gracias.

Yo le voy a recordar aquí a los amigos del liderato del Partido Popular, le voy a hacer un poquito de historia para que el pueblo de Puerto Rico sepa quiénes son ustedes.

En primer término ustedes hablan de democracia, el pueblo de Puerto Rico sabe que ustedes no creen en eso. Miren, ustedes recuerdan en una ocasión, yo creo que quien mejor lo dijo fue el doctor Pablo Morales Otero, cuando alguien le preguntó que cuándo iba a ver al electorado, y él le contestó, que el electorado de él estaba en Fortaleza. O es que tampoco ustedes recuerdan en el 1968, ustedes que hablan de democracia, en la reunión que

tuvieron ustedes en el Bithorn, donde a Don Luis Muñoz Marín se le perdió el papelito donde estaban los nombres de los candidatos que iban a correr y a ser los candidatos por acumulación, eso ustedes no se acuerdan, o es que ustedes no se acuerdan del sarcasmo que tenía la Minoría del Partido Popular en el cuatrienio pasado, cuando ustedes enmendaron el Reglamento del Senado con el sólo propósito de eliminar a los Portavoces de las Minorías de participar como miembros "ex officio" con el sólo propósito de que Bobby Rexach Benítez no fuera o no estuviera en todas las Comisiones.

Yo quiero recordarle a los compañeros, miren, la única participación que han tenido ustedes, la Minoría, en el consenso ha sido la unión consensual y el concubinato político que ustedes tuvieron con los separatistas de este país en el Referéndum de 1991.

SR. FAS ALZAMORA: Cuestión de orden, señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Cuál es la cuestión de orden que plantearía el compañero?

SR. FAS ALZAMORA: Cuestión de orden, que el tema es la Ley que establece una tercera papeleta y si van a violar el consenso electoral o no y no se trata ni de lo que pasó cuando la época de Luis Muñoz Marín ni el Reglamento del Senado ni nada, que se ciña al tema porque está

fuera del tema.

SR. RODRIGUEZ NEGRON: El compañero está tomando mi tiempo.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Compañero, vamos a declararlo fuera de orden, toda vez que aquí se ha hecho...

SR. RODRIGUEZ NEGRON: Es que...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Discúlpeme el Senador, se ha hecho referencia consistentemente al historial previo y se han traído datos históricos y nos extraña...

SR. FAS ALZAMORA: Con relación a la Ley Electoral, señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ...que en este momento esté el compañero cuestionando...

SR. FAS ALZAMORA: Bueno, el pueblo juzga...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Fuera de orden el compañero. Adelante, compañero...

SR. RODRIGUEZ NEGRON: Yo veo la posición, es que están renegando su pasado y eso yo lo entiendo.

Sí, mire, vamos a ser claros, yo quiero que el pueblo de Puerto Rico, entienda una cosa. Aquí estos señores son los que hablan de consenso, miren, ellos no creen en eso nada, porque ellos le hablan y dicen sobre las virtudes y las inteligencias del pueblo de Puerto Rico cuando le hablan al pueblo de Puerto Rico;

sin embargo, las acciones de los amigos populares no guardan relación con sus palabras, después acá, ellos tienen una lealtad, la lealtad del liderato es al partido. Por eso es que he traído este recuento, compañero, porque tradicionalmente los únicos cambios fundamentales que han habido en el proceso político de este país los ha traído el Partido Nuevo Progresista, que bien lo dijo el compañero Sergio Peña Clos, porque ustedes siempre han mantenido el control ese absoluto para así de esa manera que el Ejecutivo allá, que era el que los nombraba a todos ustedes, tuviera también el control sobre... y tuviera todas sus mentes hipotecadas, porque eso era lo que sucedía. Hasta el cuatrienio pasado aquí se veía, cómo cada vez que el Ejecutivo quería hacer algo, a veces ustedes trataban de hacer "pininos" aquí y tan pronto venía el rayo de Fortaleza, ustedes doblaban rodilla, y de eso es lo que estamos hablando. Aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer, es hacer lo que ustedes nunca han querido hacer, es renunciar, renunciar al estrangulamiento político ese que tienen los partidos y transferirle esos poderes al pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Queremos hacerle constar al distinguido Senador que le quedan treinta (30) minutos.

SR. RODRIGUEZ NEGRON: Treinta (30) minutos, en veinticinco (25) lo hacemos.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Treinta (30) segundos.

SR. RODRIGUEZ NEGRON: En veinticinco (25) minutos podemos redondear.

No, verdaderamente, mire, aquí lo que se está tratando de hacer es eso, que sea el pueblo de Puerto Rico, la voz final en quiénes son sus candidatos. Yo no le tengo temor a eso, yo no le tengo temor y, de hecho, siempre he creído en eso, mientras más poder el pueblo o mejor dicho, mientras menos poder político tienen los partidos, mayor poder al pueblo.

Yo confío en la inteligencia y en la sabiduría del pueblo de Puerto Rico, contrario a los lideratos de la Minoría.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador.

Queremos hacer la siguiente aclaración, a la delegación del Partido Nuevo le restaban cuatro (4) minutos que se le van a conceder en este momento al senador Rolando Silva. Hay cuatro (4) minutos que le hubiesen correspondido a esta Senadora en su turno de cierre y se le van a ceder al compañero Aníbal Marrero. Adelante el compañero Rolando Silva.

SR. SILVA: Muchas gracias, señora Presidenta por reconocernos y muchas gracias por su amabilidad de cedernos los minutos de su participación en este histórico debate.

Yo estaba escuchando los argumentos de los Senadores

populares en este debate y la verdad, que lo único que me acordaban era un cuento famoso de Alvarez Guedes de las dos (2) gatas que se fueron por la noche, que no es este el sitio para repetirlo. Porque todo lo que oigo son excusas para no hacer lo que están totalmente de acuerdo que quieren hacer. Y cuando yo celebré las vistas sobre esta medida, hay una carta en el expediente del entonces Secretario Leonardo González, de que eso, pues, no le correspondía a él opinar sobre eso. Y luego, una carta diciendo, que esto tenía que considerarlo la Junta de Gobierno del Partido, pero que el distinguido amigo y senador don Miguel Hernández Agosto se va de viaje y no se podía convocar. Y luego otra correspondencia de que no han decidido cuál es la posición oficial.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Meramente una cuestión de orden, para que se pueda subsanar, las reglas de debate establecen, que los Portavoces habrán de anunciar a la Presidenta, en este momento en funciones, cuál va a ser la participación de los legisladores.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Eso es correcto, señor Senador.

SR. RODRIGUEZ COLON: No tenemos ninguna objeción

que el compañero Rolando Silva pueda hacerlo, pero en ánimo de que se mantengan siempre las reglas, nos parece que sería siempre propio de que se consulte con los Portavoces para proceder a hacer lo propio. En estos momentos no tenemos ninguna objeción de que se añada a la lista al compañero Rolando Silva, para que sea uno de los que participe en el debate, porque no lo habíamos anunciado previamente.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Estábamos bajo la impresión que eso había ocurrido, señor Portavoz.

SR. SILVA: Le damos, de todas maneras, las gracias al distinguido senador Charlie Rodríguez a que acceda a que nos expresemos en el Hemiciclo y con el tiempo que nos cedió la Presidencia.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Senador Miguel Hernández Agosto.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Nosotros, al no levantar el punto, dimos nuestro consentimiento implícito que el compañero consumiera el turno que no había sido anunciado previamente.

SR. SILVA: Por eso, era unánime de todos los Portavoces, gracias señor senador Rodríguez.

De todas maneras, cuando la Junta de Gobierno del Partido Popular no se pudo reunir, no

podieron nunca jamás expresarse sobre esta medida. Y en su debate, hoy han dicho que están de acuerdo con que esto se haga, pero que no van a darle el voto afirmativo porque no hay consenso; pero si están de acuerdo, eso no es entonces el consenso y la única razón que están negando el voto con el alegado falta de consenso en una cosa de la cual están de acuerdo y de alguna manera filosófica han logrado diferenciar consenso "versus" estar de acuerdo. Y yo, ciertamente, se me escapó esa fina, finísima raya que han tratado de trazar los Senadores populares. Es que no le dan el voto porque pretendían convoyer esta enmienda con otro montón de enmiendas en las cuales no hay consenso, para hacer un bloque de enmiendas grande a la Ley Electoral, pero sin embargo, lo que pretendían era escaparse de esta enmienda, porque le dan servicio aquí de que están de acuerdo cuando le temen a la enmienda, pero le dicen que están de acuerdo porque la opinión pública a favor de esta enmienda es abrumadora. No se atreven decirlo aquí...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Queremos hacerle constar al distinguido Senador que le quedan treinta (30) segundos.

SR. SILVA: Gracias, señora Presidenta.

Están de acuerdo, hay consenso, están a favor, no quieren votar porque están buscando la razón de formar un

"issue" artificial totalmente en esto. No hay que convoyer las cosas en un paquete grande, en un puñado de enmiendas grande, si estamos de acuerdo en ésta, y de hecho, hay consenso en otras varias enmiendas a la Ley Electoral que requiere nuestra atención inmediata, invito a los Senadores populares, a los que piensen a favor de la medida, que den su voto a favor de la medida y que si podemos diferenciar las enmiendas a la Ley Electoral, en las cuales todos estamos de acuerdo, que le demos curso ahora y luego discutiremos las que estamos en desacuerdo.

Los invito, que por el bien del sistema electoral, por el bien de los electores puertorriqueños, que reconsideren esta terquedad y den su asentimiento a esta medida.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador.

Senador Aníbal Marrero.

SR. MARRERO PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeros del Senado, en una democracia, la voz del pueblo es suprema, es lo que todo el mundo debe escuchar en el momento de tomar una decisión en cualquier materia, y ya ese pueblo se expresó, ese pueblo habló, a ese pueblo se le presentaron unas alternativas y escogió, se pronunció en las urnas electorales. Y es penoso que esta misma tarde aquí, se nos diga, que olvidemos el programa de gobierno, que olvidemos las

promesas que se le hicieron al pueblo y por la cual el pueblo fue a unas urnas y votó, que olvidemos eso, nos dice el compañero Antonio Fas Alzamora. Nos ha dicho aquí que olvidemos ese compromiso con el pueblo puertorriqueño. Esa es la gran diferencia entre los amigos del Partido Popular y esta delegación del Partido Nuevo Progresista, que nosotros estamos aquí para honrar la voluntad del pueblo puertorriqueño expresada en unas elecciones libres y democráticas. No, compañero Fas Alzamora, vamos a cumplir con esa voluntad del pueblo puertorriqueño, si ustedes no, en el pasado, no habían hecho realidad las promesas que le hicieron al pueblo, esta delegación va a cumplir con las promesas al pueblo puertorriqueño. Y esta medida lo que intenta es, devolverle al pueblo los poderes que tiene el pueblo puertorriqueño, los partidos políticos en el pasado, principalmente el Partido Popular, habían raptado los poderes que debe tener un pueblo en una democracia y ahora se oponen a devolverle esos poderes al pueblo puertorriqueño. Por eso es que esta delegación del Partido Nuevo, quiere devolverle al pueblo puertorriqueño el poder que debe tener el pueblo en la salud y ellos se oponen también en devolverle al pueblo puertorriqueño el que puedan escoger libremente el médico que tienen derecho ellos a visitar. También queremos nosotros devolverle al pueblo

puertorriqueño el poder de la educación...

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Vamos a pedirle a los compañeros que mantengan un poquito de orden en la Sala.

Adelante, Senador.

SR. SILVA: ..el poder de la educación de nuestros hijos y por eso es que están las escuelas de la comunidad y ellos también se oponen a las escuelas de la comunidad. Y ahora se le quiere dar la oportunidad a los puertorriqueños que, en una forma fácil, en una forma más ventajosa, puedan escoger sus candidatos a Senadores y Representantes de Distrito y Senadores y Representantes por Acumulación, y también se oponen y dicen entonces que porque no hay consenso. Miren, compañeros Senadores, la posición más absurda las estamos escuchando en el día de hoy aquí, oponiéndose a esta medida. Dicen que están de acuerdo, que no hay problema con la triple papeleta, dicen que no hay problema que el pueblo escoja a los legisladores, pero que no, porque no hubo consenso; pero si están diciendo que están de acuerdo con la papeleta, están de acuerdo con el principio envuelto de que el pueblo puertorriqueño pueda escoger libremente a sus candidatos. No entendemos la posición de los compañeros, a menos que ellos no quieran el consenso para sentarse en una mesa a buscar otras enmiendas a la Ley Electoral. Y si eso es lo

que quieren ellos, pues mire, que radiquen otra medida. ¿Cuáles son las otras enmiendas que quieren? Ellos como legisladores lo podrían hacer, pero no busquen la excusa del supuesto consenso para oponerse a una cosa que es de tanto beneficio al pueblo puertorriqueño, como es la oportunidad fácil, la oportunidad ventajosa de tener una papeleta adicional, aparte de las otras dos, de la de Gobernador y Comisionado y la de Alcalde y Asambleísta, para que ellos fácilmente puedan escoger sus candidatos.

Señora Presidenta y compañeros del Senado, tienen los compañeros todavía la oportunidad de votarle a favor a este Proyecto y unirse a este momento histórico. Si el problema que tienen ellos es en términos de procedimiento, ya ellos lo han expresado. Si es procedimiento, lo han expresado, pero si están de acuerdo con la papeleta, no escojan la excusa del consenso para votarle a favor a este Proyecto que es histórico para el pueblo puertorriqueño.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Muchas gracias, señor Senador.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor McClintock Hernández.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, proponemos la aprobación de la medida según

ha sido enmendada.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Los que estén a favor se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. Aprobada la medida.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Hernández Agosto.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: La delegación del Partido Popular se abstiene de votar en esta medida por las razones ya expresadas, por entender que la legislación electoral debe ser avalada por todos los partidos políticos como se estableció desde el 1982 en adelante, que hay otras medidas de enmiendas a la legislación electoral que deben considerarse conjuntamente al nivel de los Comisionados de los Partidos en la Comisión Estatal de Elecciones como se estableció por tradición y cuando se siga ese procedimiento y se llegue a unos acuerdos por los partidos políticos, nosotros apoyaremos cualquier enmienda de consenso a la Ley Electoral.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Aprobada la medida y que se haga constar la abstención de la delegación del Partido Popular. Próximo asunto. ¿Alguna enmienda al título compañero?

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor McClintock Hernández.

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Sí, para que se apruebe la enmienda al título contenida en el informe de la medida.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? Los que estén a favor se servirán decir sí. Los que estén en contra dirán no. Aprobada la enmienda al título. Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Concurrente de la Cámara 32, titulada:

"Para proponer una enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; para disponer que la enmienda propuesta sea sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en Referéndum Especial y para disponer su vigencia."

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Señora Presidenta.

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador McClintock Hernández.

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Señora Presidenta, está ante la consideración del Cuerpo la Resolución Concurrente de la

Cámara Número 32. Puerto Rico ha electo seis (6) Gobernadores y doce (12) Asambleas Legislativas desde la aprobación de nuestra Constitución en 1952. De éstos, la mitad, tres (3) Gobernadores y seis (6) Asambleas Legislativas, han intentado lograr un consenso político que permita otorgarle al pueblo el poder de enmendar la disposición de la Constitución relativa al derecho de la fianza.

En 1975, Rafael Hernández Colón trató y fracasó. En 1977 y 1979, Carlos Romero Barceló trató y fracasó. Ahora, Pedro Rosselló vuelve a tratar y de este Senado depende si fracasa o no. Pero realmente, no fueron Hernández Colón y Romero Barceló los que fracasaron, fracasó el pueblo en su intento de tomar el control sobre la ola criminal que estuvo en virtual crecimiento constante durante las pasadas dos (2) décadas hasta reflejar, tan sólo el año pasado, la primera merma significativa de seis (6) por ciento.

En Puerto Rico el derecho de todo acusado a quedar libre bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, es uno de rango constitucional, a diferencia de status de dicho concepto en el ámbito federal. Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis (6) meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas; nadie será encarcelado por deudas, así lee nuestra Constitución local. ¿Qué

acusados? Todos los acusados. Privilegio, no, es un derecho. ¿Por cuánto tiempo? Por no más de seis (6) meses. Nuestra Constitución es clara, y el propósito que anima ese derecho a la fianza es una, asegurar la comparecencia del acusado a su juicio. El propósito de la Constitución, como está en este momento, no es separarlo de la sociedad, el propósito no es evitar que vuelva a delinquir, el propósito es asegurar que comparezca a juicio. Ese no es el caso en el ámbito federal, señora Presidenta.

Durante las vistas celebradas por la Comisión de Gobierno en febrero y marzo, el magistrado federal Jesús Antonio Castellanos, hizo una presentación detallada del tema de la fianza en el ámbito nacional.

Primero, nuestra Constitución Nacional no garantiza la fianza como un derecho. A nivel nacional las fianzas están reglamentadas por legislación congressional, legislación animada por varios propósitos, no por un propósito como anima la Constitución según está redactada en Puerto Rico.

Primero, asegurar la comparecencia del acusado a juicio. Segundo, separar provisionalmente aquellos acusados que representen una amenaza a la sociedad y, tercero, evitar que éstos vuelvan a delinquir antes de su juicio.

En un mundo en que los recursos económicos y legales a la disposición de algunos

acusados excede los recursos a la disposición del Estado, en un momento en que algunos acusados logran fugarse de prisión mediante el uso de helicópteros, en una era en que confinados continúan administrando empresas ilegales multimillonarias mediante el uso de teléfonos celulares y corrompiendo elementos del sistema correccional, los instrumentos anticrimen que eran efectivos en 1952, ya no son suficientes para combatir la criminalidad en 1994.

El derecho a la fianza incorporado por los miembros de nuestra Convención Constituyente en 1952, año en que se cometieron tan sólo diez mil (10,000) delitos Tipo I, incluyendo ciento cuarenta y seis (146) asesinatos nunca hubiese sido incorporado por esos mismos señores y señoras constituyentes, de haber redactado la Constitución en 1992, año en que se cometieron casi ciento veintinueve mil (129,000) delitos Tipo I, incluyendo ochocientos sesenta y cuatro (864) asesinatos.

Esta enmienda constitucional, que cobraría vigor sólo si el pueblo la prueba el próximo 6 de noviembre en referéndum convocado a esos efectos y que estará acompañada de una Ley Habilitadora que aprobaría esta Asamblea Legislativa, nos da los instrumentos para continuar extendiéndole fianza a la inmensa mayoría de los que hoy disfrutan del derecho a la fianza; a la vez

que nos permitiría mantener en detención preventiva a personas que reúnan tres (3) condiciones básicas. Primero, haber sido convicto de un delito grave en el pasado. Segundo, que represente una amenaza para la comunidad y, tercero, que se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios. El punto más importante de esta enmienda, a nuestro juicio, es que amplía la razón de ser de reglamentar la fianza. Ya no de meramente la preocupación simple y justificada para 1952, de meramente asegurar la comparecencia del acusado, sino que lo expande a las preocupaciones que engendra el aumento en la criminalidad que sufrió Puerto Rico durante los pasados cuarenta y dos (42) años; la preocupación de querer evitar la reincidencia durante la libertad condicionada de aquella persona, que habiendo sido convicta de un delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves, serios y la preocupación de querer segregar provisionalmente a una persona que represente una amenaza a la comunidad.

La validez de las disposiciones de nuestra Constitución local, señora Presidenta, sólo pueden ser cuestionadas si violan preceptos de nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional no garantiza el derecho absoluto a la fianza, sin embargo, el Tribunal Supremo Federal, a la luz de otras

disposiciones constitucionales federales, ha definido los contornos dentro de los cuales se puede restringir provisionalmente la libertad de una persona a quien se le imputa la comisión de delitos.

En el caso de Estados Unidos versus Salerno el Tribunal Supremo expresó que el poder del Congreso y por ende nuestro poder de restringir esa libertad, no es ilimitada. Aunque señala que una disposición en ese sentido no es de su faz inconstitucional, tiene que guardar relación con un interés permisible del Estado. "La prevención del peligro para la comunidad -dice el Tribunal en el caso de Salerno- es una meta constitucionalmente permisible y enteramente legítima." Nos deja ver, sin embargo, que la violación de la Ley imputada tiene que guardar relación con el propósito de la disposición constitucional, específicamente, Salerno da validez a la limitación de la fianza cuando se trata de delitos para la cual la pena es de cadena perpetua o la pena capital, delitos serios de tráfico de drogas y ciertos ofensores reincidentes.

Una lectura del caso de Salerno revela claramente que esta Asamblea Legislativa no puede legítimamente proponer una enmienda constitucional que limite el derecho a la fianza, cuando una persona previamente convicta de delito grave que pueda representar una amenaza a la sociedad, cometa cualquier delito grave adicional, eso no está

permitido bajo el caso de Salerno. No, aquí no se trata de querer limitar la libertad de un joven imputado de tener la posesión de una onza de mariguana, la de una persona que haya meramente agredido a otra o la de un empleado de gobierno que cometa un acto reprobable de corrupción, esas son violaciones graves de la Ley. Esas personas deben ser castigadas, pero no constituyen delitos, que además de ser graves sean tan serios que ameriten separarlos de la sociedad antes de ser convictos.

De lo que se trata, en lo que ha esta enmienda Constitucional respecta, es de personas previamente convictas, que, por ejemplo, cometan asesinatos, estén acusados de tráfico de drogas o armas en grandes cantidades, o sea, de los delitos que más daño hacen y que en más peligro colocan a la sociedad en la cual estos individuos conviven.

La frase que usamos de delito grave serio es una limitación, no al Juez, sino a esta propia Asamblea Legislativa; constituye una advertencia a todos los legisladores que aprobemos la Ley Habilitadora que dará carne de realidad a esta enmienda de que no podemos vaciar un catálogo de toda clase de delitos graves, sino un escogido de los delitos graves revestidos de la mayor seriedad, tal como en el pasado a otros les correspondió clasificar como delitos capitales o "capital crimes" aquellos pocos

delitos que podrían conllevar la pena de muerte cuando existía tal pena. La frase, cuando represente amenaza para la comunidad es, a su vez, una advertencia al juez de que la negación de la libertad provisional no es una alternativa en todo los casos de personas previamente convictas que se les impute la comisión de un delito grave serio, sino un curso de acción en la minoría de esos casos en que, adicionalmente, el Tribunal pueda determinar que representan una amenaza para la comunidad.

Como señaláramos anteriormente, la Comisión de Gobierno del Senado examinó diversas alternativas, desde la alternativa de no actuar sobre esta propuesta enmienda, como sugerirían aquellos que creen en el derecho absoluto a la fianza, hasta los que favorecerían, quizás antes de emitirse la declaración del caso de Salerno, posibles enmiendas que no le asegurarían el derecho a la fianza a ningún acusado de delito grave.

Primero, vale la pena aclarar, que en nuestra jurisdicción hoy, no existe el derecho absoluto a la fianza, porque muchos de los delitos graves cometidos en Puerto Rico son delitos federales no cobijados por las disposiciones de la Constitución local.

Segundo, la enmienda constitucional propuesta, protege el derecho a la fianza más que las disposiciones federales vigentes, toda vez que es elemento indis-

pensable el haber resultado previamente convicto por delito grave. La enmienda propuesta en el día de hoy es un punto medio entre el estado de derecho constitucional puertorriqueño vigente y el estado de derecho vigente en el ámbito federal.

Tercero, las disposiciones de la propuesta enmienda cumplen con los parámetros esbozados por el Tribunal Supremo Federal en el caso de Salerno.

Pero más allá, señora Presidenta, de las consideraciones estrictamente jurídicas, los veintinueve (29) puertorriqueños que estamos aquí en el día de hoy, a quienes nuestros compatriotas han delegado su representación en este Alto Cuerpo, no podemos olvidar que más allá de estas paredes de mármol hay un pueblo preocupado por la criminalidad, preocupado por los criminales que luego de resultar convictos en el pasado hayan sido acusados de otro crimen y vueltos a poner en libertad porque la Constitución, como está redactada hoy, no le permite al juez otra alternativa. Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza dice la Constitución en la actualidad.

No podemos olvidar, compañero Presidente, que por veinte (20) largos años, ese pueblo ha estado reclamando la oportunidad de decidir si esa disposición debe o no ser enmendada. Respondiendo a ese reclamo, tres (3) Gobernadores han sometido enmiendas, pero nunca se han

logrado los votos. Dos terceras partes (2/3) del Senado y dos terceras (2/3) partes de la Cámara, para aprobar la Resolución Concurrente que le dé esa oportunidad al pueblo.

La Resolución Concurrente ante nuestra consideración requería treinta y seis (36) votos en la Cámara y los obtuvo; requiere ahora veinte (20) votos en el Senado, los mismos veinte (20) votos que el pueblo le otorgó al Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico.

Aunque todos, todos tenemos la responsabilidad de evaluar esta medida, al convertir al Partido Nuevo Progresista en partido de gobierno durante este cuatrienio, el pueblo le dio la responsabilidad primaria de gobernar a los veinte (20) Senadores del PNP y a los nueve (9) Senadores restantes le dio la tarea de fiscalizar.

Si alguno de los legisladores electos por los partidos de Minoría desea votar a favor de esta Resolución Concurrente, le damos la más cordial bienvenida, pero la tarea de aprobar esta Resolución Concurrente, de cumplir con el compromiso de campaña de nuestro Partido y de nuestro Gobernador, es nuestra, de los veinte (20) Senadores del Partido Nuevo Progresista. Veinte (20) votos para acabar con veinte (20) años de lucha inconclusa, para darle al pueblo el poder de definir las herramientas que necesitamos para combatir el crimen. Veinte

(20) votos que no han aparecido durante los pasados veinte (20) años. Para muchos de nosotros éste será el voto pivote, el voto en que el pueblo juzgará nuestros compromisos con sus aspiraciones, con todos sus defectos, con todo y que no satisfaga, quizás, todo lo que cada uno de nosotros deseara que esta enmienda contuviera, si esta enmienda hubiese sido propuesta y aprobada hace veinte (20) años, y once mil ciento sesenta y ocho (11,168) asesinatos atrás, quizás hubiese ayudado a evitar trescientos (300), quinientos (500), mil (1,000) de esos asesinatos y serían, señor Presidente, trescientos (300), quinientos (500), mil (1,000) puertorriqueños que aún estarían entre nosotros, manteniendo a sus familias, contribuyendo a la Patria, trayendo alegría a los corazones de sus seres queridos.

Si la aprobación de esta enmienda salvara tan sólo diez (10) vidas de las garras de la criminalidad, vale más que lo que tenemos ahora, un lenguaje constitucional que sobre protege al criminal reincidente y desampara a la víctima potencial.

Esta tarde, señor Presidente, sólo hacen falta veinte (20) votos para coronar veinte (20) años de lucha de un pueblo atemorizado por el crimen. Veinte (20) votos, señor Presidente, que deben surgir como una sola voz de los veinte (20) pupitres que el pueblo puso en manos de quienes nos encomendó gobernar el país, los Senadores del Partido Nuevo

Progresista. A todos mis compañeros Senadores los invito a que dejemos a un lado las diferencias partidistas, las disquisiciones jurídicas y que pensemos por un momento en lo que el pueblo espera de todos nosotros. A mis compañeros de partido, a los que constituimos una super mayoría progresista por primera vez en la historia de este Senado de Puerto Rico, los invito a que unidos hagamos lo que ni super mayorías populares ni mini mayorías progresistas en el pasado lograron, darle a nuestros compatriotas el derecho de con sus votos en las urnas éste próximo 6 de noviembre en un Referéndum convocado al efecto, aprobar o rechazar la enmienda constitucional sugerida.

Señor Presidente, veinte (20) años de lucha, veinte (20) Senadores y Senadoras Progresistas, veinte (20) votos, eso es lo único que hace falta para darle el poder al pueblo.

Proponemos en este momento, la aprobación de la medida, sin enmiendas.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ramón Luis Rivera Cruz, Presidente Accidental.

- - - -

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Ante la consideración del Cuerpo la medida según ha sido enmendada. Los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en

contra dirán que no.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas.

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿No hay enmiendas?

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas. Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señora Portavoz.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, de acuerdo y conforme a las reglas especiales de debate, la delegación del Partido Nuevo Progresista informa su turno de presentación. Iniciará el debate el senador Oreste Ramos con diez (10) minutos; el senador Roberto Rexach Benítez con quince (15) minutos; el senador Rolando Silva con diez (10) minutos; el senador Freddy Valentín con diez (10) minutos; el senador Dennis Vélez Barlucea con cinco (5) minutos; el senador Enrique Rodríguez Negrón con cinco (5) minutos; el senador Víctor Marrero con cinco (5) minutos; el senador Navas de León con cinco (5) minutos; y el senador Charlie Rodríguez con cinco (5) minutos.

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Podría repetir nuevamente el tiempo.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Completa la lista, señor Presidente?

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Sí, es para verificar con la lista que tengo.

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Sí. Hubo unos cambios

señor Presidente en la lista original. El senador Oreste Ramos con diez (10) minutos; el senador Roberto Rexach Benítez con quince (15) minutos; el senador Rolando Silva con diez (10) minutos; el senador Freddy Valentín con diez (10) minutos; el senador Dennis Vélez Barlucea con cinco (5) minutos; el senador Enrique Rodríguez Negrón con cinco (5) minutos; el senador Víctor Marrero con cinco (5) minutos; el senador Navas de León con cinco (5) minutos; y el senador Charlie Rodríguez con cinco (5) minutos. Eso le debe totalizar, completo, el tiempo asignado a esta delegación.

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Cómo no? Muchas gracias.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: La delegación del Partido Popular Democrático ha distribuido el tiempo que se le ha concedido para este debate de la siguiente manera: el senador Fas Alzamora consumirá ocho (8) minutos; luego el senador Rigau, senador Báez Galib, la senadora González, la senadora Otero de Ramos y el senador Tirado Delgado, cinco (5) minutos cada uno y el Senador que habla consumirá doce (12) minutos para un total de cuarenta y cinco (45). Repito, todos los compañeros consumirán cinco (5) minutos a excepción del senador

Fas Alzamora que consumirá ocho (8) y de este servidor que consumirá doce (12) minutos.

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Confirmada la lista. El Partido Independentista tendrá quince (15) minutos para su exposición y el senador Independiente, Sergio Peña Clos, tendrá diez (10) minutos para su exposición. Vamos a pedirle entonces al compañero Oreste Ramos que inicie su exposición de diez (10) minutos.

SR. RAMOS, ORESTE: Gracias, señor Presidente, yo no sé si me toca primero por ser el compañero de distrito de Rolo Silva o es por mis propios méritos o ambas penas a discreción del Tribunal.

De todos modos, quiero decirle a los compañeros que yo voy a votar a favor de la medida. Mi posición en esto, pues, es una lógica invertida a la de los compañeros del Partido Popular en la otra medida. Ellos creían que era buena, totalmente buena, pero no le podían votar a favor. Yo creo que ésta tiene unos serios defectos, pero no le debo votar en contra.

Como nos llega el Proyecto de la Cámara, cumple con cubrir los temores de los compañeros que han asumido la posición llamada liberal, pero se ha llenado de tanto requisito para poderle negar la fianza a una persona que sea traída a un tribunal, que a pesar de salvaguardar, a mi juicio, esas posiciones liberales, hacen sumamente difícil denegarle la fianza a una persona que un tribunal

entienda que es extremadamente peligroso, incluso para la sociedad. Tiene cuatro requisitos para poderle denegar la fianza a un acusado.

Primero, tiene que haber sido previamente convicto por delito grave. Segundo, tiene que imputársele la comisión de uno o más delitos graves, esos delitos graves tienen que ser serios, ya nos explicará el compañero McClintock cuáles son los delitos serios graves, y además de eso, tiene que representar una amenaza para la comunidad. Son cuatro (4) requisitos, realmente, no son tres (3). De acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo Federal, tiene que llevarse a cabo una vista para determinar la peligrosidad que es el procedimiento que se usa bajo el "Bail Reform Act" de 1984, en el caso de Salerno. Por eso nosotros propusimos mediante una enmienda constitucional una Resolución Concurrente que radicamos, que se adoptara el mismo lenguaje que utiliza la Constitución Federal, en el sentido de que simplemente, las fianzas no serán excesivas y entonces por ley se dispone, cuándo se denegarán y cuándo se aceptarán. Pero en todo caso, de acuerdo con la Jurisprudencia Federal tiene que llevarse a cabo una vista para determinar la peligrosidad. Como tiene que llevarse a cabo una vista, entonces, en realidad, esa vista no se puede llevar a cabo, si la persona no ha sido convicto de un delito grave anteriormente. Y

yo digo esto en la esperanza de que en algún momento dentro del proceso legislativo que queda, a alguien se le ocurra pedir la reconsideración de la medida e incluir unas enmiendas adicionales y con esa esperanza le voto a favor. Pero le llamo la atención de los compañeros, a que ninguna de las personas que han sido traídas ante los tribunales de justicia de Puerto Rico durante los últimos años, ha sido convicta anteriormente de un delito grave, y me estoy refiriendo a las personas acusadas por casos de masacre. Ni el llamado "Negro Tanco", ni los de los de la "Masacre del Señorial", ni los de la "Masacre de la Cotorra", ni los de la "Masacre de Vista Hermosa", que ocurrió antes de ayer, habían sido nunca convictos por delitos graves.

De aprobarse esta enmienda constitucional como está, puede entrar una persona imputada por uno de estos delitos, ser llevado a un tribunal, a una vista para determinar causa probable para ordenar el arresto con las tripas de la víctima en la mano, chorreando sangre y aún así le tienen que fijar fianza y tirarlo a la calle aunque le diga al Juez, "y el próximo que voy a llevar por delante, Su Señoría, es a usted".

Aquí no hay razón ninguna para las personas que han asumido posiciones liberales sentirse temerosas. Va a ser muy difícil negarle la fianza a alguien. Es más, el procedimiento que

han venido utilizando los tribunales de justicia hasta ahora, que ha sido el de fijar fianzas altas, en violación susurrada de la Constitución que lo prohíbe, prácticamente va a desaparecer, porque se va a requerir una vista. Y en esa vista, si lo que se propone es fijar una fianza excesivamente alta también, se va a cuestionar la fianza excesivamente alta. De modo tal, que va a ser en muy, muy, muy pocos casos aquéllos a los cuales se le va a poder negar la fianza. Aun la de individuos que, evidentemente, constituyan una amenaza para la comunidad.

Si una persona se sube a un árbol, señor Presidente, con un cuchillo y la madre va ante un juez municipal y le pide al juez municipal que coja a ese muchacho y lo mande a bajar de allá con los "Marshals" o con los policías para someterlo a un examen siquiátrico y mientras tanto lo internan en alguna institución, a ése no hay que ponerle fianza; simplemente, porque la mamá está consciente de que cada vez que pasa una viejita por debajo del árbol, el muchacho la mira mal y para proteger los intereses de las viejitas del barrio, pues ella acude preventivamente al Tribunal. Pero si la mamá no esta pendiente y el muchacho se tira del árbol y acuchilla a la primera viejita que se encuentra o van tres (3) viejitas para misa con las mantillas y los rosarios y las mata todas a la vez, tampoco se le puede denegar fianza a esa persona, porque son

parte de la misma transacción o eventos, no se trata de una convicción previa por un delito grave.

Así que lo que estamos pasando no es una cosa que realmente esté siendo una amenaza para las posiciones tradicionales liberales, se va a aplicar en unos casos muy, muy, muy limitados y en todo caso va a tener que haber una vista, una vista que va a convertirse en un mini juicio.

Se habla también aquí de delitos serios. Yo no conozco ningún delito grave que sea una broma y no veo cómo si no se definió en la Cámara en el informe, y lo tenemos aquí con nosotros cuáles son los serios, y no se define tampoco en el informe que se apruebe hoy cuáles son los serios y tampoco se desprende cuáles son los serios del intercambio de preguntas y respuestas en el Hemiciclo, no veo cómo pueda entenderse que se está autorizando a una Legislatura futura o a esta misma, a catalogar los delitos. Y como no dice tampoco, según se disponga por ley, tampoco se está delegando en los legisladores tal catalogación ni implícita ni explícitamente como dirían las reglas de debate en su nueva, nuevísima recopilación.

De todos modos, señor Presidente, es con esas serias, muy serias reservas, como puede salvarse una vida, dos (2) vidas, diez (10) vidas, veinte (20) vidas que se salven y veinte (20) vidas son suficientes para requerir y

obtener el voto de este Senador, sobre todo, en representación de este Distrito plagado de criminalidad, como es San Juan. Yo le doy mi voto y le daré mi voto a la medida. Pero urjo a los compañeros, a que en los días que queden piensen en la necesidad de enmendar esta medida a los efectos de evitar o definir lo que es delito grave serio, delegar en la Legislatura la catalogación de dichos delitos y, sobre todo, eliminar este previo requisito de delito grave, de convicción por delito grave previo, porque ni los gatilleros que traen de Chicago han sido convictos nunca, que se sepa, o que se traigan de los Tribunales de Justicia de Puerto Rico ni tampoco los autores de las más execrables matanzas y masacres que hemos presenciado en Puerto Rico durante los últimos años. Muchas gracias, Su Señoría.

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Cómo no?, compañero senador Oreste Ramos.

Le toca el turno al Portavoz Alterno de la delegación del Partido Popular, senador Fas Alzamora. Adelante.

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, proponer una enmienda constitucional de esta naturaleza, de limitar el derecho a la fianza, no es un asunto nuevo en Puerto Rico. Para la década de los '70 y del '80, tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista lo han intentado, y por darse cuenta con la realidad jurídica y con la realidad de la

situación de la sociedad y la criminalidad, no le han dado paso a este tipo de propuesta de aprobar esa Resolución Concurrente.

Yo, personalmente, estaba convencido de que se necesitaba una enmienda constitucional a estos efectos y radiqué la Resolución Concurrente del Senado 21, allá para el 4 de marzo de 1986, junto al compañero Sergio Peña Clos, que perseguía estos mismos propósitos, pero precisamente, la Regla 218, que se estableció mediante la Ley 39 de 5 de junio de 1986, y la Regla 227, ambas del Código de Procedimiento Criminal, la Ley 55 de 1 de julio de 1988, hacen e hicieron innecesaria que se apruebe este tipo de legislación que es similar a lo que se pretende aprobar hoy.

Por eso yo entiendo que las personas pensantes y responsables tenemos el derecho a tomar una posición y a rectificar, si entendemos que la posición asumida no es la más correcta. Por eso me utilizo de ejemplo sin tener que utilizar a ningún compañero, que a pesar de que en el 1986, estaba convencido de que la mejor propuesta para tratar de combatir en alguna forma la criminalidad era una enmienda constitucional, cuando se aprueban estas Reglas ese mismo año en el 1986, que tienen un efecto similar, sin tener que enmendar la Constitución, pues, me he dado cuenta que esa enmienda constitucional ya no es necesaria.

Y digo esto porque la alega-

ción principal que se hace para tratar de impulsar esta medida, es que va a aminorar la criminalidad en el país; y la realidad es que en los estudios empíricos que hay disponibles para tres (3) funciones: primero, para la comparecencia, que es una de las razones por la cual se impone fianza, asegurar la comparecencia del acusado a un juicio, del noventa (90) al noventa y cinco (95) por ciento, según dicen los estudios, comparecen; por lo tanto, un cinco (5) por ciento no es lo suficientemente fuerte como para provocar una enmienda a la Constitución de un país.

Segundo, de qué personas bajo fianza cometen delito. Los estudios que se han realizado, estudios empíricos demuestran, que solamente del uno (1) al tres (3) por ciento cometen algún tipo de delito, en su gran mayoría delito menos grave; por lo tanto, tampoco esto es algo que afecte cuando del noventa y nueve (99) al noventa y siete (97) por ciento de las personas que gozan del privilegio de la fianza no cometen ningún tipo de delito, tampoco es lo suficientemente contundente o fuerte para proponer una enmienda a la Constitución de un país.

Y el tercero, que es el que trae posiblemente la intención de los compañeros de la Mayoría, es que sería un mecanismo para atacar la criminalidad y, definitivamente, no hay estudio alguno en relación a ese renglón, de que pueda decir, fíjese que se está legislando sin estudio, de que

esta medida de aprobarse hoy y de ser avalada a un referéndum por el pueblo, pudiera detener la ola criminal en aumento que existe en este país y que nos preocupa a todos los puertorriqueños, porque la criminalidad no escoje por colores políticos ni por credo religioso ni por circunstancias sociales, la criminalidad en éste y en cualquier otro país ataca a toda la ciudadanía y, obviamente, aquí todos estamos preocupados por la situación y estamos trabajando y dispuestos a buscar medidas efectivas para combatir esa criminalidad.

Fíjense que esto que yo estoy diciendo está avalado, inclusive, por personas de la actual administración. El Superintendente de la Policía, el señor Toledo, extraordinario funcionario público y el Secretario de Justicia hablan en su exposición que han hecho con relación al tema, que hay estadísticas que confirman que no es necesario eliminar el derecho a la fianza. Dice: "Policía y Justicia aceptaron públicamente, que no existen datos sobre la reincidencia bajo la fianza". Por lo tanto, habiendo unas Reglas de Procedimiento Criminal, la 218 y la 227, que permite poner unas condiciones a las personas cuando se le impone la fianza, es totalmente innecesario hoy en día establecer y aprobar una medida que enmiende nuestra Constitución para eliminar un derecho ya adquirido por el pueblo.

Las Constituciones deben

enmendarse para darle mayores derechos a la ciudadanía, no para quitarle los derechos que ya la ciudadanía tiene. La Constitución del Estado Libre Asociado en su Carta de Derecho es mucho más amplia que la propia Constitución de los Estados Unidos, es mucho más liberal en los derechos que se le reconoce al ciudadano. Hoy empezamos con la fianza y mañana puede venir otro tipo de legislador siguiendo atacando los derechos que los ciudadanos puertorriqueños tienen consagrados en su Constitución que data de 1952.

Por eso, cuando las enmiendas a la Constitución se van a proponer, y es mi pensamiento hoy en día, deben estarse debidamente circunscritas a ver en qué forma afectan adversamente o no a los derechos adquiridos por la ciudadanía y esta es una enmienda que, obviamente, le quita derechos al ciudadano. Porque fíjense, que habiendo unas Reglas de Procedimiento existentes, ¿cuál es la necesidad entonces de limitar el término, el limitar el derecho a la fianza? No se ha aprobado todavía por falta de fondos, si estas Reglas no funcionan, y hay que ser sincero en esto. Las Reglas están legisladas, pero no se pueden implementar por falta de fondos, se necesitan fondos para establecer un sistema de computadoras en todo el sistema de procedimiento criminal, en los tribunales, en la Secretaría de los Tribunales, en Fiscalía, para que cuando un juez tenga ante sí a un

acusado para poder imponerle fianza sepa la data y saber qué tipo de fianza le va a poner o si va a aplicar una de las Reglas, la 218 de Procedimiento Criminal, para imponerle a más de la fianza unas condiciones adicionales. Eso no se está haciendo hoy en día, ¿por qué? Porque no se le han dado los fondos al gobierno, al sistema de justicia criminal para poder establecer este mecanismo y ponerlo a funcionar.

Entonces, ¿qué es lo más lógico, enmendar la Constitución sin haber probado un mecanismo que haría innecesaria esta enmienda constitucional y que de darle el dinero, estoy seguro que sería lo suficientemente efectivo sin necesidad de enmendar la Constitución para controlar al delincuente, para controlar al criminal reincidente, para que la fianza que se le imponga sea una lo suficientemente fuerte con las condiciones necesarias para evitar de que constituya un peligro para la comunidad o que pueda cometer algún tipo de violación menor o mayor contra algún ciudadano? O simplemente, ignorar esta legislación existente, no buscar la experiencia positiva que la misma implicaría y enmendar directamente la Constitución.

Por eso yo entiendo, que el dinero que se va a gastar en este Referéndum, si se le diera al sistema de justicia criminal para establecer el mecanismo de que pueda trabajar adecuadamente esta legislación que fue legislada en el 1986, la Regla 218 y 227

del Procedimiento Criminal, sería innecesario enmendar la Constitución para quitarle derechos a los ciudadanos decentes. Porque acuérdense, acuérdense que el derecho a la fianza es para todo el mundo, el derecho a la fianza incluye a las personas que puedan ir a un proceso de un juicio y salir culpable y cumplir con la sociedad, ya sea en cárcel o por multa, dependiendo de cuál sea la pena, pero también está para la persona decente que va a un juicio y sale inocente.

Ocupa la Presidencia el señor Rexach Benítez.

SR. PRESIDENTE:
Compañero, se ha pasado ya por dos (2) minutos.

SR. FAS ALZAMORA: Pues entonces, redondeo.

Señores, compañeras y compañeros y a los amigos de la televisión, saben que esto es un tema bien técnico, que el tiempo es limitado y hay que compartir con los demás compañeros. Yo, simplemente, voy a finalizar, si el señor Presidente me lo permite, con un párrafo que quiero leer, bien corto.

Por último: "Asuntos como el aumento de la criminalidad e ineficacia de ciertos métodos para atender la situación delictiva no son fundamentos legítimos para justificar una enmienda

constitucional limitando el derecho absoluto de la fianza, más aún cuando no puede asociarse un incremento a la conducta criminal con las personas que están en libertad bajo fianza y, además, existen mecanismos -como he explicado- adecuados que ayudan a garantizar la seguridad de la comunidad. Explotar la ansiedad del pueblo por la ola criminal es lo que se conseguirá con esta medida. Dada la falta de fundamentos convincentes y evidencia de efectividad en conseguir su cometido, aprobar una enmienda constitucional que limita un derecho adquirido y garantizado por nuestra Constitución con la intención de proveer un recurso más al sistema de justicia criminal para tratar de experimentar una disminución en la criminalidad, sin evidencia, a ciegas, más que una solución responsable es un acto de fe". Muchas gracias, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE:
Consumió doce (12) minutos el compañero Fas Alzamora.

Compañero Rolando Silva.

SR. SILVA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente y compañeros Senadores, yo tengo que iniciar estas expresiones anunciando que voy a votar a favor de esta Resolución Concurrente, aunque tengo que dejar en el récord que tengo serias y profundas dudas sobre el texto, no la intención, sobre el texto que estamos considerando aquí en la tarde de hoy. Y tengo que dejar

también en récord, que esto tiene que ser un ejercicio clarísimo en lo que es democracia representativa. Yo represento en este santo Hemiciclo, la gente de San Juan. Y la gente de San Juan quiere esto, la gente de San Juan están arropados por una ola de crimen que los ahoga y no los deja respirar, que los tiene asediados en sus hogares, que los tiene poniendo portones en las esquinas de las urbanizaciones, porque no se puede ya tolerar la situación de mis representados de San Juan y de todo Puerto Rico en cuanto al crimen y la ola del crimen que nos arropa, y tenemos que tomar todas las medidas necesarias para detener este marullo de criminalidad que ya nos ha quitado la tranquilidad.

Sin embargo, este texto se queda corto, este texto, quiera Dios que no sea correcto, pero va a causar más problemas de los que resuelve.

Vamos a ver la perspectiva correcta de qué es lo que se trata.

Ahora mismo, todo el mundo, irrespectivamente de lo oprobioso que sean los hechos de que se le acusa y la certeza aparente de su culpabilidad y cuántas veces lo haya cometido anteriormente, tiene derecho a estar libre bajo fianza. Esto que hacemos aquí, mueve eso un poquito más atrás, porque la realidad que tenemos ante nosotros, mis queridos amigos, es precisamente, que son personas profesionales del crimen, personas que salen de sus casas todas las mañanas a

cometer delitos, los que están asediando, un grupo pequeño de profesionales del crimen, los que están asediando a nuestra sociedad y esos son los que esta medida, en su intención, pretende sacar de circulación para proteger a los inocentes, para proteger a las víctimas y por eso tenemos que dar nuestro aval, aunque no estemos de acuerdo con el texto.

Nosotros sugerimos, cuando estábamos celebrando vistas públicas sobre esta medida el siguiente texto: "Este derecho, podrá ser -el derecho absoluto de la fianza- condicionado o negado cuando a la persona se le impute la comisión de uno o más delitos graves y quede demostrado que por la naturaleza de los hechos que rodearon la transacción criminal y sus circunstancias personales, entre ellas el récord criminal, constituye un riesgo inminente para la sociedad". Eso no es lo que estamos aprobando aquí en la tarde de hoy. Aquí hay unos requisitos que van a hacer esto mucho menos de lo que requiere Puerto Rico y otros requisitos que lo van a hacer, a mi entender, inoperante. La convicción previa, la mayoría de los llamados "pejes gordos", los que operan las empresas criminales, no tienen convicciones en su récord y, por lo tanto, no les aplica esta enmienda. Entramos en una zona totalmente gris cuando se requiere para que esta enmienda opere, para que tenga algún tipo de efecto válido que la persona

sea acusada de una cosa que desconocemos lo que es, que es un delito grave serio. En Puerto Rico hay dos categorías de delitos: delitos graves y delitos menos graves. Al aprobar esta enmienda va a nacer una tercera categoría, delitos graves serios. Ciertamente esta Legislatura tiene la obligación de hacer de "laundry", una lista de colmado, de cuáles son esos delitos graves serios. Pero yo les garantizo a ustedes que si dejamos ese texto como está, cuando vaya el primer abogado, el primer acusado que se le pretende encarcelar para sacarlo de la calle, para proteger a la ciudadanía, va a alegar que el delito del cual se le acusa a su cliente, aunque hayamos dicho nosotros que es serio, que no es tan serio nada y va a dar una serie de argumentos por los cuales este texto, el texto de la Ley Habilitadora, que de hecho no la hemos visto todavía, es inconstitucional porque estamos estableciendo una clasificación, una categoría de que los delitos en los cuales esto va a operar tienen que ser serios. Y esa apreciación de esta Legislatura puede ser atacada y probablemente con validez en los tribunales.

El tercer requisito: que represente amenaza para la comunidad. Pero sin embargo, no dice, ni siquiera se requiere, que sea el ministerio fiscal el que establezca mediante prueba, mediante alegación directa, por excepción, que la persona es un riesgo a la sociedad, y que es un

riesgo inminente, porque puede que una persona sea una amenaza para la comunidad porque piensa distinto a lo que pensamos nosotros y ser una amenaza para nuestras ideas religiosas o políticas. Yo creo que la palabra "inminente" era imprescindible que la pusieramos ahí, como creo también que la palabra "serio", necesitando un delito grave serio, desvirtúa por completo lo que pretendemos hacer. Sin embargo, no se contempla condicionar. El compañero Fas Alzamora dice que la Regla 218 del Procedimiento Criminal condiciona, pero la realidad es que vista a la luz del derecho absoluto a la fianza, le pone una condición, no la cumple y sale para la calle de nuevo. La Regla 218, mi querido amigo, es inoperante por completo, es inoperante por completo. Y este texto que estamos aprobando aquí en la tarde de hoy, no contempla, lo menos, no contempla condicionar efectivamente la libertad bajo fianza que se le daría a una persona, prohibiéndole, por ejemplo, asociarse con otras personas especificadas en la orden que son también sospechosos de estar envueltos en la empresa criminal. No se determina lo que es una amenaza ni se determina que hay una inminencia de peligro para los demás. La amenaza no es lo mismo que un peligro inminente.

Sin embargo, también tenemos que dejar claro que nosotros favorecemos el concepto, que estamos aquí

representando nuestra gente de San Juan que pide a gritos que este Gobierno le dé con mano dura al crimen. Por eso le vamos a dar nuestro voto a favor de esta medida, aunque entendemos que crea unos problemas, entendemos también que el Cuerpo Hermano de la Cámara de Representantes aprobó esta medida, como les digo, en mi apreciación con un lenguaje equivocado, y la aprobó con el concurso de votos del Partido Popular y que esos votos ya no están ahí para aprobar una revisión a este texto. Suena como algún tipo de chantaje, posiblemente lo sea, pero nosotros no podemos permitir que esta enmienda no se apruebe. Como dijo el compañero McClintock, veinte (20) años se lleva tratando de impulsar esto. No podemos permitir nosotros hoy, en esta encrucijada histórica, que se nos vaya la guagua una vez más. Por eso, ejerciendo responsablemente el cargo para el cual fuimos electos, vamos a avalar este lenguaje, aunque creemos que es insuficiente, pero sí, entendemos que va a hacer algo por mejorar la calidad de vida de nuestros representados de San Juan. Muchas gracias, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero Silva, consumió nueve (9) minutos. Le corresponde el turno al compañero Marco Rigau.

SR. RIGAU: Señor Presidente y compañeros del Cuerpo: ¿Por qué estamos aquí en el día de hoy debatiendo la

aprobación de esta medida para enmendar la Constitución de Puerto Rico? Lo estamos haciendo porque el Gobernador de Puerto Rico necesitaba un proceso electoral en contra del Partido Popular que él creyese que pudiese ganar. Y ha presentado esta medida donde cada legislador del Partido Popular está votando conforme a su conciencia y el partido dejó en libertad a cada legislador para votarle como quisiera, unos en la Cámara votaron a favor, otros votaron en contra, nosotros vamos a votar en contra a esta medida porque esta medida, mis queridos amigos, lo único que constituye es un acto de gran demagogia. No resuelve en nada, ¡en nada!, el problema de la criminalidad. En Puerto Rico está claramente demostrado que el ochenta y cinco (85) por ciento de todos los crímenes están causados directa o indirectamente por el problema de las drogas y por el problema de la descomposición social, moral y familiar de este país. Y la implementación de esta medida, para que tengan una idea, el magistrado federal, Jesús Castellanos, testificó que sin una información adecuada él no puede decidir a quién negarle y a quién no negarle el derecho a la fianza. Y esa información adecuada, como para cien personas que él tiene que tomar esa decisión al año, cuesta producirla en la Corte Federal, cerca de un millón (1,000,000) de dólares, según testificó el licenciado Carlos Rodríguez, que dirige la Oficina

de Oficial Probatorio. En Puerto Rico hay acusados de delitos graves de Tipo I, ciento y pico de mil personas al año. Reincidentes en Puerto Rico, la reincidencia se estima alta, cerca de un treinta y cinco (35) por ciento. Vamos a suponer que hay cincuenta mil acusados y que la reincidencia es un treinta y cinco (35) por ciento a quienes le aplicaría esta medida, estamos hablando de diecisiete mil quinientas (17,500) personas. Vamos a suponer que muchos de ellos sean acusados de delitos menores. Estamos hablando de cerca de diez mil personas. El costo de producir esto, para que sea constitucional la determinación de negarle la fianza a una persona porque aquí hay unos requisitos de peligrosidad que tiene que tener ante sí el Juez o Magistrado, es prohibitivo. Por eso es que esto es un acto de demagogia.

Además de eso, ¿cómo opera la realidad? A alguien se le arresta por haber cometido un delito y se le lleva inmediatamente a la Sala de Investigaciones en el Tribunal de Distrito o en el Tribunal Municipal o en el que se cree con la Reforma Judicial, y lo llevan ante esta persona y en ese momento el magistrado o el juez tiene que hacer una determinación de si esa persona es reincidente, de si es peligroso y si le puede negar o no negar la fianza para ingresarlo a la cárcel sin fianza. ¿Qué criterios tiene en ese momento el magistrado y el juez? No los

puede tener. A la gran mayoría de las personas cuando arrestan lo llevan al tribunal a los treinta minutos, no los pueden ingresar sin una determinación judicial.

SR. PRESIDENTE: Le queda un minuto al compañero.

SR. RIGAU: Por lo tanto, esto es un acto de gran demagogia. Además, lo más que puede hacer esta medida es mantener una persona seis (6) meses en la cárcel, sin fianza, asumiendo que se aprobara, seis meses es el máximo y lo tienen que poner en la calle si no le celebran juicio. En Puerto Rico hoy hay miles y miles personas convictas en la calle, mucho más de lo que hay dentro de las instituciones penales y lo que esta medida hace es decir a los que tienen presunción de inocencia, métanlos presos, y los que ya están convictos, después de un juicio, en la calle en Puerto Rico. Esto es un acto de demagogia, un intento de un Gobernador que se ve perdido, de tratar de hacer algo dramático, demagógico y decir que está haciendo algo contra el crimen cuando todos sabemos que los asesinatos siguen subiendo a año y medio de su administración.

SR. PRESIDENTE: Compañero Sergio Peña Clos.

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, distinguidos compañeros y hermanos puertorriqueños, la encrucijada que enfrenta el Sistema Judicial en Puerto Rico es sencilla, garantizar el derecho absoluto a

la fianza o restringirlo para evitar que el convicto previamente por delito grave al cual se le imputan la comisión de uno o más delitos graves serios y represente amenaza para la comunidad, se proteja con un derecho que le permite tornar en burla el derecho mayor a la vida, al disfrute de la propiedad y a la búsqueda de la felicidad que asiste al ciudadano ejemplar. El crimen en Puerto Rico hace mucho tiempo que dejó de ser la preocupación de unas pocas víctimas, funcionarios del Gobierno, victimarios y abogados criminalistas, que de una u otra forma eran los actores principales en este trágico drama humano. Por eso es que en el pasado se ha tratado de enmendar este derecho absoluto a la fianza, empezando por la presentación de una Resolución Concurrente, por la Mayoría Popular en aquel entonces en este Senado, que limitaba el derecho absoluto a la fianza en todo tipo de delito grave, menos en los delitos menos graves. Después en el '78 hubo otra enmienda que se aprobó también por la Mayoría y Minoría en aquel entonces del PNP y del PPD. En el '86 este servidor radica la Resolución Concurrente del Senado 21, a la cual se unió el amigo Antonio Fas Alzamora, pues, se ha arrepentido. Yo todavía no me he arrepentido, todo lo contrario, los argumentos que se esgrimieron en aquel entonces, se pueden esgrimir con mayor contundencia en el día de hoy.

Actualmente, el crimen es

titular de primera plana en los periódicos, noticia sobresaliente en los noticiarios de televisión y tópico principal de programas televisivos y radiales. Existen tres razones principales para que esto sea tal y como lo he descrito. Primero, el crimen teológicamente y socialmente siempre ha sido censurado y siempre llama la atención. El aumento en la actividad delictiva en el país ha empujado las noticias económicas y de otra índole a la página dos del periódico, y en el caso de algunos periódicos, a la página cuarta, quinta, sexta, séptima y a la vigésima página, como los asuntos de mayor preocupación. Segundo, el cambio en el patrón del crimen en nuestro país está afectando a toda la familia puertorriqueña. Ya no se trata del crimen pasional de antaño, ni del ratero que ocasionalmente cometió un delito. Hoy estamos frente al crimen organizado, una actividad delictiva diseñada, planificada y ejecutada con precisión científica y utilizando todos los medios tecnológicos a su disposición con el propósito de garantizar un método de vida. Y a través de ese poder económico que genera ese tipo de actividad delictiva, controlar, lograr acceso, inclusive, del poder político y hasta del social, porque los conocemos, los encontramos en nuestros alrededores y auspician varias causas que pueden lucir cívicas, porque detrás de ese civismo se esconde ese mismo patrón de control. De

más está señalar que para el crimen organizado el fin justifica los medios. Por lo tanto, la amenaza, la mutilación y el sicarismo constituyen sus métodos por excelencia para promover la disciplina, sembrar el temor y mantener el control sobre una sociedad.

Tercero, la facilidad con que el criminal logra continuar su actividad delictiva, aun después de haber sido acusado y aun cuando todavía está pendiente de enfrentarse a un proceso judicial, ha puesto en entredicho nuestro sistema de justicia criminal.

Hemos llegado al punto en que la sociedad no entiende por qué anda suelto un criminal a las pocas horas de haber cometido un delito para que continúe cometiendo otros delitos. La gente no entiende por qué se permite al criminal habitual que continúe corrompiendo a nuestra juventud con drogas. El traficante de drogas, el águila imperial de la delincuencia continúa suelto por nuestras calles y con los incentivos que da ese dinero, fácilmente obtenido logran otras cosas.

Esas tres razones están ampliamente fundamentadas en datos objetivos, en la realidad que vive este pueblo y en lo que percibe la ciudadanía.

Decía el amigo Rolo Silva, condicionando, pero dando el voto a esta enmienda, pues quiero que ustedes sepan y yo sé que algunos lo saben, pero a los que no lo saben, deben entender que San Juan, nuestra ciudad

capital, ha sido durante los últimos nueve (9) años una de las ciudades a donde prevalece la delincuencia como nunca antes conocimos. De hecho, en el año 1986, San Juan se llevó el gran premio de ser la ciudad donde mayor número de delitos graves se habían cometido en toda la Nación. De eso es que estamos hablando. San Juan tiene ese triste honor, le cabe esa gran gloria de haber sido la ciudad a donde mayor número de crímenes se cometieron. El año pasado, cuatrocientos y pico de asesinatos se cometieron aquí en San Juan. De eso es que estamos hablando. Esa situación que he explicado, pues se torna aún más peligrosa si entendemos, la población penal. ¿Ustedes saben cuántos confinados hay hoy en día? Pues hay diez mil doscientos diecisiete (10,217). Yo les voy a ofrecer los números que algunos amigos entienden que no los tenemos. Pues yo los acabo de recibir como pan caliente, hace media hora que pedí esos datos. Pues de los diez mil doscientos diecisiete (10,217) confinados, cerca del sesenta (60) por ciento, son reincidentes de delitos graves. Estamos hablando de diez mil doscientos diecisiete (10,217), de seis mil (6,000) confinados. Y de esos seis mil (6,000) confinados el sesenta y tres punto cuatro (63.4) por ciento son reincidentes de delitos graves, perdón, el ochenta y cuatro punto cinco (84.5). Así es que de toda esa población penal, seis mil (6,000) son reincidentes. Y de esos seis mil (6,000)

reincidentes, pues hay cuatro mil y pico por delitos graves. Esa es la data de hace unos minutos. Así es que yo invito a los compañeros que hablan de que no hay estadísticas, pues que las observen y las examinen. Y todo el mundo sabe que esto es así, pero todo el mundo quiere ocultarlo, escondiéndose en el manto de los llamados derechos civiles que deben de prevalecer y deben existir.

Yo he ofrecido estos datos para que ustedes entiendan que uno no puede, uno no puede estar hablando de la criminalidad, como si estuviéramos en el año 1952, donde otro era el Puerto Rico. Y no voy a entrar a considerar el por qué de esta situación del pasado y del presente. Los factores que pueden atribuirse a esta alza en la criminalidad van desde el desempleo, el negocio de las drogas, el consumerismo conspicuo y desmedido, las continuas falsas imágenes y falsos valores con que son bombardeados sistemáticamente nuestros hombres y nuestras mujeres en este país.

Muchos de ustedes se preguntarán por qué este servidor, que ha sido un abogado criminalista de toda su vida, apoyo este tipo de medida, como la apoyé en el pasado, como la han apoyado otros. Yo les digo a ustedes que esto va desde, pues, de mi interés en la vida de este pueblo, a ser un facilitador de la idea que tiene este pueblo, va por distintos caminos.

Ahora, yo quiero que ustedes traten de entender cuál es la diferencia en el Puerto Rico de hoy frente al Puerto Rico del año 1952. Porque aquí a veces se dice, "¡Ah! mira, no se puede interceptar el teléfono porque la Constitución de los Estados Unidos no habla de esa interceptación". Bueno, cuando se aprobó la Constitución de los Estados Unidos no había teléfonos, pero aquí se acude a argumentos que son hasta risibles, por no decir otra cosa. En el 1950 conocíamos el ratero común, pero no al asaltador profesional, conocíamos al bolítero, pero no al raquetero que manipula junto al juego clandestino y hasta el juego ilícito en forma sistemática y organizada. Conocíamos al fabricante de ron cañita y buen pitorro, por allá en Las Piedras, en Juncos, en Yabucoa y en medio Puerto Rico, en los campos de Caguas, pero no existía el traficante de drogas que poseía una organización bien sofisticada, como cualquier corporación multi-nacional; y conocemos que hoy en día hay un tipo de arma con miras teledirigidas hasta por la noche y sopla no sé cuántas balas por segundo. Así es que ese es el Puerto Rico de hoy frente al de ayer. Conocíamos al que confecciona la manopla y al que confeccionaba la gurbia y la afileaba...

SR. PRESIDENTE:
Compañero, le quedan cuatro minutos.

SR. PEÑA CLOS: ...pero no al mercader, al trasiego de armas de fuego ilegales como las que he descrito. Conocíamos el hurto ocasional de un caballo, de una yegua o de una cabra o de una gallinita, pero no el negocio del "car-jacking". Conocíamos el pervertido ocasional, el que miraba por las rendijitas, hoy en día estamos frente a un tipo que corrompe nuestra juventud e instiga, introduce a las drogas y a la pornografía a nuestros hijos y nuestros hermanitos. Ese es el Puerto Rico de hoy frente al Puerto Rico del 1952. Conocíamos, naturalmente, el delincuente y criminal pasional, pero no el sicario, no el matón a sueldo, no aquél que mataba por cien (100), doscientos (200), trescientos (300), quinientos (500), mil (1,000) dólares, de eso es que se trata. Nosotros no conocíamos esa organización criminal; hoy en día hay que combatirla.

Para terminar, voy a citar unas palabras de Jeremy Bentham, el filósofo inglés, que decía que la meta de la vida es proveer el mayor bienestar al mayor número de personas. Para lograr los fines de este postulado, nuestra sociedad tiene, entre otras cosas, que enfrentarse a la encrucijada y decidir entre garantizar el derecho absoluto a la fianza o restringirlo para evitar que el que haya sido convicto previamente de un delito grave, haya sido acusado de varios delitos graves serios, y ustedes se preguntarán, ¿hay diferencia?

pues sí hay diferencia. No es lo mismo una agresión agravada que un asesinato, esa es la diferencia. Brevemente y rápidamente puedo establecer distintos delitos que son graves sin ser tan serios como el asesinato o la venta de drogas. Y además, que se le impute de esos más delitos y que represente una amenaza para la sociedad. A este pueblo se le ha hecho creer que esa enmienda va dirigida a todo el mundo y eso es ¡falso! y los amigos lo saben. ¿Por qué acuden a esos extremos para tratar de engañar a un pueblo? Para dirigirlos por un mal camino, cuando este pueblo lo necesita, como lo han hecho otros países, Estados Unidos de Norteamérica y no ha habido ese problema, no ha habido, no ha generado este tipo de controversia. Y esos grupos que se oponen a todo lo que uno presente, inclusive a legisladores que en el pasado apoyaron este tipo de medida. Nuestra pregunta y nuestra contestación va en el día de hoy favoreciendo esta Resolución Concurrente de la Cámara 32.

Yo estoy convencido que nuestra sociedad tiene que establecer esos mecanismos adecuados y compatibles con nuestro régimen democrático de libertad para protegerle de esas personas que siguen corrompiendo nuestra sociedad.

SR. PRESIDENTE:
Compañero Báez Galib.

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, tenemos en el Hemiciclo varias cámaras de

televisión, y mañana la prensa, la radio habrán de relatar todo lo que cada cual dijo aquí y lo que aquí se analizó. Y sé que las personas que están viendo esto ahora y que mañana habrán de escuchar y ver lo que aquí ocurrió, están profundamente angustiadas con la alta criminalidad que permea a nuestro pueblo y a la sociedad occidental en general. Y no me cabe la menor duda que esa angustia habrá, inclusive, de aprobar, si se le presentare, una pena de muerte para las personas que cometan delitos graves en Puerto Rico. E inclusive, no me cabe la menor duda que esa angustia que tiene nuestro pueblo y la sociedad occidental, habría inclusive de aprobar el que un policía en el lugar de los hechos, juzgue y castigue. Y si yo quisiera ganar votos y asegurarme de volver a este escaño, todo lo que tengo que hacer es pararme aquí ahora y hablar de cómo se salvan vidas y hablar de cómo se hace justicia y hablar de cómo tener una mano dura, porque eso es fácil. La gente está en esa onda y si yo estoy en esa onda, estoy en la onda de la supervivencia política. Yo no puedo, porque yo no vine a eso, y si yo tuviera que poner mi escaño en juego para dialogar con un pueblo y decirle que está mal, yo vine aquí a eso. Yo vine aquí a tratar de demostrarle a un pueblo las cosas que están buenas y están malas y yo le digo al pueblo de Puerto Rico que yo sé que en este momento desean esta

Ley, y que yo sé que en este momento aprobarían una pena de muerte, y que yo sé que en este momento le permitirían a un policía juzgar y castigar en el lugar de los hechos, yo le digo al pueblo de Puerto Rico que está mal.

Hace 1,961 años, en un lugar en el Mediterráneo un pueblo habló y un líder escuchó. Ante ellos allí, en un pueblo del Mediterráneo le presentaron dos personas y ese líder le preguntó al pueblo, ¿A quién ustedes quieren y a quién matamos? Y el pueblo habló y el líder oyó, Poncio Pilatos. El pueblo le dijo que había que matar a Jesucristo y que le entregaran a Barrabás, el pueblo habló. Les pregunto yo ahora, ¿estaba bien el pueblo? ¿No era obligación de aquel líder decirle a un pueblo, miren, esta es la verdad y este el embuste? ¿No es obligación del liderato de este país, si es que se llaman líderes, de dirigir a un pueblo en un diálogo honesto y sincero y no estar en supervivencias políticas, tontas que no responden a los mejores intereses?

Esto es una pantomima. Cualquier abogado que tenga cuatro dedos de frente no puede definir lo que aquí se está tratando de definir. Tan hace escasamente unas horas, yo le pedí a nuestra Oficina de Servicios Legislativos que me hicieran un catálogo de delitos graves. Me llamaron ahorita a pedirme tiempo porque van por ciento ochenta y cinco (185) y todavía no han podido y van por

la mitad de las Leyes de Puerto Rico anotadas. Eso es para los abogados.

Amigos míos, vuelvo y repito, los líderes no estamos para correr en la cresta de la opinión pública. Los líderes estamos para dialogar con la opinión pública, escuchar al pueblo y dialogar con ese pueblo...

SR. PRESIDENTE: Le queda medio minuto, compañero.

SR. BAEZ GALIB: Y hoy lo que estamos haciendo, amigos míos, es un golpe a traperos a una Carta de Derechos, a la Carta de Derechos más importante que existe en todo el Continente Norteamericano y Suramericano. Una Carta de Derechos que funciona y que es de verdad, la más adelantada. Y finalmente, están enmendando permanentemente una enmienda permanente. De ahora en adelante, esta Legislatura continuará enmendando la Constitución, añadiendo delitos graves, quitando delitos graves, definiendo lo que es serio, definiendo lo que no es serio, sin ir al pueblo. Por favor, reflexionen y recuerden que es responsabilidad nuestra como legisladores y como líderes de este país. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE: Compañero Freddy Valentín.

SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, muchas gracias, señor Presidente.

En el día de hoy no hay dudas de que estamos ante un momento histórico del pueblo de Puerto Rico sobre algo que es

justo y necesario que se atienda con prontitud. Analizaba yo hace breves momentos el documento programático de esta Administración del doctor Pedro Rosselló, en la nueva agenda, y encontraba en la página 6, en la revisión del Código Penal, mano dura contra el crimen violento y el compromiso que al Pueblo de Puerto Rico le hicimos relacionado con cadena perpetua, sin libertad bajo palabra a asesinos de oficiales de la Policía o Corrección, cadena perpetua sin libertad bajo palabra a traficantes de drogas, cadena perpetua sin libertad bajo palabra al delincuente habitual de crímenes por medios violentos, eliminar opción de libertad bajo palabra a reincidentes de crímenes por medios violentos, medidas rigurosas para el control de armas, confiscación de bienes que hayan sido frutos de criminalidad y su uso como recurso en una guerra contra el crimen. Y no hay duda, señor Presidente, que en este momento este Senado de Puerto Rico al igual de la Cámara de Representantes, se une a nuestro Gobernador en el compromiso serio, honesto y sincero que le hicimos a nuestro país para recibir la encomienda de gobernar los destinos de la patria puertorriqueña.

Definitivamente no podemos decir, compañeros de la Minoría, que esta medida va a terminar los problemas de la criminalidad. Nadie puede pensar que pueda surgir una medida específica,

particular, definitiva, que paralice el alza en la criminalidad en nuestro País, pero hay que buscar medidas remediativas, que empiecen a darle un estímulo y una confianza al pueblo de Puerto Rico. Citando a compañeros de la Minoría Popular, mencionaron que esta es una medida con el propósito de quitar derechos al ciudadano. ¡Que equivocados están! No es quitar derechos al ciudadano, es brindarle una mayor garantía de derecho a la vida del pueblo de Puerto Rico, al derecho que tenemos por un don divino de nuestro Creador, al respeto a la libertad privada, al respeto en nuestro sistema democrático de lo que constituye el derecho a propiedad privada. Y aquí, durante el transcurso de muchas otras Sesiones Legislativas, los que tuvieron la responsabilidad de hacer lo que había que hacer, no lo hicieron, o trataron de hacerlo y en algún momento del proceso de hacer lo que tenían que hacer, se paralizó. Hoy estamos cumpliendo, no solamente un compromiso que le hicimos al pueblo de Puerto Rico a través de nuestro Gobernador, el doctor Pedro Rosselló, sino que también estamos cumpliendo con la voluntad del pueblo. Es bueno decir, como dicen los compañeros y acaba de señalar el senador Báez Galib, que nosotros estamos enmendando la Constitución. Señores, a eso llega el grado de equivocación o confusión que pretende hacer la Minoría del Partido Popular en torno a este Proyecto. Si donde

va a recaer la responsabilidad de enmendar o no enmendar la Constitución de Puerto Rico es en el propio pueblo; es en el pueblo afectado continuamente por su seguridad. Es en un pueblo que ahorita, cuando escuchaba al senador Peña Clos, Sergio Peña, de definir a los que antes eran unos maleantes con unos nombres y que hoy son muy sofisticados, me recuerda también lo relativo a la poca confianza que sienten, compañeros, algunos tienen dudas del Proyecto, y yo los respeto, pero esos que tienen duda le van a dar la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a que se exprese. Esos que hoy tienen dudas, no se están abrogando la representación del pueblo que los eligió para no darle la oportunidad de expresarse libre y voluntariamente en un proceso de consulta al pueblo de Puerto Rico. Otros se oponen, y esto me recuerda al cuento de los hermanos Wright, ¿se recuerdan cuando iban a volar el primer avión? Pues habían unos que decían: "Va a volar y despegar el avión". Eso sería la Administración del doctor Pedro Rosselló. Y observando habían otros, incrédulos, los de las minorías, y decían: "A que el avión no vuela, no va a volar". Y cuando el avión despegó y cogió su curso, esas minorías, entonces dijeron: "A que se cae ya mismo, a que se estrella". O sea, de cualquier modo, de cualquier forma, hay que buscar en qué medida no brindarle al pueblo de Puerto Rico la responsabilidad

que recae sobre sus hombros de escoger, aceptar esta enmienda constitucional.

Definitivamente nosotros no podemos aquí legislar por temores, con la preocupación de que esto pueda ser inconstitucional o no, el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho y la responsabilidad de que se apruebe esta consulta que irá, como dije anteriormente, ante el pueblo de Puerto Rico. Y allí nos veremos todos ante el pueblo, unos hablando a favor, otros hablando en contra, pero dejándole en la voluntad suprema de la conciencia del pueblo puertorriqueño el derecho a escoger sobre su propias libertades.

Yo coincido con el senador Sergio Peña Clos. Ahorita leía en este libro que tenemos todos en nuestros escritorios lo relativo a la Constitución Federal de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico. La Constitución de los Estados Unidos desde el 1789 y a esta fecha, luego de doscientos (200) años, ha tenido ya veintidós (22) enmiendas. Enmiendas que se han hecho en el propio proceso de analizar las libertades que se tienen. No puede haber libertad absoluta contra el derecho absoluto de buena calidad de vida y de seguridad de un pueblo. No puede haber ningún derecho que esté por encima del derecho de la vida misma. Está bueno ya de buscar obstáculos a una acción que habrá de llevar a cabo el propio pueblo puertorriqueño.

La presente medida que está ante nuestra consideración en la tarde de hoy, propone enmendar la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para disponer que la enmienda propuesta sea sometida para la aprobación o rechazo de los electores capacitados en nuestro país. La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al igual que las Enmiendas 5 y 14 de la Constitución de los Estados Unidos garantizan que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. El propósito fundamental de esta presente medida es proteger, como señalé anteriormente, el derecho de los ciudadanos, de aquel que representa un peligro para su vida y permitirle el disfrute de los derechos constitucionales a la vida, a su seguridad y a la búsqueda de su felicidad.

Yo creo señores, hermanos, compañeros legisladores, que estamos ante un momento histórico, como decía el compañero Báez Galib, pero hay algunos que al igual que el avestruz, meten la cabeza en el hueco; otros asumiremos la responsabilidad que históricamente nos corresponda. Y será la historia y el destino quien nos juzgue o nos condene. Yo estoy seguro que mis nietos me lo agradecerán y mis hijos me lo agradecerán porque estaremos, no con esta alternativa que le brindamos al pueblo de hacer una

enmienda constitucional de acabar con el problema de la criminalidad, pero sí, de tener otro instrumento más para enfrentarnos, para decirle al criminal habitual, al reincidente, al peligroso, que ya estamos cansados en nuestra sociedad, que en esta Administración que dirige nuestro Gobernador, Pedro Rosselló, que con los Senadores del Nuevo Senado y de la Nueva Cámara, aquí hay una oposición real a las actitudes de crímenes abusivos, descarados y violentos que ocurren en nuestra sociedad. No podemos permanecer inmóviles ante esa situación. Y vuelvo y repito, no podemos dar la impresión de que esta medida es para nosotros enmendar la Constitución, le corresponde al pueblo de Puerto Rico. Tu voluntad se hará sentir, cuando una vez sea aprobada esta pieza legislativa tengas la oportunidad con tu conciencia de votarle a favor o rechazar esta enmienda a nuestra Constitución. Aprovecha la oportunidad de defender tu destino, tu seguridad y tu vida misma, aprobando en esa consulta esta enmienda a la Constitución.

Y quiero felicitar a la Comisión de Gobierno por el trabajo que ha realizado y pedirle al compañero senador Kenneth McClintock, señor Presidente, de que pueda explicar, en el momento dado, lo relativo al delito grave serio. Muchas gracias, señor Presidente.

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Señor

Presidente, aceptamos la pregunta del compañero.

SR. PRESIDENTE:
Compañera..."

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Señor
Presidente.

SR. PRESIDENTE:
...compañera Velda González.

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Señor
Presidente, nos dirigieron una pregunta, estamos dispuestos a contestarla.

SR. PRESIDENTE:
¿Perdón?

SR. McCLINTOCK
HERNANDEZ: Contra el tiempo del Partido Nuevo Progresista, estamos dispuestos a contestar la pregunta que hizo el compañero.

SR. PRESIDENTE: No, después, más adelante, el compañero puede contestar las preguntas en un turno que le podemos dar al final. Compañera Velda González.

SRA. GONZALEZ DE
MODESTTI: Señor Presidente y compañeros del Senado, público televidente: La restricción del derecho absoluto a la fianza que se pretende con esta consulta a la ciudadanía y que propone esta legislación, no solamente va a la médula del derecho a la fianza, sino que además, va a trastocar otro derecho constitucional como lo es la presunción de inocencia. Usted puede haber sido convicto de otros delitos en el pasado, pero a lo mejor no es culpable de este delito que se le está acusando. Pero a usted se le va a presumir culpable y se le va a

privar del derecho a la fianza, enviándole hasta por seis meses a la cárcel en lo que se determina su inocencia del caso que se le está acusando en este momento.

La Mayoría del Partido Nuevo Progresista en lugar de intentar privar a todos los ciudadanos de un derecho fundamental, esencial, que garantiza nuestra Constitución, debe proveer los recursos y asegurar que se usen efectivamente para aumentar el número de delitos esclarecidos. Las penas de reclusión más alta, la imposición de cantidades enormes en multas y la eliminación del derecho a la fianza, no constituyen disuasivo alguno en la mente del que se propone delinquir cuando las probabilidades de responderle a la justicia por la comisión de estos delitos es muy poca o ninguna. El riesgo que asumen los delincuentes en nuestro país es muy poco ante las cifras tan bajas del por ciento de esclarecimiento de delitos. Si el Estado lograra aumentar su efectividad en la investigación y procesamiento de los delincuentes, entonces, ese mismo delincuente lo pensaría muy bien antes de lanzarse a la aventura criminal. Esta efectividad del sistema de justicia pesaría mucho en el ánimo y en la inclinación de delinquir, ya que se ha demostrado que este factor pesa mucho más que las consideraciones en cuanto a la severidad de la pena o la posible restricción festinada a su derecho a la fianza.

Lo que abona al ánimo y a la frustración de los múltiples ciudadanos que son víctimas de

delitos en la actualidad en una proporción sin precedentes es el hecho de que nueve (9) de cada diez (10) delitos se quedan sin esclarecer en la actualidad. Sólo se está esclareciendo el diez (10) por ciento de los delitos, mis amigos. Lo sensato y apropiado es intensificar los esfuerzos para que la Policía de Puerto Rico y los fiscales cuenten con los recursos más eficientes en la investigación de esta ola criminal. Es sumamente detrimental a la formación de los niños y jóvenes, y debilita la fe del ciudadano en su Gobierno, en su sistema de justicia y en sus instituciones saber que la acción delictiva queda impune, pues son muy pocas las probabilidades de que se esclarezca el delito y que se procese al delincuente. Nuestra conciencia social, como líderes del país, exige que auscultemos las verdaderas causas de la criminalidad. El alza sostenida en la criminalidad que en términos de muertes violentas ha alcanzado cifras sin precedentes en estos años '93 y '94 es el producto de un país que padece de unos profundos males sociales. Puerto Rico se encuentre entre los primeros países con mayores problemas de alcoholismo, adicción a drogas, incidencia de problemas de salud mental, deserción escolar y violencia doméstica. Vemos con profunda tristeza que la presente Administración, amparada en la obsesión de reinventar el Gobierno y agrupar programas bajo burocráticos departamentos

sombrilla, ha abandonado la prioridad que...

SR. PRESIDENTE: Le queda un minuto, compañera.

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: ...se concedió en el pasado a los programas sociales encaminados a atender la problemática apuntada. Es preocupante que como resultado de esta improvisación y ausencia de coherencia, la Mayoría Parlamentaria insista en restringir la fianza y encarcelar a los imputados que se presumen inocentes, mientras bajo el sistema de fianza acelerada que ha implantado la Administración del PNP, se liberan imputados de delitos de violencia doméstica y convictos que cumplen penas de reclusión para aminorar el hacinamiento carcelario. Tenemos que repudiar esta política de apariencias de "mano dura", que actúa basada en la represión, en la ausencia de compasión, en las encuestas de opinión pública y en el fortalecimiento de la imagen deteriorada del Gobernador, y que da la espalda a la solución de los verdaderos problemas sociales y abandona los programas de rehabilitación a menores y adultos. Es por estas razones que yo votaré en contra de esta propuesta enmienda, porque destruye la presunción de inocencia, porque atenta contra la rehabilitación del ex-confinado, porque no hay suficiente dinero para llevarle al pueblo de Puerto Rico una campaña educativa para que vea los alcances de esta

medida por la que tendría que votar. Son medidas cosméticas que responden a una histeria colectiva por el alza en la criminalidad, pero que no resuelven el problema.

Sólo el tres (3) por ciento, según los estudios de la doctora Nevárez, de las personas que están bajo fianza cometen delitos. Y sólo los pobres que no pueden contratar a los grandes abogados son los que van a pagar en la cárcel mientras se espera para celebrarse el juicio.

SR. PRESIDENTE: Compañero Dennis Vélez.

SR. VELEZ BARLUCEA: Buenas tardes, compañero Presidente, señor Presidente y compañeros Senadores: Voy a empezar por lo último que ha señalado la compañera Velda González. Ella cita unas estadísticas de la doctora Dora Nevárez, que dice que sólo un tres (3) por ciento de las personas que están bajo fianza cometen delitos. Las estadísticas que nosotros tenemos es que es de un tres (3) a un seis (6). Si eso fuera así, si eso fuera así, tomando solamente las estadísticas de la compañera Velda González, en Puerto Rico se cometieron el año pasado ochocientos cuarenta y seis (846) asesinatos. Si le tomamos un tres (3) por ciento a esos ochocientos cuarenta y seis (846) asesinatos, compañera Velda González, hubiéramos evitado que veinticinco (25) puertorriqueños hubieran muerto el año pasado si hubiéramos tenido el beneficio de tener

encarcelados sin fianza a estos asesinos. Y yo le pregunto a la compañera Velda González, si para ella, la vida de un solo puertorriqueño, de uno solo, que puede ser el hijo de cualquiera de nosotros, no es importante. Y eso sin contar las otras estadísticas, utilizando el tres (3) por ciento de la doctora Nevárez nada más, que señala ella, nosotros decimos que es el seis (6) por ciento. En total de delitos de violencia en Puerto Rico, cometidos durante el año pasado, que incluye asesinatos y homicidios, violaciones por la fuerza de mujeres puertorriqueñas, que son violadas diariamente, robos, agresiones agravadas, nos dan la suma de veintiséis mil trescientos treinta y seis (26,336). Si le buscamos el tres (3) por ciento a esos veintiséis mil trescientos treinta y seis (26,336) estamos hablando de que de los asesinatos, pudimos haber salvado veintiocho (28) vidas, pudimos haber salvado a trece (13) mujeres que hubieran sido violadas. Pudimos haber evitado cerca de quinientos cuarenta (540) casos de robo, pudimos haber evitado cerca de ciento cincuenta (150) agresiones agravadas en Puerto Rico. Con esas estadísticas, yo creo que más que se justifica esta enmienda constitucional propuesta, porque esta enmienda constitucional propuesta no va dirigida a la persona decente, cumplidora de la Ley, es más, ni tan siquiera va dirigida a la persona que por una equivocación o un arrebató de

cólera o aun en forma intencional, por primera vez delinque en Puerto Rico. Porque una persona, inclusive, puede ser objeto de una acusación por asesinato por primera vez y a ése se le va a garantizar, aun a ése, se le va a garantizar el derecho a la fianza. Y pudo haber sido objeto de una violación que los abogados señalan que es la violación técnica, pero que en realidad es violación, ¿verdad, compañero Oreste Ramos? Pero a ése también, si lo hizo por primera vez, se le garantiza el derecho a la fianza.

Ahora, yo le pregunto a la compañera Velda González, que es mujer, y que sabemos que es una gran defensora de los derechos de la mujer, si a ese violador que violó una vez y que se le dio la oportunidad al derecho a la fianza, que salió otra vez y volvió a violar, si ella está de acuerdo que a ese enfermo o a ese delincuente que se le garantice el derecho a la fianza, como ella que dice que es defensora de los derechos de la mujer. Yo estoy en contra de eso, porque si podemos evitar que una sola mujer, una sola, no estoy hablando de dos ni de diez ni de veinte ni de cien, una sola mujer en Puerto Rico o un solo hijo nuestro en Puerto Rico que no sea una víctima más del crimen, debemos hacerle todas las enmiendas que sean necesarias a la Constitución de Puerto Rico para salvar vidas y para salvar la honra de la mujer puertorriqueña.

SR. PRESIDENTE: Un minuto, compañero.

SR. VELEZ BARLUCEA: De eso es de lo que se trata esta enmienda constitucional. Y todavía se le pone un diente más, le exigimos también al juzgador que pase juicio sobre la peligrosidad de la persona. No solamente que haya delinquido, que sea imputado, sino también hay que ir a un juzgador, a un juez para que pase juicio para ver si esa persona representa un peligro para la sociedad.

Nosotros, la gente responsable de este país, en el Senado de Puerto Rico, le vamos a dar el derecho a los ciudadanos de Puerto Rico para que voten por esta enmienda constitucional. Y le decimos al compañero Báez Galib que es al revés, o "al verrés" como dicen allá en el campo, él quiere soltar a Barrabás, al delincuente, y dejar preso a Jesucristo, que es la gente decente de este país y que sufre. Así que es que tenemos que votar a favor de la enmienda constitucional, porque con eso salvamos vidas en Puerto Rico y salvamos muchas cosas y muchos derechos de los puertorriqueños. Muchas gracias, compañeros Senadores.

SR. PRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero.

SRA. OTERO DE RAMOS: Muy buenas tardes, señor Presidente, compañeros y compañeras de este Cuerpo: Hoy es un día sumamente trascendental en nuestra historia. Cuando en Africa se reconoce en el día de hoy a un ex-confinado

para ser el Jefe de Estado, en Puerto Rico el Jefe de Gobierno somete legislación para que a un acusado al que todavía se presume su inocencia, porque no ha tenido la celebración de juicio, no pueda quedar en libertad bajo fianza, utilizando así la fianza como una medida punitiva.

El propósito de la fianza es muy claro. La fianza se utiliza para garantizar la presencia de un acusado en el Tribunal y no es una medida punitiva. Sin embargo, esta medida se ha estado interpretando como si fuera una sentencia antes de celebrarse juicio. Reconocemos el problema de la criminalidad, pero esta medida que pretende trastocar la Constitución de Puerto Rico para enmendar el derecho absoluto a la fianza, no resuelve y ni siquiera aminora dicho problema. El estudio más reciente de la conferencia judicial indica que el noventa y cuatro (94) por ciento de los acusados comparecen a juicio, lo que representa que el derecho a la fianza es una medida confiable. Pero ahora lo que se quiere hacer con esta medida es aparentar que se está poniendo la mano dura para combatir la criminalidad.

Aquí hay que analizar lo siguiente para que no se confunda al pueblo, que es el que en última instancia va a tomar la determinación. Aquí una cosa es la comparecencia a juicio, para eso es la fianza. Otros, son los problemas de peligrosidad y reincidencia que no tienen que ver directamente con la fianza y

que se pueden tomar alternativas legislando o enmendando leyes en forma juiciosa, objetiva y adecuada, como sería la de asignar fondos para mejorar el sistema de información de justicia criminal, de manera que cada juez tenga todos los datos para tomar una decisión correcta. Y la segunda es, sometiendo un sistema de supervisión donde a las personas que están en fianza, se les dé un seguimiento adecuado, que puede ser, inclusive, venir diariamente al Tribunal, o semanalmente, a firmar. Y también darle seguimiento donde quiera que el juez haya tomado la decisión de que pudiera encontrarse.

El compañero Peña Clos mencionó una estadística de hoy de la Administración de Corrección diciendo un dato de que más de una tercera parte son reincidentes. Yo quiero decirle al compañero Peña Clos de que aquí no se está hablando de los reincidentes completos, porque el cincuenta (50) por ciento de los menores que no están en el derecho a la fianza, son reincidentes de adultos, y esos no están en esta medida.

Y realmente estamos hablando aquí de un sinnúmero de otros asuntos, que tal y como está la Ley en estos momentos, un juez puede imponer condiciones a un acusado y si esta Legislatura puede enmendar la Ley a los efectos de que se provean los datos sobre los acusados reincidentes o de delitos graves, para que el Juez pueda

tomar una decisión con mayor certeza. Si se enmienda esta Ley, estamos diciendo que bajo ninguna circunstancia el enmendarla va a resolver el problema que tienen los jueces de la información que necesitan para determinar si una persona se deja o no bajo fianza, y eso incluye la identificación de los delitos graves. Porque aquí van a ir los pobres para la cárcel. Allí la representación es de los pobres y el pobre que no pueda tener un abogado que le represente y que no pueda negociar, ése es el que va a ir allí con el delito grave. ¿Cuándo los corruptos en este país han ido a la cárcel? O sea, esta es una medida injusta y esta medida por ser injusta es una medida que nosotros no podemos aprobar en este momento porque podemos buscar otras alternativas para justificar la peligrosidad y para resolver el problema de prevención en términos de la reincidencia, sin que se trastoque esta medida.

SR. PRESIDENTE: Tiene un minuto compañera.

SRA. OTERO DE RAMOS: Por otro lado, además de fortalecer un sistema de información criminal a este respecto para prevenir otros comportamientos delictivos, mientras se de fianza a un acusado, tendrá que ser supervisado.

Esta legislación no toca el tema trascendental de esta medida y no resolverá nada. Número uno, porque los menores de dieciocho (18) años no están incluidos en esta medida, porque

no tienen derecho a fianza; y todos sabemos que los jóvenes son los que, lamentablemente, aumentan la tasa de criminalidad en forma alarmante. Tampoco se sabrá cuando un adulto que haya tenido una reincidencia como menor puede empezar a ser un reincidente como adulto. Tampoco se dice cuando se le niega el derecho a la fianza a un convicto por delito grave o por ser reincidente en delito grave y éste tenga que ser encarcelado, no preguntamos si no se le celebra juicio ante de los seis (6) meses, de todas maneras quedaría en libertad. Si lo matan en la cárcel siendo inocente, pues, es una demanda al gobierno. Si no comparece a juicio estando encarcelado, porque este confinado se esconde en algunos casos para que prescriban sus delitos y por otras razones. Si se fuga, ¿qué pasaría?

Por otro lado, tenemos otras áreas que mencionar, pero no tenemos el tiempo para ello. Pero me parece que es importante que no nos hagamos cómplices de esta situación, porque la enmienda es innecesaria y además, se le da una connotación punitiva a la fianza que no debe tenerla y, por lo tanto, no resolverá el problema de la criminalidad que es el problema que el pueblo quiere que se le resuelva. Nosotros hemos tenido unos cuantos Proyectos de Ley como alternativa para resolver el problema de la peligrosidad y el problema de la reincidencia. No busquemos trastocar la Consti-

tución porque eso no va a resolver el problema. Las alternativas que nosotros hemos propuesto en la Cámara, sí, y aquí en el Senado.

SR. PRESIDENTE:
Compañero Rodríguez Negrón.

SR. RODRIGUEZ
NEGRON: Muchas gracias,
señor Presidente.

Señor Presidente, para mí es una situación difícil en el día de hoy porque yo voy a estar, anoche estaba pensando en aquel dilema de Hamlet, "to be or not to be". Le digo esto, señor Presidente, porque en la vida de todos nosotros siempre hay una persona que tiene gran influencia en la formación del pensamiento. Y recordaba yo anoche, señor Presidente, a mi profesor Stanley Finegold, un eminente profesor en la Universidad de Nueva York, que en la clase de Gobierno siempre decía que las constituciones de los países es un cúmulo de leyes fundamentales que le da y protege los derechos de los pueblos. En una ocasión dije eso y un compañero dijo, porque al indicarle que según Finegold siempre decía, que a mayor crisis, mayor recato de parte de los legisladores. Y me decían, pues obviamente, que la Constitución de los Estados Unidos se enmendó en diez (10) ocasiones inmediatamente y le recordé yo al compañero de que sí se enmendaron, pero fue en la Carta de Derechos para los ciudadanos. Así que esto esa una situación que yo he querido

plasmarse para el récord, porque yo tengo una serie de interrogantes, una serie de dudas y sería irresponsable si no las dejo plasmadas para el récord.

Me preocupa, señor Presidente, que se haya creado una nueva denominación para delitos graves serios. En Puerto Rico nosotros tenemos nuestro ordenamiento jurídico, tenemos los delitos graves y lo menos graves. Ahora se podrá entender que hay uno que, supuestamente, se dice que es grave serio. Yo les anticipo que en muchísimas ocasiones los abogados postulantes van a invocar esto, de que no es un delito serio porque la misma Constitución lo dice.

Me preocupa, señor Presidente, de que ese listado de delitos que confecciona la Legislatura pueda variar en cualquier momento, al extremo que, posiblemente, en una legislatura futura se pueda decir, que como la bolita en Puerto Rico se ha tornado en un delito serio para el pueblo de Puerto Rico, me la incluyan también, la infracción a la bolita, como un delito serio. Sin embargo, señor Presidente, yo también estoy muy consciente de que los pueblos no pueden convertirse en cautivos ni en esclavos de sus propias creaciones, y la Constitución de los países son creación de los pueblos.

Me preocupa, señor Presidente, de que el día aquí en Puerto Rico, que la policía de Puerto Rico arreste al homólogo de un Pablo Escobar Gaviria,

una persona que, posiblemente, todos sepamos que ha ejecutado veinticinco (25) o cincuenta (50) personas, que le ha envenenado las venas a la juventud de este país, lo arresten finalmente y comparezca ante un magistrado y como nunca ha sido convicto de delito, a ese granuja le tengan que dar el derecho ese a fianza. A la inversa me preocupa también, señor Presidente, que un buen día llegue el hijo de doña Juana, que haya podido cometer un delito, hace diez (10) o quince (15) años, un delito grave, que se haya rehabilitado y que el fiscal le indique al juez que esta es una persona peligrosa. El juez le va a preguntar, le dice, pues, "Demuéstrelo" y le dice, "Señor juez, necesito tres o cuatro días para probárselo, mientras tanto le voy a pedir que lo encarcele". Esas son unas preocupaciones que yo tengo, señor Presidente, sin embargo yo estoy bien claro. Yo creo que esta es una legislación que es posible que dé algunos frutos. Pero cuando uno lo pone en el balance, yo tengo mis serias dudas. Sin embargo, señor Presidente, hay una fuerza mayor que es la fuerza del pueblo. El compañero Báez Galib indicó lo de Poncio Pilatos, lo que pasa, compañero, es que Poncio Pilatos nunca le dio aquel pueblo la oportunidad de que fueran sus líderes a orientarlos sobre si la medida era buena o era mala. Esa oportunidad la va a tener el pueblo de Puerto Rico, porque va

a haber una campaña y el pueblo de Puerto Rico podrá discernir en cuanto a las virtudes o las flaquezas de esta legislación.

Yo habré de votarle a favor por una sola razón, porque yo no estoy votando aquí con mi voto a favor para enmendar la Constitución del país. Yo solamente estoy votando para darle una oportunidad al pueblo de expresarse y los compañeros del Partido Popular al negarle esta votación para que el pueblo se exprese, será la segunda vez en el día de hoy que el liderato de Partido Popular le habrá negado al pueblo de Puerto Rico el derecho a ejercer y escoger, en el caso de la tercera papeleta, sus candidatos y ahora, el derecho de decidir sobre un problema tan importante como es la criminalidad en Puerto Rico. Yo estoy votando para darle ese derecho al pueblo de Puerto Rico; que así quede consignado.

SR. PRESIDENTE:
Compañero Cirilo Tirado.

SR. TIRADO DELGADO:
Muchas gracias al señor Presidente y compañeros del Senado.

Señor Presidente y compañeros senadores, pueblo de Puerto Rico: Esta tarde discutimos un asunto de mucha trascendencia para nuestro pueblo, tenemos que decidir aquí si se autoriza una consulta o un referéndum para enmendar el Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución. El Artículo II es nuestra Carta de Derechos.

En el pasado, medidas como las que consideramos esta tarde han sido consideradas por la Asamblea Legislativa. Se han rechazado esfuerzos desde la década de 1970 y yo, personalmente, he participado en votaciones donde se han considerado algunas enmiendas constitucionales y específicamente estas para restringir el derecho a la fianza. En el pasado, específicamente en el 1979, voté en favor de la Resolución Concurrente de la Cámara Número 30, similar a la que estamos considerando en la tarde de hoy. Al igual que hoy, el problema de la alta incidencia criminal fue el argumento que se levantó durante el debate que precedió la aprobación de dicha medida. De las personas que han participado en el debate saco una cita que es bien importante, y es del licenciado Graciani Miranda Marchand, ex-Presidente del Colegio de Abogados, quien señala que: "El derecho a la fianza es el derecho a la libertad y los derechos no se renuncian". También, después de eso, han habido expresiones tanto aquí en la Legislatura, como fuera de la Legislatura de distinguidas personalidades, don Luis A. Ferré, opuesto a la eliminación del derecho a la fianza: "Es innecesaria la enmienda constitucional, se puede lograr lo que se quiere sin tocar la Constitución". Doctora Trina Rivera de Ríos: "Se engaña la ciudadanía aterrada por la criminalidad haciéndole creer que sólo el criminal violento

y peligroso es el único que se va a afectar". Juez Hiram Sánchez: "No existe la infraestructura de servicios judiciales con antelación al juicio para implantar la reforma". "Será otra injusticia contra los más humildes y necesitados". Estas citas hacen que los que estamos esta tarde aquí tomemos la determinación que yo he tomado en el aspecto de revisar la posición que yo asumí en el 1979. Sin embargo, a pesar de que en aquel entonces voté a favor, como ya señalé, hoy he revisado mi posición sobre este asunto. Lo hago consciente de mi gran responsabilidad que recae sobre mi persona por haber votado a favor en el pasado. En el momento en que se aprobó la misma, la cual nunca llegó ante la consideración del pueblo por haber sido detenida por los tribunales.

Después de esa época, la Asamblea Legislativa ha aprobado un conjunto de medidas enmendando las reglas de procedimiento criminal que rigen el proceso para fijar una fianza a cualquier persona imputada de delito. Veamos algunos ejemplos: 1974, la Legislatura aprobó legislación para establecer criterios para que el juez deba tomar en cuenta al fijar la cuantía de la fianza; 1979, revisión de la fianza, únicamente ante la Sala del Tribunal Superior correspondiente del Distrito Judicial con competencia para conocer la causa; 1984, enmienda la Ley para evitar la prestación

de fianza en ausencia del acusado o imputado de delito que no haya sido arrestado o comparecido a la jurisdicción del Tribunal; 1986, se enmienda la Ley para añadir cuándo se requerirá fianza o las condiciones, los criterios para la fijación de éstos y la revisión de las cuantías o las condiciones y hay una serie de condiciones que están establecidas en las reglas de procedimientos criminal, especialmente en las Regla 218. Estas enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal establecen unas limitaciones de facto y de derecho, al derecho de quedar en libertad bajo fianza. El Estado no ha asignado los recursos necesarios a la Rama Judicial para poner en condiciones a los tribunales, para poner en vigor las disposiciones de la Regla 218 de Procedimiento Criminal. Luego del análisis correspondiente, se puede llegar a las siguientes conclusiones: esta medida...

SR. PRESIDENTE: Termine el pensamiento porque consumió el turno.

SR. TIRADO DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente. Esta medida es innecesaria porque existen los mecanismos en el ordenamiento legal. Segundo, el derecho constitucional a la fianza ha cumplido con su fin, con la meta. Más del noventa y seis (96) por ciento de los casos de imputados de delitos y que están bajo fianza regresan el día del juicio al tribunal. En el 1987, se realizó

un estudio por la doctora Nevárez y concluyó que eran mínimos los delitos que se cometían por un imputado de delito en libertad bajo fianza.

Así es que, señor Presidente, finalizo mis palabras señalando que estas palabras de estos señores ciudadanos, nos convencer a nosotros de que debemos votarle en contra a esta medida. Tenemos otras consideraciones, pero se nos finalizó el tiempo, así es que le agradecemos al señor Presidente los minutos adicionales. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE: Senador Víctor Marrero.

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente, distinguidos senadores, antes de iniciar mi turno quisiera usar dos palabras para los efectos de récord que, pues, entendí que no las hice de la mejor manera para el distinguido y apreciado senador Rubén Berríos a quien yo le guardo afecto, no de ahora porque estoy en el Senado, sino de siempre, y que muchos de sus compañeros del partido son mis íntimos amigos de toda una vida, y a Rubén le pido excusas nuevamente.

El que habla aquí ahora no es abogado y me gustaría que el Presidente de la Comisión de Gobierno, el distinguido senador Kenneth McClintock me aclarara ¿cuáles son los delitos graves serios?, para yo insumarme y así poder consumir mi turno lo más preparado posible.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, señor

Presidente. Señor Presidente, aceptamos la pregunta, el Proyecto de la Cámara 1302, es el Proyecto que se ha radicado en el Cuerpo Hermano como ante-proyecto de Ley Habilitadora. Este Proyecto, una vez aprobado por la Cámara con las enmiendas que ellos le hagan pasaría al Senado. El texto de radicación de ese Proyecto de Ley Habilitadora define como delito grave serio lo siguiente: asesinato y robo en todas sus modalidades, escalamiento agravado, violación, sodomía y actos lascivos o impúdicos cuando la víctima sea menor de catorce (14) años y se den ciertas otras condiciones que están incluidas en el Proyecto, incesto, incendio agravado, secuestro agravado y restricción agravada, sabotaje a servicios públicos esenciales, infracciones al Artículo 5, 8 y 8(a) de la Ley de Armas, violaciones a la Ley de Explosivos que constituye delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por la Ley de Explosivos, estragos, fuga, infracción a los Artículos 401, 405 y 408 de la Ley de Sustancias Controladas, mutilación, violación a la Ley de Crimen Organizado y robo de menores. Esta lista podría variar en el proceso legislativo en la Cámara, como también en el Senado, pero da una idea

bastante clara de cuáles son los delitos graves serios que tenemos la intención de que se definan como tales como parte de este proceso constitucional. Y habiéndose cumplido con el requisito de convicción previa por delito grave y de imputarse uno de estos delitos o delitos similares como delitos graves serios, es que se daría margen a una vista de detención preventiva.

SR. MARRERO PADILLA: Gracias senador. Y decía Sergio Peña Clos en su turno, el distinguido Senador, que la Constitución se efectuó y se constituyó en el 1952 y que no es la Biblia lo que se está enmendando que es la Constitución; que en aquellos tiempos se usaba la manopla y decía Peña Clos, y el que hacía el cuchillo lo fabricaba en la casa, pero ahora son fusiles con silenciador y cosas extraordinarias.

El doctor Rosselló en la gama de cosas que plantea al país, le plantea desde evitar que los niños dejen la escuela en sus grados primarios y luego sigue con una gama de proyectos que se encauzan, se encaminan, donde dejar libre unos sectores de la delincuencia y todos los proyectos del doctor Rosselló, pues, son criticados en este país.

SR. PRESIDENTE: Queda un minuto, compañero.

SR. MARRERO PADILLA: Lo que pasa es que en la contestación Kenneth me quitó el tiempo, pero si me deja...

SR. PRESIDENTE: Lo que

pasa es que el tiempo que se consume...

SR. MARRERO PADILLA: Muy bien, muy bien, distinguido Presidente, habré de acatar su decisión.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. MARRERO PADILLA: Pues, lo que yo le digo es, señor Presidente, que la Constitución hay que enmendarla en su tiempo, en su día y que de el '52 acá han caído muchas moléculas de agua en el país, y que los bandidos grandes en Puerto Rico están sueltos por todo el país y que nos ocupa a nosotros legislar inteligentemente, y por eso esta es una medida más que está en el programa de gobierno de mi partido, y que la avalaré, habré de votar positivamente, contundentemente, para que esto ayude en la medida que pueda acabar un poco con la criminalidad del país.

SR. PRESIDENTE: Compañero Rubén Berríos.

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente y compañeros del Senado: Si tuviera que resumir en una frase la razón que tengo para oponerme a este Proyecto sería la siguiente: el Proyecto nos pone en peligro a todos sin resolverle problema alguno a nadie.

No hay la menor duda de que en Puerto Rico existe un problema de crimen, que preocupa a todos los ciudadanos responsables y que todos estamos interesados en que se aminore, por los menos, ese problema, si no podemos resolverlo del todo. De otro lado, tampoco hay la

menor duda de que existen unos derechos individuales, derechos humanos garantizados por la Constitución. Desgraciadamente en esto de los derechos individuales y humanos, no existe tanta conciencia de su importancia, como existe en el caso del crimen. Es natural, el crimen nos afecta a todos, la violación de los derechos individuales tendemos a sentirlo solamente cuando nos afecta individualmente o a algún miembro de la familia. Solamente algunos espíritus muy preclaros pueden sentirse ofendidos en su propia persona cuando se afecta el derecho de alguien que no es de su círculo más íntimo. Así es la naturaleza humana. Obviamente, se supone que establezcamos algún balance entre estos dos asuntos tan fundamentales en nuestra sociedad, el interés de la sociedad para mitigar el crimen o evitarlo o aminorarlo y el interés que debe tener la sociedad en proteger los derechos humanos.

Lo que sucede, en este caso, es que no existe relación alguna entre el problema del crimen y el intento de limitar el derecho constitucional a la fianza. O sea, que el problema que en teoría podría estar planteado, no está planteado. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, primero y antes que nada, porque el problema grande en Puerto Rico no son los criminales que se cogen, sino los que no se cogen, la inmensa mayoría de los crímenes en Puerto Rico pasan sin que pueda

responsabilizarse a nadie por ello. O sea, que ese es el problema esencial, más del noventa (90) por ciento según algunos estudios; y lo que está mal es el sistema de justicia criminal entonces, el sistema de investigación policíaco y el de los tribunales en mucho sentido.

Segundo, los estudios claramente reflejan, que aquellas personas que en fianza cometen un crimen, no son estadísticamente relevantes. Es decir, que esa situación se pudo haber debido a otras circunstancias y no al hecho de que estaban en fianza.

Tercero, los datos demuestran convincentemente, que existen mecanismos en ley lo suficientemente poderosos, si tuvieran los recursos disponibles para su utilización, para evitar cualquier asomo de comisión de crimen por personas que están bajo fianza. O sea, que si fuera correcto el argumento de que las personas que están bajo fianza cometen crímenes y que negándole la fianza vamos a evitar esos crímenes, existen mecanismos en ley hoy en día, en el Código de Procedimiento Criminal, para evitar ese tipo de crimen. Más aún, si los juicios en Puerto Rico se llevaran a cabo con la velocidad que se debieran llevar a cabo, garantizando el derecho constitucional, garantizado constitucionalmente, también podrían evitarse esos supuestos crímenes que cometen las personas que están bajo fianza.

Y cuarto y último, si no bastara con todos estos argumentos para demostrar que no hay relación alguna entre el crimen y la negación del derecho a la fianza o la otorgación de la fianza a personas sin restricción de índole alguna, lo único que tenemos que hacer es mirar al precedente de los Estados Unidos. En Estados Unidos no existe el derecho absoluto a la fianza y todos los días suben los crímenes. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Si allá existe un régimen jurídico similar al que queremos establecer en Puerto Rico y eso no ayuda a evitar el crimen en Estados Unidos, ¿por qué lo va a ayudar a evitar en Puerto Rico? O sea, que no hay relación alguna, ni en lógica ni en práctica ni en estadística, que demuestre que existe relación entre negarle el derecho a la fianza, absoluto, como existe hoy en día, a los individuos y mitigar el crimen.

No obstante, aunque no existe relación alguna, lo que si es fácil de ver es, los peligros que representa para la sociedad puertorriqueña el limitar este derecho constitucional. Vamos a ver algunos: El primero y más grande todos es el siguiente: en el momento en que usted le enseña a una sociedad, de forma directa o indirecta, que los derechos constitucionales pueden trastocarse debido a las circunstancias momentáneas, en ese momento usted pone en peligro otros derechos constitucionales.

Hoy se limita el derecho a la fianza para, supuestamente, evitar

el crimen, aun sabiendo que no hay relación entre el crimen y el derecho a la fianza. Mañana puede trastocarse el derecho a la libertad de asociación de los individuos o el derecho a la libertad de expresión o cualquier otro derecho. Abrir esa puerta es peligrosísimo y no debemos abrir esa puerta salvo en circunstancias extremas en donde las estadísticas y la lógica claramente indiquen que para resolver un problema social es necesario enfrentarse a la enmienda constitucional o mejor dicho, a enmendar un precepto constitucional.

Segundo, le pregunto yo a ustedes, mis queridos compañeros y compañeras Senadoras, ¿qué va a pasar en nuestras cárceles ya atestadas, cuando se atesten más aún? Eso sin duda alguna y según todos los estudios llevaría al probable problema de las fugas, del incremento en las fugas de las cárceles, no el incremento en las fugas de las personas que son inocentes y que están esperando juicio o que pueden ser inocentes y están esperando juicio, no, no, del escape de personas que han sido convictas por crímenes y que constituyen para la sociedad un peligro.

Otro problema extraordinariamente grande que podría crearse, que se creará de aprobarse este Proyecto y la consecuente enmienda constitucional si el pueblo así lo decide en un referéndum, es el problema de las personas inocentes que van a

tener que ser ingresados en las cárceles. ¿Por qué no pensamos en los derechos de esas personas inocentes que van a ser ingresadas en las cárceles? Todos conocemos los ambientes carcelarios en el país. Y todos conocemos los peligros a que van a estar sujetas esas personas en su integridad física y moral. Todos esos son peligros reales, por eso yo dije al principio, que nos pone en peligro a todos, sin resolverle el problema a nadie, porque no está dirigido a resolver el problema de la criminalidad.

Todo esto me lleva a mí a pensar, que este Proyecto se va a aprobar por una de dos razones, primero, o porque hay un desconocimiento total de toda esta problemática que yo acabo de explicar, o segundo, porque es un Proyecto para cubrir las apariencias, para dar la impresión de que uno está haciendo algo cuando en verdad no está haciendo nada.

En esto hay que levantar la voz, no solamente contra el intento del liderato del Partido Nuevo Progresista, sino contra la irresponsabilidad del liderato del Partido Popular, porque si en la Cámara de Representantes no tuviera el PNP el concurso del liderato Popular allá, no habría problema con este asunto, porque no existirían los votos para someterlos al pueblo.

Hoy en día tenemos que llamar a capítulo a ambos lideratos y no se excuse el liderato del Partido Popular, porque aquí los

Senadores vayan a votar a favor o mejor dicho, en contra, perdón, del Proyecto, porque allá en la Cámara sí, van a votar a favor.

Así es que yo invito a mis compañeros del PNP, y a mis compañeros del Partido Popular, primero a que no aprueben este Proyecto y segundo a enfrentarse de forma seria al problema del crimen y no en forma de cubrir las apariencias. Muchas gracias.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Rafael Rodríguez González, Presidente Accidental.

- - - -

PRES. ACC. (SR. RODRIGUEZ GONZALEZ): Senador Hernández Agosto.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, compañeros del Senado: Quisiera en primer lugar, señalar, que una de las cosas que debemos hacer al discutir esta medida, es despolitizar todo este tema de eliminar el derecho a la fianza.

Yo no tengo dudas de que hay compañeros en mi partido y de que hay compañeros en el partido de Mayoría que honestamente creen, que enmendar la Constitución es un paso bien dado; como los hay también en mi partido y en el partido de Mayoría que creen que no se debe enmendar la Constitución, y que algunos de ellos se han expresado aquí, algunos abiertamente,

diciendo que tienen reservas, y otros defendiendo calurosamente la enmienda, porque sienten una compulsión de cumplir con un imperativo de partido para que se apruebe esta enmienda constitucional en la Asamblea Legislativa.

Yo creo que esto debemos de verlo más allá de las líneas partidistas. No hay un partido que tenga la solución para la criminalidad y creo que es uno de los grandes errores que cometemos en política, especialmente en las campañas electorales, llevándole al pueblo unas propuestas y le dejamos la sensación de que con ésas, una vez se implanten, se va a resolver el problema de la criminalidad. No estamos frente a un problema fácil, es complejo y se requiere la colaboración de todo el pueblo de Puerto Rico para poder bregar con el mismo.

Es cierto que la Constitución no puede ser una camisa de fuerza, pero tampoco puede ser un volantín que se eleva y se baja a gusto del viento. Aquí hay una Carta de Derechos, que es una Carta de Derechos buena en el 1952 y en el 2052 y en el 3052, el derecho a la vida y el derecho a la libertad.

Hoy se propone enmendar el derecho a la fianza, que está en la Carta de Derechos. Mañana se puede proponer que se enmiende la Sección 10, que no se violará el derecho del pueblo a la protección de su persona, casa, papeles y efectos contra registros, incautaciones y

allanamientos irrazonables. Y mañana se dirá, como el crimen sigue siendo un problema serio, vamos a enmendar esa disposición de la Carta de Derechos, para que se puedan allanar las residencias de los puertorriqueños, sin que medie previamente una orden judicial o podemos mañana enmendarla o proponer que se enmiende para eliminar la separación de Iglesia y Estado, porque creemos que es importante que el pueblo de Puerto Rico asista a la Iglesia. Y, por lo tanto, el Estado asume una posición, estoy hablando de posibilidades. Estoy seguro que cualquiera podría pensar honestamente que una enmienda de esa naturaleza puede ayudar en algo. No se puede ver livianamente esta cosa de enmendar el derecho a la fianza.

Yo de buena fe creí en el pasado, que eliminar ese derecho era bueno y voté aquí en este Senado en favor de una enmienda constitucional en ese sentido. Yo me siento hoy orgulloso, de dejar aquí en récord y con mi voto, y de decirlo públicamente al pueblo de Puerto Rico, yo me honro en rectificar mi voto de hace unos años, porque después de haber votado de esa manera, he tenido la oportunidad de conocer información que no estuvo a mi disposición entonces. Después de haber votado así, se aprobó la Regla 218, de las de Procedimiento Criminal, que le permite a un juez imponerle condiciones a un imputado en el momento en que le fija fianza y

de esa manera proteger a la sociedad, impidiéndole que salga de su casa a determinadas horas, requiriéndole que trabaje, requiriéndole que no esté cerca del sitio donde esté su victimario, su víctima. Todas estas cosas, nunca, ninguna de estas condiciones se ha impuesto.

Hay un sistema de información, ahora mismo si se aprobara esta enmienda y estuviese una persona frente a un juez para imponerle fianza, difícilmente sabríamos cuál es su récord criminal porque el sistema de información criminal está incompleto. Y entonces diríamos, bueno, pero no hay salida. Sí, hay salida, hay alternativas, vamos a asignar los recursos para que el sistema de información criminal se ponga al día. Vamos a legislar para que el juez venga obligado a imponerle condiciones en el momento en que le fija fianza a un imputado. Con esas alternativas podemos ver cómo progresa la situación y si mañana encontramos con un buen sistema de información, que aquellos imputados de delito bajo fianza constituyen realmente un problema, entonces, con los datos en la mano, todos podríamos votar con tranquilidad de conciencia. Si yo encontrase que eso constituye un problema, yo no tendría reparo alguno mañana de revisar mi posición y decir, ahora tengo los datos a la mano que me permiten a mí saber, por qué estoy votando.

Aquí estoy votando a base de que creemos que puede ayudar,

los mismos compañeros que lo favorecen lo están diciendo, tal vez no sea mucho un poquito, cubriéndose. Yo preguntaría, si esta es una medida efectiva contra el crimen, ¿hay algún compañero de Mayoría que va a votar a favor de esta medida, que pueda decirnos, aquí para récord, cómo se va a reducir la criminalidad con la enmienda constitucional eliminando el derecho absoluto a la fianza? No hay ninguno que responsablemente pueda predecir, hacer una proyección de cómo se va a reducir la criminalidad, porque no lo puede hacer, no lo hay. Pero a mí me parece que es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa que hay cuatro (4) estudios distintos, cuatro (4) estudios, en tiempos distintos y todos coinciden en que no se encuentra evidencia alguna que sostenga que hay una relación entre la fianza y la comisión de delitos. O sea, no hay una relación, no hay una justificación estadística e histórica que nos permita a nosotros decir, aquí está el dato concreto que nos obliga a nosotros como personas responsables a decirle al pueblo de Puerto Rico, ahora proponemos que se enmiende la Constitución para reducir la criminalidad en esta forma, porque las personas bajo fianza están cometiendo delitos con esta frecuencia.

Cuando se ejerce liderato, uno tiene dos (2) opciones, una es, el que se llama líder, porque averigua lo que quiere el pueblo

y sigue lo que quiere el pueblo. Y otro es, el líder que a veces, sabiendo que el pueblo podría ir por un lado le dice al pueblo, por ahí no, te adelanto, que hay problemas en seguir por donde tú quieres.

El pueblo de Puerto Rico está desesperado con la criminalidad, el pueblo de Puerto Rico vive en zozobra con el problema de la criminalidad. No tengo duda que al pueblo de Puerto Rico se le propone esto y se le citan estadísticas como el compañero Vélez Barlucea ha hecho aquí, interpretando estadísticas incorrectamente, dando la sensación de que todos los crímenes que se han cometido han sido cometidos por personas que cometieron crímenes antes. Y le dan esas estadísticas, y que se cometieron bajo fianza, le dan esas estadísticas interpretadas erróneamente y, ciertamente, el pueblo va a votar por esta enmienda.

Ahora, el liderato también hay que ejercerlo cuando el camino no está claro, cuando hay unos nubarrones y hay que mirar por encima y a través de esos nubarrones, ahí es cuando el líder es líder y le dice a un pueblo, por aquí es el camino y no es por allí. Y en este caso, ante la desesperación del pueblo de Puerto Rico, yo no tengo duda de que aprobaría cualquier medida que de buena fe el pueblo crea que va a ayudar a combatir el problema de la criminalidad, y aquí es que hay que ejercer el liderato para decirle al pueblo de

Puerto Rico, por ahí no, no te cortes el derecho a la fianza, porque la Carta de Derechos es una garantía que nos hemos dado contra desmanes del gobierno, es la garantía individual que cada uno de nosotros tiene, es la garantía para las Minorías, porque a base de las Mayorías, las Mayorías podrían legislar caprichosamente en un momento dado, la Carta de Derechos es el freno contra los caprichos de las Mayorías, contra los errores de la Mayoría, aun cometidos de buena fe. Esa Carta de Derechos debemos protegerla y preservarla y debemos tocarla para ampliarla, no para limitarla. Y cuando tengamos que tocarla para limitarla, vamos a asegurarnos que tenemos la información, que tenemos los datos, que tenemos la evidencia que justifica esa limitación, para que nuestras conciencias estén tranquilas.

Yo le digo a los compañeros del Senado,...

SR. PRESIDENTE: Un minuto y medio, compañero.

SR. HERNANDEZ AGOSTO: ¿Cómo no?, señor Presidente. Yo sería incapaz, incapaz de reprochar a los compañeros porque voten a favor, yo creo que de buena fe hay personas que creen que esta enmienda constitucional va a ayudar. Pero yo quiero decirle al pueblo de Puerto Rico, no nos dejemos ir por la histeria, estamos atacando el problema por donde no se resuelve. Yo les pregunto, ¿cuánto esfuerzo estamos poniendo en atender el

problema de la delincuencia juvenil? ¿Cuánto estamos haciendo para bregar con la delincuencia juvenil? ¿Cuánto estamos haciendo para bregar con la deserción escolar? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para que los medios de comunicación masiva colaboren con el gobierno y con la comunidad puertorriqueña en un esfuerzo conjunto para evitar los programas violentos de televisión que sirven de escuela a nuestros niños, que pasan más horas frente a la televisión que estudiando. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos para que los juicios sean más rápidos, para aumentar las áreas de recreación y de deportes, para mejorar la escuela, para crear más empleos, para tener más teatros, para tener más oportunidades de vida sana y abundante?

Yo llamo a los compañeros de Mayoría, vamos a hacer un acto solidario, no partidista, para encontrar soluciones efectivas contra el crimen. Y yo estoy seguro, que si así lo hacemos, vamos a encontrar muchas más medidas efectivas de verdad que éstas que son de apariencia, que cortan derechos, sin resolver problemas. El crimen no es un asunto de política-partidista, el crimen y bregar contra el crimen es una responsabilidad de todos los puertorriqueños.

Ocupa la Presidencia, el señor Roberto Rexach Benítez.

SR. NOGUERAS, HIJO:
Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE:
Compañero Nicolás Nogueras.

SR. NOGUERAS, HIJO:
Señor Presidente y compañeros del Cuerpo, en este turno vamos a intentar hacer un récord constitucional desde nuestro punto de vista y, a la vez, entrar en consideraciones de orden social que justifican lo que estamos haciendo en el día de hoy, la acción que estamos tomando aquéllos que creemos en esta enmienda a la Constitución.

Pero tengo que pararme brevemente a reflexionar sobre algunos de los pensamientos de los compañeros. El compañero Rubén Berríos nos indica en su cuidadosa exposición, que el problema en la sociedad son los criminales que no se cogen. O sea, los criminales que se cogen no son el problema para el compañero Rubén Berríos, son los que no se cogen. Y esto siempre me recuerda el Policía de tránsito, que detiene a un chofer en exceso de velocidad y el chofer reclama lo que el compañero reclama en su exposición y le dice: "Pero y aquellos otros diez (10) que estaban corriendo a exceso de velocidad, ¿por qué no los arrestó?" Y la contestación fue obvia, del Policía, "Porque al que pude coger fue a usted".

En una sociedad, no siempre se puede lograr arrestar a todo el

que delinque o probarle el caso a todo el que delinque, pero, ¿qué va a hacer la sociedad? ¿No proveer para mejorar su sistema de arresto, su sistema de persecución de criminales, para prevenir actos delictivos, sencillamente, porque no se coge a gran parte de los que cometen crimen? Yo creo que el compañero no tenía la intención de llegar tan lejos como para establecer que ese era un argumento en contra de esta medida. Entonces de una manera muy hábil nos dicen, ¿Y que vamos a hacer con el hacionamiento y la fuga? Sí se van a fugar los criminales que son peligrosos, porque no van a poder estar juntos y se van a fugar. O sea, vamos a ver como podemos bregar con ese argumento, por un lado, no arrestemos más gente porque se llenan las cárceles y además se nos pueden fugar los presos. Por consiguiente, los que cometen delitos, debemos buscar la manera de que no paguen por sus pecados porque no estamos preparados para ello en las cárceles de Puerto Rico, y va y se nos escapan y son peligrosos para la sociedad. No puede ser "un sequitur" y a esa línea de argumentación tampoco le podemos prestar mayor relevancia en nuestro análisis.

El compañero Eudaldo Báez Galib, citó un viejo caso de *Barrabás versus Cristo*, al Tomo I de *Roma en decadencia*. O como decía un amigo mío, "In Re Pilatus". Eso tampoco resuelve el problema. Eso es la superfi-

cialidad de la argumentación frente a los concretos hechos que nos llevan a actuar en una sociedad agobiada por la criminalidad.

Y por último, el distinguido compañero Miguel Hernández Agosto, con su teoría de que en el Partido Popular hay para todos, hay independentistas, hay estadistas, hay colonialistas, hay estadolibristas, hay para todos. Y dice: "Vamos a despolitizar este proceso de debate porque en el Partido Popular hay tantos que creen que sí, como tantos que creen que no, como tantos que creen quizás y como tantos que no creen. Y el resultado entonces, es el estancamiento de la acción social por un gobierno si siguiéramos esa línea de razonamiento. Todos los argumentos son buenos para el compañero Miguel Hernández Agosto, todos son buenos. Pero se ubica en el de esta categoría de ciudadano, y debemos estar claros. ¿Qué categoría de ciudadanos rechaza perseguir el pensamiento liberal de algunos de los compañeros del partido Popular? El del ciudadano previamente convicto por delitos graves, que se le imputa la comisión de uno de los delitos graves serios y que además es una amenaza para la comunidad. Yo quisiera que en el debate nos detuviéramos en este extremo. ¿Cuántos de ustedes, ciudadanos puertorriqueños, cuantos de ustedes compañeros de Cuerpo, están dispuestos a proteger al que ha sido previamente convicto por delito

grave y además, se le imputa la comisión de uno o más delitos graves serios y además, es una amenaza para la comunidad? ¿Cuántos están dispuestos a levantar su voz en este Hemiciclo a proteger a este tipo de persona en nuestra sociedad? ¿Ustedes? Yo levanto mi voz en este Hemiciclo contra el que ya fue convicto por delito grave y se le imputa la comisión de uno o más delitos graves serios y además, es una amenaza para la comunidad. ¿Ustedes lo dejarían libre? Yo protegería a la sociedad de esa persona. Y la pregunta es, ¿cuántos niños, cuántas jóvenes, cuántas mujeres deben morir o deben ser violados para que sean considerados estadística válida para ustedes? ¿O es que el récord de legislar en esta sociedad tiene que estar manchado con la sangre de los que son víctimas de los criminales para que sean estadísticas que se puedan citar en apoyo de una acción legislativa y constitucional en este país? Precisamente, todo lo contrario. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que si se fundamenta la acción en la protección de la sociedad contra peligros futuros de personas como éstas, la reglamentación es permisible y es constitucional; no viola el debido procedimiento de ley sustantivo, no viola el debido procedimiento de ley procesal, no viola la octava enmienda sobre fianza excesiva, y la detención previa a un juicio, tampoco viola el principio de la

protección de las presunción de inocencia. Esa es la jurisprudencia americana, la que aplica en Puerto Rico, aunque algunos compañeros no quisieran que aplicara. Así es como ha sido interpretada, no de otra forma.

Este documento no es de su faz inconstitucional, y es la jurisprudencia también americana. Eso es el estado de derecho actual. Nosotros no estamos privando a los pobres de nada, porque esto no es un debate sobre los pobres en este país, las veces que hemos debatido sobre los pobres, he visto a los compañeros todavía en el lado de allá, algunos de ellos, frente a nosotros en el lado de acá. No se trata de un debate entre pobres y ricos, no se trata de un debate entre el que tiene para pagar honorarios y el que no tiene. De lo que se trata es, que el pobre que ha sido previamente convicto por delito grave, que se le imputa una comisión de uno o más delitos graves serios y además, representa una amenaza para la comunidad, es como el rico que ha cometido un delito grave, se le imputa la comisión de uno o más delitos graves serios y representa una amenaza para la comunidad. Ambos tienen la igualdad de derechos a ser tratados por la sociedad como un peligro presente y futuro. Y nosotros no estamos castigando con esta disposición constitucional a nadie, esta no es un disposición para castigar, es una disposición para prevenir, para proteger a la comunidad y a la sociedad de la

comisión de actos delictivos en las circunstancias que se establecen aquí, que ofenderían nuevamente nuestra capacidad para crear prevención en la sociedad contra los males que nos agobian. En algún momento a lo largo de la historia de este parlamento y de la historia de nuestro pueblo, tenemos que aprender a legislar sin tener que legislar sobre los cadáveres de las víctimas para usarlas como estadísticas. Tenemos que prevenir el crimen. Tenemos que prevenir el comportamiento social y humano para poder llegar entonces, a proteger adecuadamente a nuestra sociedad; y de eso es lo que se trata.

En este momento, yo invito a los compañeros a que lean con detenimiento esta medida, porque me pareció por un momento que estaban argumentando otra pieza de enmienda a la constitución. Hasta en el argumento en el análisis retórico dice el dilecto compañero don Miguel Hernández Agosto, que por qué no cambiamos otras disposiciones de protección en la sociedad, como en el caso de los allanamientos irrazonables. Pero si es que aquí hubo momentos en la historia de este país, que el Partido Popular en la Gobernación no tuvo que enmendar la Constitución para hacer allanamientos. ¿Qué enmienda se hizo a la Constitución de Puerto Rico cuando se allanaron los hogares de los independentistas por el único

fundamento de haber sido independentistas, en una lista que tenían lo alcaldes populares y el gobernador popular de turno? ¿Qué enmienda a la Constitución hizo el Partido Popular cuando abusó de los derechos procesales y civiles de este país con la ley de la mordaza? ¿Qué enmienda a la Constitución hizo cuando tiró las tropas de las Guardia Nacional contra los trabajadores? ¿Qué enmienda a la Constitución hizo el Partido Popular cuando se incautó de los muelles de Puerto Rico y un propio legislador popular tuvo que renunciar para ellos terminar y evitar un huelga en los muelles? El Partido Popular tenía la técnica de actuar en contra de la Constitución porque no necesitaba enmendarla, porque tenía el poder. Nosotros vamos al pueblo a buscar el poder, nosotros vamos al pueblo a resolver los problemas y contrario a los malos hábitos del pasado, nosotros no legislamos sobre cadáveres de los puertorriqueños, nosotros vamos tras evitar que más madres, más padres, más hogares, más niños, más mujeres, más jóvenes sean víctimas, para entonces venir aquí a citar estadísticas que siempre pueden ser manipuladas para legislar. A mí me parece que ya es hora de hablar claro, y es hora de colocar en su perspectiva de qué se trata la acción que vamos a tomar. Por un lado, no pretendemos remediar todos los males de esta sociedad, pero ciertamente, que

pretendemos hacer algo para contribuir a aminorar los males de esta sociedad. Por el otro, lo hacemos en deferencia al pueblo, a través del mecanismo constitucional de proponer una enmienda para después ir a defender ante el pueblo, para buscar el voto y el apoyo del pueblo y no lo hacemos de espaldas al pueblo. Y en tercer lugar, si nos preguntan a nosotros si estamos a favor de aquellos que habiendo sido previamente convicto por delitos graves, y que se le haya imputado la comisión de uno o más delitos graves serios, y son amenaza para la comunidad, si estamos a favor o en contra de que se le restrinja el derecho a la fianza a personas que cumplan con esos tres requisitos para proteger a la comunidad; seguro que estamos a favor de la protección de la comunidad. Y los compañeros saben que si bien hay derechos individuales y libertades individuales, hay que confrontarlos también con los derechos sociales, con los derechos de la comunidad y en ese balance la jurisprudencia ha sido totalmente clara para favorecer la sociedad frente a alguien que invoca un derecho aislado, con excepción posible del derecho individual que se ha considerado de mayor fundamento dentro de los esquemas jurídicos, que es el derecho a la libre expresión.

Yo concluyo indicando que yo reconozco que en toda medida su implantación va a ser esencial. La Ley Habilitadora se encargará de hacer sentido

procesal a lo que hoy se consagra o habrá de consagrarse y, eventualmente, convertirse en parte de nuestro esquema constitucional, como una fase de legislación sustantiva. Para aquellos que busquen el bienestar de nuestro pueblo, que no esperen a que Puerto Rico caiga en la peor de las crisis, para entonces comenzar a considerar si tratamos de evitar los males que agobian a esta sociedad, entre ellos la criminalidad. Por eso, este turno, es a favor de la medida, pero con gran respeto a los compañeros que todavía creen que es más importante seguir protegiendo a las personas que caen en estas tres categorías, que a la comunidad puertorriqueña en general.

SR. PRESIDENTE: Terminado el debate en relación con la enmienda constitucional sobre el derecho a la fianza. Compañero Kenneth McClintock.

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, sometemos para la aprobación del Cuerpo, la Resolución Concurrente de la Cámara Número 32 sin enmiendas.

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la Resolución Concurrente de la Cámara 32, sobre el derecho a la fianza.

- - - -

El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, recibiendo la medida 16 votos a favor, por 8 votos en contra.

- - - -

SR. PRESIDENTE: Se aprueba la medida en Votación a viva voz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, el Senado ha concluido la consideración de las medidas, vamos a solicitar en estos momentos, que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: el Proyecto del Senado 519, el Proyecto o más bien Resolución Concurrente de la Cámara 32, Concurrencia a las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 179 y 560, y Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 678. Vamos a solicitar que el pase de lista final coincida con la Votación Final.

SR. PRESIDENTE: Compañero Marco Rigau.

SR. RIGAU: Señor Presidente, que no tenemos copia de las medidas que el compañero Rodríguez mencionó, aparte de las dos que están en el Calendario de hoy.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Si no están sobre su escritorio,

pues, definitivamente que se le haga llegar, pero en el momento en que se discutió la concurrencia y se aprobó la moción, la única persona que estaba presente en ese caso era el senador Báez Galib, a quien le enseñamos las medidas sobre las cuales procedimos a aprobar la concurrencia.

SR. PRESIDENTE: Bien, si está el texto de la concurrencia, que se le muestre al distinguido compañero Rigau.

Compañero Fas Alzamora. Perdón, compañero Sergio Peña.

SR. PEÑA CLOS: Clos, porque madre también tuve, señor Presidente. Espero que sea la última vez que tenga que hacer ese recordatorio.

Señor Presidente, a tono con la Sección 38.2 del Reglamento del Senado, que se cite a los compañeros que estén aquí en este Capitolio, que vamos a proceder con una votación, para que después no se invoquen retretrismos convenientes.

SR. PRESIDENTE: Es una cuestión de votación compañero, no es una cuestión quórum planteada, además, obviamente, hay quórum en el Senado.

SR. PEÑA CLOS: Por eso, lo que queremos decir es que se llamen a los Senadores que están...

SR. PRESIDENTE: Sí, no, se van a llamar compañero, tenga usted la seguridad de que los Senadores que no están en este momento en el Hemiciclo, llegaron al Hemiciclo a votar, porque están en los alrededores.

SR. PEÑA CLOS: Muy bien,

señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Bien a la moción del Calendario de Votación Final, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba. Adelante compañero, señor Secretario.

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 519

"Para enmendar los Artículos 1.003, 5.011, 5.022, 5.039 y 6.001 de la Ley Número 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, denominada "Ley Electoral de Puerto Rico" a los fines de disponer que en las elecciones generales la candidatura para los cargos de Legisladores se incluirán en una papeleta separada de cualesquiera otras candidaturas de funcionarios cuya elección a esa fecha se disponga por ley."

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 179

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 560

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara a la R. C. del S. 678

R. Conc. de C. 32

"Para proponer una enmienda a la Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; para disponer que la enmienda propuesta sea sometida para su aprobación o rechazo a los sectores capacitados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en Referéndum Especial y para disponer su vigencia."

VOTACION

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 179 y la Resolución Conjunta del Senado 678, son consideradas en Votación Final, las que tienen efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo; Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Marco Antonio Rigau, Ramón Luis Rivera Cruz,

Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.

TOTAL.....2
9

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL.....0

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL.....0

- - - -

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 560, es considerado en Votación Final, la cual tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo, Mercedes Otero

de Ramos, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Ramón Luis Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.

TOTAL.....2
8

VOTOS NEGATIVOS

Senador:
Marco A. Rigau.

TOTAL.....
1

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL.....
0

El Proyecto del Senado 519, es considerado en Votación Final, el que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Norma L. Carranza De León, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás

Nogueras, Hijo, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Ramón Luis Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.

TOTAL.....2
1

VOTOS NEGATIVOS

TOTAL.....
0

VOTOS ABSTENIDOS

Senadores:
Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Mercedes Otero de Ramos, Marco A. Rigau y Cirilo Tirado Delgado.

TOTAL.....
8

La Resolución Concurrente de la Cámara 32, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Norma L. Carranza De León,

Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Nicolás Nogueras, Hijo, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Ramón Luis Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.

TOTAL.....2
1

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Mercedes Otero de Ramos, Marco A. Rigau y Cirilo Tirado Delgado.

TOTAL.....8

VOTOS ABSTENIDOS

TOTAL.....0

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas han sido aprobadas. En el caso de la Resolución Concurrente de la Cámara para enmendar la Constitución y

limitar el derecho a la fianza, la votación fue de 21 a 8, lo que quiere decir que obtuvo un (1) voto por encima de lo requerido que eran veinte (20). Aprobado el texto de la enmienda que se someterá al pueblo de Puerto Rico con más de las dos terceras partes.

SR. RODRIGUEZ COLON:
Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, habiendo el Senado de Puerto Rico cumplido con su responsabilidad patriótica de haber aprobado esta medida que permite que el pueblo decida con sus votos si procede la enmienda o no, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta el próximo jueves, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.).

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Le pregunto al distinguido compañero Portavoz, ¿cuándo se va a considerar en el Senado el Proyecto de Presupuesto, que fue aprobado ayer por la Cámara?

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, al momento en que les hablo, no tengo información de que haya llegado aún al Senado de Puerto Rico. No obstante, tan pronto llegue el Proyecto al Senado de Puerto Rico, el mismo será tramitado conforme a los procedimientos que tenemos en el Senado, por lo que no puedo anticipar que en esta semana se pueda estar considerando, por lo que sería la

próxima semana, o el lunes o en una Sesión particular que haríamos exclusivamente para el Presupuesto de Puerto Rico.

SR. PRESIDENTE: Bien. El Senado recesa hasta el jueves de esta semana.

Nota:

Las Notas al Calce de la Resolución Concurrente de la Cámara Número 32 se incluyen como **Anejo A** de este Diario.

ANEJO A

NOTAS AL CALCE DEL INFORME DE LA R. CONC. DE LA C. 32

i.El Secretario de Justicia, Pedro J. Pierluisi, entiende que este proyecto de enmienda debe estar dirigido a proteger a nuestra comunidad, particularmente a los inocentes y a las víctimas del crimen.

El Secretario señaló que hoy en día todos los imputados, tienen derecho a permanecer en libertad bajo fianza mientras se dilucidan sus casos. No importa si se cuenta con evidencia clara y convincente de que el imputado es el líder de una organización criminal que se dedica al trasiego masivo de drogas ilegales y que no respeta la vida del prójimo. Tampoco hace diferencia que se haya detenido al imputado con un arma en sus manos en la escena de una masacre y que varias personas estén disponibles para relatar cómo asesinó a las víctimas. En nuestro sistema estos dos imputados no pueden ser detenidos por las autoridades si prestan la fianza y cumplen con las demás condiciones que el tribunal les imponga. El Secretario considera que este sistema no hace sentido en Puerto Rico por lo que debe ser modificado según indica basado en los tres principios básicos de la Constitución del E.L.A. Sección 11 Artículo II.

El Secretario considera que la redacción del texto propuesto en la resolución no cumple con el debido proceso de ley requerido por la Constitución de los Estados Unidos, así como la de Puerto Rico porque priva del derecho a la fianza a toda una clase de personas sin la debida justificación ya que el hecho de que una persona haya cumplido el término en prisión por cualquier delito grave no necesariamente justifica que se le prive de la libertad al imputársele otro delito grave.

En la forma en que está redactado él entiende, que es una forma de castigo automático ya que no le da al juez la discreción de determinar si es razonable.

Nos indica que la sección 7 del Artículo II de la Constitución del E.L.A. de P.R. al igual que las enmiendas V y XIV de la Constitución de los E.U., garantizan el debido proceso de ley. Entiende además, que tres criterios que deben sopesarse al determinar cuál es el debido proceso para privarle a un individuo de algún derecho protegido son: (1) el determinar cuáles son los intereses individuales afectados por la acción oficial, (2) el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y (3) el interés gubernamental protegido con la acción sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos. Dentro de este esquema el rol del juez será la determinación de la procedencia de la detención preventiva del imputado a base de los criterios que se establezcan mediante ley. Para hacer esta determinación, de conformidad con el "Bail Reform Act", el juez toma en consideración los siguientes criterios: la naturaleza y circunstancias del delito imputado, incluyendo si es un delito de violencia, si está relacionado

con drogas narcóticas; y el peso de la evidencia contra la persona. Además, deberá tomar en consideración si al momento del arresto o la comisión del delito, la persona se encontraba en probatoria o libertad bajo palabra, u otra forma de libertad mientras se encuentra pendiente de juicio, sentencia, apelación o cumplimiento de sentencia por un delito bajo la ley federal, estatal o local, y la naturaleza y seriedad del peligro que representaría la liberación de la persona para cualquier persona o para la comunidad.

El Secretario hace referencia a la decisión en el caso United States v. Salerno en relación a la privación de libertad antes de una convicción y nos dice que a tenor con la opinión de este caso la enmienda propuesta al no hacer distinción en el tipo de delito que se le impute a la persona cual no se le concede el derecho a fianza, constituye una medida punitiva.

Dice además que debe recurrirse al criterio de protección de la seguridad social, a base de una determinación sobre la peligrosidad del imputado, es decir, su historial previo y la gravedad del delito imputado. La idea es tomar en cuenta al hacer la determinación la conducta de violencia física que pone en peligro la vida o integridad corporal de los ciudadanos, o de una persona en particular.

Añade, que pueden comparar ésto con el rigor en la determinación de reincidencia habitual. Es reincidente habitual el que ha sido convicto de cometer dos o más delitos graves y posteriormente incurre en cualquiera de los delitos graves enumerados en el estatuto, osea que no se trataría de la comisión en un tercer delito grave, sino de alguno de los que expresamente se designan por considerarse conducta delictiva de suma gravedad.

En cuanto a la redacción de la enmienda constitucional propuesta, él no contempla que ésta se tome en consideración el lapso de tiempo transcurrido desde la comisión del delito grave por el cual ha cumplido prisión previamente la persona imputada de delito, lo cual es un elemento importante en la consecución de la política pública que permea la determinación de la reincidencia. También el no considerar el tiempo transcurrido está reñido con la política pública enunciada en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que propugna a la rehabilitación moral y social del delincuente.

En Puerto Rico, la legislación habilitadora del derecho constitucional a la fianza se encuentra en las Reglas de Procedimiento Criminal, Reglas 6.1 y 218 a 228. Las mismas están orientadas a establecer un balance adecuado entre el interés del Estado en procesar a los delincuentes y el derecho del ciudadano a obtener su libertad provisional antes del juicio.

En cuanto al monto de la fianza, nos dice el Secretario, que la prohibición de fianzas excesivas en la Enmienda Octava de la Constitución de los Estados Unidos tiene el efecto de exigir que la cuantía o monto de la fianza no sea mayor que lo necesario para asegurar el interés gubernamental correspondiente, particularmente asegurar la comparecencia del acusado al juicio. También, hay que considerar, al determinar el monto de la fianza la condición económica del

imputado para cumplir con el principio constitucional de la igual protección de las leyes e impedir el discrimen por razón de pobreza. Esto evita que la fianza sea excesiva, y por tanto, inconstitucional.

Entiende que la Asamblea Legislativa también pudiera considerar el siguiente texto:

"Todo imputado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando se le impute la comisión de un delito grave y represente una amenaza para la seguridad de la comunidad, conforme se establezca por ley.

Resume su ponencia diciendo que, el enfoque en cuanto a la reforma de la institución de la fianza debe ir dirigida a armonizar el legítimo interés del Estado de proteger a la comunidad, reconociendo el peligro que una persona puede representar para otra u otras de quedar en libertad y el interés del ciudadano de que se garantice su libertad individual.

El Hon. Juez Castellanos se abstiene de emitir opinión sobre las ventajas o desventajas del proyecto en consideración. Sin embargo, aporta en su ponencia como magistrado una explicación de cómo funciona el Sistema de Fianza en el Tribunal Federal y por que se detienen acusados sin fianza.

Comienza explicándonos que el Artículo Núm. 8 de la Carta de Derechos de los Estados Unidos dice "No se impondrán fianzas excesivas..." Es el lenguaje sencillo el que ha permitido al Congreso el poder legislar para limitar ese derecho a cierto tipo de acusados en ciertos y específicos delitos. Las grandes controversias sobre fianza que ha surgido en el ámbito federal no se deben necesariamente a la referida disposición constitucional. Ellas se deben a la legislación aprobada por el congreso para darle vida a la misma (estas son la Constitución la otra el estatuto para poner(sic) en ejecución el ejercicio de ese derecho).

Explica que la intención del Congreso al aprobar la Ley de Fianzas de 1984, fue que las personas acusadas sean puestas en libertad con el menos número posible de condiciones restrictivas y sobre todo, que nadie sea detenido por razón de su situación económica. Además, que toda orden de detención a nivel federal es siempre emitida por un Juez, las razones tienen que exponerse por escrito, debe ser conforme a derecho, debe existir causa convincente que proceda la privación del derecho. El margen de discreción judicial esta específicamente establecido por la ley. Las detenciones no pueden ser selectivas, arbitrarias y mucho menos caprichosas.

Según el Juez Magistrado lo que le ha dado notoriedad a la detención sin fianza es el tipo de personas y casos que se aplica, que el grupo de delitos

es bien limitado pero el grupo de personas que lo compone es grande (Traficantes de drogas que suelen ser reincidentes y/o peligrosos....)

Nos dice que esta Ley de Fianza ha sido objeto de preocupación, críticas de muchos y elogios de otros. Señala que sin ella la disposición constitucional no hubiese podido ponerse en vigor y mucho menos detener a personas sin fianzas. Entiende que la prohibición absoluta del derecho a la fianza es inconstitucional.

Explica que no todos los casos son o pueden ser evaluados de igual forma, por lo que esta labor la realiza un grupo de profesionales adscritos al Tribunal que se conoce como la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Una vez la persona es arrestada y traída ante el Tribunal tiene que ser llevada a esta oficina para un extensa entrevista sobre su vida personal, relaciones con la comunidad, situación económica, salud física y mental, problemas de adicción a drogas, alcoholismo, empleo y ataduras en la comunidad, etc. Toda esa información es verificada y presentada al Magistrado en un informe escrito que contiene una recomendación de qué fianza debe ser impuesta o si la detención sin fianza se debe ordenar. El Magistrado puede o no adoptar las recomendaciones hechas. Todo acusado puede rehusar ser entrevistado. En toda petición de detención sin fianza se tiene que celebrar una vista pública dentro de los próximos tres días a partir de la primera comparecencia del acusado al tribunal,

más tarde de cinco días si es que el acusado necesita el tiempo para prepararse. Luego asiste al detenido el derecho a apelación ante el tribunal así como a la fiscalía, si es que una de las partes no está de acuerdo con la decisión judicial.

El Magistrado señala que la misma ley provee diferentes alternativas o combinación de alternativas para que la persona no quede detenida por razón de su condición económica, además la ley dispone las condiciones básicas para que una persona salga bajo fianza y provee penalidades adicionales por incumplir con las condiciones de libertad:

1.- Cometer un delito grave mientras esté bajo la jurisdicción del tribunal, puede conllevar una sentencia consecutiva de diez (10) años, si es un delito grave y el máximo de un año si éste fuera menos grave.

2.- Se expone a cinco (5) años de cárcel y/o 250 mil dólares de multa por intimidar o tratar de intimidar testigos, víctimas, jurado, informantes u oficial de la corte, así como obstruir una investigación criminal. También a diez (10) años de cárcel y/o 250 mil dólares de multa por tratar de relacionarse contra los testigos, víctimas o informantes, amenazarlos o tratar de amenazarlos.

3.- Si dejare de comparecer, esto es, darse a la fuga y luego lo arrestan, las penalidades corren desde diez (10) años de cárcel hasta dos (2) años y/o 250

mil dólares en casos de delito grave. En los menos graves, la pena sería 1 año y/o cien mil dólares.

Indica que estas advertencias de posibles comisiones de delitos así como condiciones de la libertad bajo fianza se le explican al acusado antes de salir en libertad.

Es la intención de él evitar que el acusado siga delinquiriendo, que afecte los procedimientos judiciales o que haga daño a las personas antes mencionadas.

También, el Tribunal está en libertad de imponer otras condiciones, como sería el uso de brazaletes electrónicos.

Nos enumera los casos en que se ordenará la detención sin fianza de una persona si no hay alternativas o combinaciones de ellas que aseguren su comparecencia y la seguridad de otras personas o la comunidad:

a) Crimen de violencia.

1. -Delito que tiene como elemento del delito el uso o la amenaza de uso de fuerza física contra una persona o propiedad ..

2. Cualquier otro delito que sea delito grave en que se haga uso de la fuerza física contra una persona o propiedad de otra.

b) En casos de cadena perpetua o en aquellos que conlleven la pena de muerte.

c) En aquellos casos de substancias controladas en que el término de encarcelación, si resulta convicta, exceda de 10 años.

d) Quien cometa un delito grave luego de haber sido convicto de dos o más delitos anteriormente mencionados, o que sean delitos estatales que se pùeden describir como federales y que al momento de cometerlos existía la jurisdicción federal.

e) Que exista riesgo de fuga.

f) Que la persona obstruya o trate de obstruir la justicia, que amenace, cause daños o intimide o trate de intimidar o causar daño a testigo o jurados.

Dice que de todos los cambios, el más novel es el permitir que en la determinación sobre la detención de un individuo se tome en consideración la "seguridad de la comunidad o de otras personas", vocablo que se equipara al peligro que representa que dicho individuo contiene cometiendo nuevos delitos si quedase en libertad o sucintamente expresado, su peligrosidad.

El entiende que el concepto "peligrosidad" no se define específicamente

en el estatuto. Las circunstancias de un caso sugiere en ocasiones una presunción de peligrosidad indicativas de la inclinación o disposición del individuo a recurrir a la violencia, por lo que se puede inferir que la persona representa un peligro para la sociedad aún cuando quede en libertad provisional bajo las condiciones más restrictivas posibles.

iii. La Hon. Zoraida Buxó, Secretaria de Corrección, sugiere que la resolución, sea re-evaluada de forma tal que en principio no se aparte del propósito fundamental que perseguimos todos a través de esta medida: proteger al ciudadano de aquel que representa un peligro para su vida; permitirle el disfrute de los derechos constitucionales a la vida, a su seguridad, a la búsqueda de su felicidad; devolverle el poder de la paz. Nos recomienda se adopte el texto de la propuesta enmienda presentada por el Ejecutivo que cumple con las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos y que lee de la siguiente manera:

Todo imputado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando se le impute la comisión de un delito grave y representa una amenaza para la seguridad de la comunidad, conforme se establezca por ley.

Indica que la Constitución de Puerto Rico establece la base de gobierno de una sociedad políticamente organizada y los principios de las que habrán de emanar las leyes que constituyen el ordenamiento. La Secretaria señala que es doctrina establecida en Puerto Rico que el criterio rector para la fijación lo es el de garantizar la comparecencia del imputado a los procedimientos judiciales.

Añade también que nuestra Constitución y el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos a la Asamblea Constituyente es parco con relación al alcance de derecho a la fianza y del mismo no se desprende un propósito ulterior.

Expresa que la política pública vigente establece una distinción entre el criminal violento y el no violento indicando además que nuestro pueblo vive atemorizado, nuestros niños crecen encerrados, nuestros parques, escuelas, áreas de relajamiento familiar, y nuestros hogares están siendo invadidos por la sombra del criminal, dice que Puerto Rico está siendo arropado por los efectos de un incremento alarmante en actos delictivos. Enfatiza que tenemos que tomar acción y proveer un recurso más para proteger la seguridad de nuestras comunidades y el futuro de Puerto Rico. Entiende que para lograr ésto, es imperativo que se varíe el enfoque vigente al derecho a la imposición de fianza donde no solamente sea un criterio la garantía de comparecencia sino que también lo sea la seguridad de la comunidad y la prevención de crímenes.

El proponer que de alguna manera se enmiende la ley habilitadora para restringir el derecho a la fianza según la Secretaria Buxó sólo acentuaría la situación que al momento se vive en los tribunales de Puerto Rico. Los jueces ante una situación donde un fiscal presenta evidencia en cuanto a la posible no comparecencia del imputado a su juicio, sólo tiene ante sí el recurso de imponer

una fianza alta, más no excesiva. Ante esta situación se presenta el fenómeno que sólo aquellos imputados indigentes son detenidos preventivamente mientras que un gran número de aquellos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, o que pertenecen a un sector económicamente privilegiado, poseen los recursos para salir en libertad bajo fianza. Explica que el ordenamiento contempla la detención preventiva únicamente para aquel que no puede prestar la fianza y no necesariamente para aquel que resulta una amenaza a la seguridad de la comunidad.

Entiende que es preciso modificar nuestro ordenamiento de modo que la detención preventiva sea una alternativa para el que constituya amenaza a la comunidad y no para el indigente que no pueda pagar por su libertad.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación ha implantado un sistema computarizado, según la Secretaria Buxó, de usos múltiples, uno de cuyos propósitos es recopilar y organizar datos que permitan analizar la composición de la población penal para fines estadísticos. Al presente, se cuenta con más de 8,700 expedientes de confinados sentenciados y más de 1,000 expedientes de confinados sumariados. A los fines de la información suplida en esta ponencia, se trabajo con 6,963 expedientes de sentenciado y 2,301 expedientes de sumariados que contenían toda la información requerida para el mismo.

La Secretaria Zoraida Buxó, solicitó a IDMS que produjera listados detallados de confinados sumariados y sentenciados ingresados por los siguientes delitos: Asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato, homicidio voluntario, tentativa de homicidio, agresión agravada, secuestro, tentativa de secuestro, robo, tentativa de robo, mutilación, violación (excluyendo la violación técnica) y tentativa de violación (excluyendo la violación técnica), del total de 6,962 expedientes escrutados para este informe, se encontraron 2,872 expedientes correspondientes a los delitos enumerados. La muestra de los sentenciados presentó un 12.33 por ciento de individuos que privaron de la vida a una persona. Buxó entiende que es de este tipo de individuo del que se quiere proteger al inocente, dándole al Pueblo la base constitucional sobre la cual se desarrollarán criterios para que un juez pueda evaluar la peligrosidad; el riesgo y la amenaza que representa a la comunidad un individuo que ha cometido un delito grave, aún por primera vez, previniendo de esta forma la comisión de más crímenes violentos.

iv. Según el Lcdo. Pedro Toledo, Superintendente de la Policía, en la jurisdicción federal existe legislación que contiene toda la reglamentación en torno a la fijación y prestación de fianza. Nos explica que originalmente esta se encontraba en la Ley Pública Número 89-465 del 22 de junio de 1966, según enmendada, conocida como "Bail Reform Act. of 1966". A tenor con las disposiciones de esta legislación, el desarrollo jurisprudencial recogió el precepto de que el propósito de la fianza era garantizar la comparecencia del acusado a los procedimientos judiciales. El 12 de octubre de 1984, esta legislación fue derogada y sustituida por el

"Bail Reform Act. of 1984"

La aprobación de esta medida, nos señala el Lcdo. Toledo, representó un cambio sustancial en el concepto de prestación y fijación de fianza, ya que además de utilizar el criterio de la comparecencia del acusado, también utiliza el criterio de riesgo de fuga y de peligrosidad.

Explica que el gran cambio sustantivo efectuado por la nueva ley fue la autorización explícita de la detención preventiva de un imputado pendiente de juicio, si se puede demostrar que no hay condición o combinación de condiciones para ponerlo en libertad y que razonablemente afecte la seguridad de una persona o de la comunidad, dice además que el Congreso de los Estados Unidos articuló una serie de razones para el cambio, y que éste estaba primeramente inquietado por "el alarmante problema con los crímenes cometidos por las personas que quedaban en libertad. Pero también reconoció que los acusados estaban siendo detenidos por el riesgo de la comisión de futuros crímenes. Esto usualmente era acompañado con la fijación de fianzas excesivas a los criminales peligrosos como subterfugio para así poder asegurar la detención preventiva a estos individuos.

El Superintendente indica que al mismo tiempo el Congreso claramente estableció que no intenta que la Ley de Fianza de 1984 resulte en la encarcelación al por mayor de los acusados antes del juicio. Por lo que la detención basada en el daño a otra persona o a la comunidad debe estar limitada a un pequeño pero identificable grupo de acusados particularmente peligrosos, a los cuales ni la imposición restrictiva para la libertad bajo fianza, ni la revocación prospectiva de la misma pueda razonablemente asegurar la comparecencia del acusado ni la seguridad de la comunidad o de alguna persona conforme dispone la propia ley.

El Lcdo. Toledo indicó que la ley también establece procedimientos rigurosos para regir el mecanismo por el cual puede dejarse en libertad o detenerse preventivamente a un imputado, además que, la Ley Federal en su Sección 3142 (f) requiere la celebración de una vista para determinar si las condiciones que puede imponer el magistrado, conforme a la ley, aseguran razonablemente la comparecencia del imputado y la seguridad de la persona afectada y de la comunidad en los siguientes casos:

a) cuando se imputa la comisión de un delito de carácter violento. (en las definiciones de la Ley se incluye una serie de delitos que se consideran violentos).

b) el delito imputado conlleva pena de reclusión perpetua o pena de muerte.

c) cuando el delito cometido constituye una violación a la Ley de Sustancias Controladas que conlleve una pena de reclusión de diez (10) años o más.

d) cuando la persona que comete un delito grave ha sido convicta previamente de dos o más delitos de los descritos en los incisos anteriores, ya sea en la jurisdicción federal como en la estatal.

Explica que cuando se lleva a cabo la referida vista el funcionario judicial tiene ante sí otras alternativas, además de ordenar la detención preventiva del imputado. Puede imponerle fianza y estar sujeto o no a una serie de condiciones que imponga el tribunal. Expresa que no obstante, la ley dispone que no podrá imponer una condición económica que resulte en la detención preventiva y faculta al funcionario para enmendar la orden a fin de imponer condiciones adicionales o diferentes. También provee para la detención temporal del imputado a fin de permitir la revocación de libertad condicional, la deportación o para impedir la entrada del imputado al país conforme dispone la Ley de Inmigración.

Además de las protecciones procesales que nos mencionó anteriormente, el Superintendente Toledo, indicó que el Congreso ha provisto una serie de factores para que el juzgador considere al ordenar la detención y que estos son:

1- la naturaleza y circunstancias del delito imputado, incluyendo si es un delito de violencia o si esta relacionado con drogas narcóticas;

2- el peso de la evidencia contra la persona;

3- el historial y características del imputado incluyendo su carácter, condición física y mental, nexos familiares, empleo, recursos económicos, duración de residencia en la comunidad, nexos con la comunidad, conducta pasada, historial relacionado al abuso de drogas y alcohol, historial penal y sobre comparecencias judiciales;

Deberá, según el Superintendente tomar en consideración si al momento del arresto o la comisión del delito, la persona se encontraba en probatoria o libertad bajo palabra, u otra forma de libertad mientras se encuentra pendiente de juicio, sentencia, apelación o cumplimiento de sentencia por un delito bajo la ley federal, estatal o local;

4- la naturaleza y seriedad del peligro que representaría la liberación de la persona para cualquier persona o para la comunidad.

El Lcdo. Toledo explica, que el historial legislativo de la ley aclara que el peligro no sólo significa de daño físico sino también intenta incluir los no físicos, nos dice que el Congreso específicamente indica que el riesgo de que un imputado continúe en el tráfico de drogas constituye un peligro para la seguridad de cualquier persona o de la comunidad. Añade que el historial dispone que el Congreso ha notado que a menudo las personas acusadas por delitos graves en violación a la ley de sustancias controladas, en especial de importación o

distribución de dichas sustancias, debido a la naturaleza de la actividad criminal que se le imputa, poseen un riesgo significativo de reincidir en tal conducta antes del juicio.

El Lcdo. Toledo, en referencia al texto de la medida propuesta, indica estar de acuerdo con el análisis del Secretario de Justicia, dice que ciertamente el texto propuesto priva al imputado de cualquier delito grave del derecho a la fianza por esa única razón sin considerar el tiempo que haya transcurrido desde la comisión y convicción por dicho delito. Además, indica que tampoco toma en consideración el delito por el cual haya sido convicto y cumplido prisión, toda vez que hay un amplio número de delitos clasificados como graves que no necesariamente implican peligrosidad social. Indica que hay delitos menos graves en los que el imputado puede representar un peligro para la seguridad de la comunidad, tampoco toma en consideración un primer ofensor que cometa delitos graves de violencia como una masacre.

El Superintendente sostuvo que la aplicación del texto propuesto a un imputado puede resultar en su aplicación inconstitucional bajo nuestra Constitución y la Constitución Federal.

El Lcdo. Toledo, hace mención de el caso U. S. v. Salerno supra, donde se sostuvo la constitucionalidad del "Bail Reform Act" y se estableció que la medida de privación de libertad antes del juicio u la convicción guarde la debida proporción con el interés social apremiante perseguida por el estado. Dice que el interés del Estado para garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos, esto es de la comunidad, bajo ciertas circunstancias puede ir sobre el interés en la libertad del individuo. La privación de libertad del imputado es un fin legítimo del estado para garantizar la comparecencia del acusado, evitar su fuga y para

defender a la sociedad de un individuo peligroso. Especifica que para aplicar estos preceptos la ley establece unas salvaguardas procesales para una adecuada determinación de lo que constituye peligrosidad, de igual forma contiene unos parámetros específicos para determinar en que situaciones, o circunstancias habrán de ser aplicadas.

Expone que cualquier legislación que se fuere a considerar favorablemente por esta Honorable Asamblea Legislativa debe tomar en consideración los preceptos antes mencionados, pues ya han pasado el escrutinio judicial y se ha determinado que garantizan los derechos contenidos en la Constitución Federal, los cuales también están contenidos en nuestra Constitución.

Entiende que la limitación del derecho a la fianza, sujeto a salvaguardas procesales que garanticen los derechos de los imputados de acuerdo a los preceptos

constitucionales, en aquellos delitos que la legislatura determine, constituyen otra herramienta útil para combatir y prevenir el crimen, y más aún para prevenir el daño que por la acción de un sujeto peligroso puede causarse a otro ciudadano, a un tercero inocente o a la propia comunidad.

El Superintendente expresó que la importancia del concepto de peligrosidad y dice que la acción de enmendar la Constitución para incluir el concepto de peligrosidad y estableciendo mediante legislación, los salvaguardas procesales necesarios e inclusive especificando la clasificación de delitos en los cuales el tribunal podrá aplicar la excepción a la privación de libertad, les parece la más razonable ya que le brinda mayor flexibilidad a la Legislatura para actuar en caso de que sea necesario excluir o incluir delitos graves serios. De igual forma, permite una aplicación uniforme del derecho a fianza a todos los afectados.

El Lcdo. Toledo señaló la conveniencia de establecer un procedimiento de vistas de fijación de fianza, similar a la jurisdicción federal. Especificó que para esto es necesario contar con la infraestructura de recursos.

El Superintendente examinó el texto propuesto por el Honorable Pedro Figueroa el cual propone incluir, en la propia enmienda a la Constitución, unos delitos determinados a los cuales les aplicará la excepción. Aunque en la enmienda a la Constitución pueden incluirse estos delitos, el Superintendente entiende que esto no es lo más conveniente y en su ponencia explica la razón.

V. Para la Administración de los Tribunales resulta de especial interés el efecto que podría tener el lenguaje de la enmienda si es el de limitar irrazonablemente el derecho a fianza y además no que no tomase en cuenta el tiempo transcurrido desde que se cumplió en prisión el delito imputado.

La Rama Judicial hace algunas observaciones desde el punto de vista del impacto que podría tener en nuestros tribunales y en el logro de unos procedimientos judiciales rápidos, liberales y flexibles.

La Lcda. Bauermeister presenta y explica las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 preceptúan las normas sobre fianza, establecen cuando se exige, los criterios para su fijación y modo de revisarla, los aspectos que garantiza, los requisitos de los fiadores y su debida comprobación, el depósito del importe de la fianza en efectivo y la sustitución de ésta por aquél, el modo de exonerar a los fiadores respecto a la fianza prestada, la responsabilidad de éstos respecto a las costas y multas, el procedimiento de confiscación y cuando se puede arrestar a un acusado que ha prestado fianza. La Directora explicó que estas reglas constituyen el eje central alrededor del cual gravita el poder o facultad de los tribunales de instancia para fijar, aceptar y revisar la prestación de fianzas en casos criminales.

Explica la Administradora de Tribunales que el texto del proyecto en cuestión

así como cualquier otro que permita el que se pueda detener preventivamente, como ocurre en la jurisdicción federal bajo el "Bail Reform Act", debe tomar en cuenta los recursos con que cuenta nuestro sistema de administración de justicia.

La Directora hace mención de un informe publicado en 1989 por la División de Estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales el cual reflejó que la mediana de tiempo transcurrido entre el arresto y el primer señalamiento de vista preliminar es de 13.5 días laborables, que transcurre un período de 34.2 días laborables desde el arresto al acto de lectura de acusación, y desde el arresto o citación al inicio del juicio transcurre un promedio de 73.7 días laborables.

Ella recomienda que evaluemos el impacto y las dificultades que aportará a la administración de justicia un aumento de personas detenidas sin derecho a fianza, a la luz de la Regla 64 (n) (3) de Procedimiento Criminal de 1963 que requiere que el juicio de una persona detenida se celebre dentro de los sesena días de haberse presentado la acusación.

La Directora señaló que la aprobación de esta medida supone la existencia de un sistema de información completo, eficiente y confiable que provea al juez los datos del historial criminal, y que al presente nuestro sistema no cuenta con este recurso. Reconociendo que el juez depende de la información que le provean otros componentes del sistema de justicia criminal para poder hacer su determinación sobre modificación de fianza, esta expresó su inquietud en torno a quién proveerá la certificación relativa a la reclusión en prisión previa del imputado por delito grave y si se podrá fundarse tan sólo en la evidencia testifical del agente policíaco, del perjudicado, en el contenido de la denuncia y en declaraciones juradas que se sometan. La Directora reconoció que el Sistema de Información de Justicia Criminal que está adscrito al Departamento de Justicia, ha confrontado serias dificultades que le han impedido desarrollarse y cumplir con su cometido. Además, señaló que el problema reside en la falta de comunicación directa entre los sistemas de información computadorizados de las agencias que componen el sistema y el repositorio, lo cual resulta en serias deficiencias que afectan elementos tan importantes como la identificación de los individuos. La Directora señaló su preocupación por la incapacidad del Sistema de Justicia Criminal en proveer información confiable y con premura en cuanto al historial delictivo de los imputados se refiere, ya que esta situación dificultaría tomar las determinación de permitir la detención preventiva a base de sus historiales delictivos.

vi. El Comité en Defensa Derechos Ciudadanos, reafirma su posición de No Respaldo a la propuesta enmienda al derecho absoluto a la fianza de la Constitución del E.L.A. de Puerto Rico. Igualmente, a la limitación o eliminación de cualquier derecho constitucional de ésta, especialmente su Carta de Derechos, ya sea acción directa legislativa o como consecuencia de la tangencia e integración de los derechos entre sí.

El Comité explicó , que la Constitución es un contexto de derechos inherentes uno al otro. Señalo que cualquiera que se limite o elimine impacta adversamente sobre los demás. El Comité se opone al intento de aislar el derecho absoluto a la fianza de otros derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

El Comité en Defensa Derechos Ciudadanos, indicó que el juego de palabras, posibles significados legales, expresiones orales no escritas, interpretaciones teóricas y técnicas, citas aisladas de experiencias en otros países, especialmente los Estados Unidos de América, para respaldar enmiendas constitucionales o eliminación de derechos civiles, se estrellan ante la realidad del poder del pueblo en su constitución y de su capacidad y fortaleza para retenerlo, no dejarse engañar y utilizarlo contra los desmanes del abuso de poder del gobierno y de sus posibles errores.

vii.Sección 11, Artículo II, Constitución de Puerto Rico.

viii.Ley Orgánica Jones, 1 L.P.R.A., Sec. 2, Pág. 62.

ix.Según lo establecido por nuestro Tribunal Supremo en los casos de Pueblo v. Ortíz, 76 DPR 247 (1954) y Sánchez v. González, 78 DPR 849 (1955), una vez transcurra dicho término de seis meses, el acusado tiene derecho a ser excarcelado sin fianza, en espera de ser juzgado.

x.id.

xi.id.

xii.in.

xiii.Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

xiv.id.

xv.id.

xvi.id.

xvii.id.

xviii.id.

xix.Pueblo v. Pillot, 19 D.P.R. 264 (1913). El Tribunal Supremo señaló en dicho caso con respecto a las fianzas excesivas que:

"Es un principio bien establecido el de que no se deben exigir fianzas excesivas, porque ello equivaldría a impedir el

cumplimiento de la Ley que permite la libertad provisional de los acusados, con la excepción que la misma ley establece. El hecho de que no exigirá al estado una fianza excesiva constituye una garantía constitucional. La fianza no deberá fijarse en una suma excesiva pues de ser así, esto equivaldría en substancia a una negativa de dicha fianza de acuerdo con el precepto constitucional."

xx. Ex parte Ruef, 96 Pac. 24, citado en Marrero v. Pueblo, 31 D.P.R. 901, Pág. 902, (1923).

xxi. Stack v. Boyle, 342 U.S. 1 (9151), según citado en Pérez v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 930, Pág. 933, (1951).

xxii. Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265, Págs. 266 y 267, (1979).

xxiii. American Jurisprudence, Vól. 6, Sección 61, Pág. 75, citado en Ex Parte Collazo, supra, Pág. 113.

"CAPACIDAD FINANCIERA DEL ACUSADO: En un caso claramente admisible a fianza por la ley, el requerir una fianza mayor que la que el preso puede prestar, es, en efecto, una negativa de fianza y una violación del precepto constitucional contra fianzas excesivas. Sin embargo, una fianza que no parece excesiva si se mide por la naturaleza del delito, no se convierte en excesiva por la mera incapacidad del acusado para conseguir fianza por la cantidad exigida. Indudablemente, el alcance de la capacidad pecuniaria del acusado para dar la fianza es una circunstancia entre otras que debe ser considerada para fijar la cantidad que ha de requerirse, pero no es la que impera, de lo contrario, el hecho de que el acusado no tenía bienes propios ni amigos que pudieran o quisieran fiarle, aun por la suma más pequeña, constituiría un caso de fianza excesiva y daría derecho al acusado a ser puesto en libertad bajo su propia responsabilidad.... Precisamente dónde debe tirarse la línea entre la fianza razonable bajo todas las circunstancias del caso y la fianza alta fuera de razón, parece ser un asunto que depende de la discreción de la Corte, para ser decidido por ésta a la luz de los hechos y circunstancias del caso individual."

"El hecho de que la peticionaria no tenga recursos suficientes para presentar la fianza que se le exige no es por sí solo bastante para que intervengamos reduciendo la fianza. Pudiera suceder que la gravedad del delito y las circunstancias que concurrieron a su comisión fueran de tal naturaleza que si las conociéramos tuviésemos que llegar a la conclusión de que la fianza que se ha fijado no es excesiva."

xxiv. Waldin v. Feliciano, Alcaide de Cárcel, 62 D.P.R. 212, (1943).

xxv. El Tribunal Supremo reiteró que:

"La prueba de no tener recursos suficientes para prestar la fianza exigida, por completa y convincente que sea, no es por sí sola suficiente para intervenir, por medio de hábeas corpus, con la discreción judicial y reducir la fianza fijada."

xxvi. Pueblo v. Negrón Vázquez, supra, Pág. 267.

xxvii. Ver las Reglas de Procedimiento Criminal números 6, 6.1, 218 según enmendada por la Ley 139, aprobada en 23 de julio de 1974, a la Regla 228.

xxviii. id.

xxix. Resolución de 8 de febrero de 1966.

xxx. Informe de la Comisión de lo Judicial, Diario de Sesiones, 1966, pág. 1944.

xxxi. id. ver nota al calce Núm.21.

xxxii. Regla 218 (c) (1).

xxxiii. A tales efectos, el inciso (c) de la Regla 218, establece:

"(c) Imposición de condiciones. Sujeto a lo dispuesto en la Regla 6.1 (a), (b) y (c) podrán imponerse una o ambas de las siguientes condiciones:

- (1) Quedar bajo la responsabilidad de otra persona de reconocida buena reputación en la comunidad, o bajo la supervisión de un oficial probatorio y otro funcionario que designe el tribunal. El tribunal determinará el grado y manera en que se ejercerá la supervisión y la persona que actúe como custodio vendrá obligada a supervisarle, producirle en corte e informar de cualquier violación a las condiciones impuestas.
- (2) No cometer delito alguno durante el período en que se encuentre en libertad ni relacionarse con personas que planifiquen, intenten cometer o cometan actos delictivos.
- (3) Conservar el empleo, o de estar desempleado, hacer gestiones para obtenerlo.
- (4) Cumplir con determinados requerimientos relacionados a su

lugar de vivienda o la realización de viajes.

- (5) Evitar todo contacto con la alegada víctima del crimen o con testigos potenciales.
- (6) No poseer armas de fuego o cualquier otra arma mortífera.
- (7) No consumir bebidas alcohólicas o drogas narcóticas o cualquier otra sustancia controlada.
- (8) Someterse a tratamiento médico o psiquiátrico, incluyendo tratamiento para evitar la dependencia a drogas o bebidas alcohólicas.
- (9) No abandonar su lugar de residencia, vivienda o vecindad en determinados días y horas para preservar su seguridad o la de otros ciudadanos.
- (10) Entregar al magistrado u otra persona que éste designe el pasaporte o cualquier otro documento que acredite la residencia o ciudadanía del imputado.
- (11) Cumplir con cualquier otra condición razonable que imponga el tribunal.

Las condiciones impuestas de conformidad a esta regla no podrán ser tan onerosas que su observancia implique una detención parcial de acusado.

XXXIV. Establece la Regla 228 de Procedimiento Criminal, según enmendada lo siguiente:

"Regla 228;- CONDICIONES; FIANZA; ARRESTO DEL ACUSADO

Se ordenará el arresto del acusado a quien se han impuesto condiciones o que ha prestado fianza o hecho depósito en los siguientes casos:

(a) Cuando se ha violado cualquiera de las condiciones impuestas o de las condiciones de la fianza o depósito.

(b) Cuando los fiadores, o cualquiera de ellos, hayan muerto, o carezcan de responsabilidad suficiente, o dejen de residir en Puerto Rico.

(c) Cuando se deje sin efecto la orden permitiendo libertad bajo condiciones o fianza en apelación ante el Tribunal Supremo.

Si la orden decretando el arresto se dictare en condiciones que el acusado tuviere que someterse a nuevas condiciones o tuviere derecho a prestar nueva fianza bajo estas reglas, se fijarán en la orden las nuevas condiciones o el importe de la nueva fianza, en su caso. La orden expresará los fundamentos para el arresto; dispondrá que lo verifique cualquier alguacil, policía u otro funcionario de autoridad a quien hubiere correspondido su custodia de no haberse impuesto condiciones o de no haberse prestado fianza originalmente, hasta tanto fuere legalmente excarcelado."

xxxv.H. Padilla, Las propuestas enmiendas constitucionales al derecho a la fianza y las razones por las cuales estas no se materializa, 22 Rev. Der. Puer. 3 (1982).

xxxvi.id.

xxxvii.id.

xxxviii.id., págs 608-609.

xxxix.id., pág. 608.

xl.Id.

xli.Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishment inflicted."Const. E.E.U.U. Enmda. VIII.

xlii.18 U.S.C.A. 3141 et seq. (1966).

xliii.La Enmienda Octava de nuestra Constitución Nacional solo establece que:

"No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni castigos crueles e inusitados."

xliv.Bail Reform Act, Sección 3142 (e).

xlv.Las circunstancias son cuando:

(1) La persona ha sido convicta por un delito federal según descrito en la subsección (f) de la ley, o por un delito estatal o local....,

(2) El delito descrito en el párrafo anterior (1) fue cometido mientras estaba libre bajo fianza; y

(3) Un período de no más de cinco años ha transcurrido desde la convicción o la extinción de la condena, por un delito descrito en el párrafo (1). (Traducción nuestra).

xlvi.U.S. v. Salerno, 481 U.S. 729, 107 S ct. 2095 (1987).

xlvii.U.S. v. Hazzard, 598 F.Supp. 1442 (1984), fue el primer caso donde se cuestionó la constitucionalidad del "Bail Reform Act 1984".

xlviii."Detention simply to deter the commission of crime can properly occur only after conviction." U.S. v. Salerno, supra.

xlix.S. Rep. No. 98-225, Pág. 3 (1983).

- l. Posición del Hon. Secretario de Justicia, Pedro Pierluisi.
- li. Black's Law Dictionary, 312-313.
- lii. PRTC v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).
- liii. Pueblo v. Santos Vega, 115 D.P.R. 818 (1984).
- liv. La Sección 19 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dispone:

"La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, o no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo".
- lv. P.I.P v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988), con apoyo de Triás Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol. III, (Ed. U.P.R., 1982) a la Pág. 209.
- lvi. id., Pág. 624.
- lvii. Veánse, Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972) y Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).
- lviii. Véase la Regla 131 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 131.
- lix. Véase, Maryland v. Craig, 110 S. CT. 3157 (1990).
- lx. U.S. v. Valenzuela, 458 U.S. 858 (1982) y Pueblo v. Lausell, 88 J.T.S. 121.
- lxi. Véase nota al calce núm. 7, R. 252.1 y 252.2 de las de Procedimiento Criminal (34 L.P.R.A. Ap. II R. 252.1 y R. 252.2).
- lxii. Véase, Blanton v. City of North Las Vegas, 489 U.S. 538 (1989).
- lxiii. Véase, Viajes Lesana v. Saavedra, 115 D.P.R. 703 (1984).